

POLÍTICA PÚBLICA DE  
**LIBERTADES**

**FUNDAMENTALES DE**

**RELIGIÓN, CULTO Y  
CONCIENCIA PARA  
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

**2018-2028**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE GOBIERNO

**POLÍTICA PÚBLICA DE  
LIBERTADES  
FUNDAMENTALES DE  
RELIGIÓN, CULTO Y  
CONCIENCIA PARA  
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

---

**2018-2028**

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE GOBIERNO

**POLÍTICA PÚBLICA DE LIBERTADES  
FUNDAMENTALES DE RELIGIÓN, CULTO  
Y CONCIENCIA PARA BOGOTÁ DISTRITO  
CAPITAL  
2018-2028**

**ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO**

Alcalde Mayor de Bogotá

**MIGUEL URIBE TURBAY**

Secretario de Gobierno

**MARÍA ADELAIDA PALACIO PUERTA**

Subsecretaria para la Gobernabilidad y  
Garantía de Derechos

**CRISTIAN FRANCISCO PULIDO ACUÑA**

Director de Derechos Humanos

**MARDORY LLANOS CORTÉS**

Subdirectora de Asuntos de Libertad  
Religiosa y de Conciencia

**Apoyo en la redacción de textos**

Subdirección de Asuntos de Libertad  
Religiosa y de Conciencia

Andrés Felipe Gutiérrez Vargas  
Alcira Herrera Gualteros  
Paula Andrea Beltrán Rodríguez  
Miguel Ángel Suárez Galvis  
Mardory Llanos Cortés

Oficina Asesora de Planeación  
Lorena Calderón Martínez

**Preparación editorial, diseño y  
producción**

Oficina Asesora de Comunicaciones

**LINA GONZÁLEZ RINCÓN**

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

**Diseño y Diagramación**

Andrés Caro Lagos

**Edición y corrección de estilo**

Sandra Milena Ramírez Martínez

Bogotá, D.C., 2018.

## **AGRADECIMIENTOS**

La Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para Bogotá Distrito Capital no sería una realidad sin los ingentes esfuerzos y la voluntad incondicional de las múltiples iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros presentes en Bogotá, que a lo largo de cuatro años acompañaron, alentaron e incidieron con fecundos aportes, reflexiones y análisis desde la concepción misma de la iniciativa hasta su formulación. Meritorio reconocimiento profesamos a la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación Universitaria Monserrate y la organización global World Vision, que aportaron invaluable insumo técnico, académico y cognitivo a partir de los cuales se fueron allanando caminos y ampliando saberes en el curso de un trayecto sinuoso y en buena medida inexplorado.

A todos ellos nuestro aprecio y agradecimiento entrañables.

## RESUMEN EJECUTIVO

Reconocer la diversidad religiosa es aceptar la multiplicidad de formas en que las personas vemos y comprendemos el mundo, y por ello involucra en el sentido más esencial nuestra vivencia de los Derechos Humanos. De ahí que la administración del alcalde Enrique Peñalosa, comprometida en garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos fundamentales de toda la población residente en la ciudad, haya materializado la creación de una política pública que protege las libertades de religión, culto y conciencia mediante la sanción del Decreto Distrital 093 del 12 de febrero de 2018.

Por primera vez un ente territorial adopta medidas y mecanismos institucionales, de mediano y largo plazo, indispensables para el ejercicio real, igualitario y plural de los derechos de libertad religiosa, de cultos y conciencia, amparados en Colombia por la Constitución Política de 1991, desarrollados legalmente por la Ley Estatutaria 133 de 1994 e incorporados al bloque de constitucionalidad mediante la ratificación de instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969).

La política distrital surge como iniciativa ciudadana en el primer Foro Distrital por los Derechos de Libertad de Religión, Culto y Conciencia (2014), donde confluyen las distintas comunidades religiosas de la ciudad y la Secretaría Distrital de Gobierno, con el fin de construir e implementar estrategias para acercar dichas comunidades al Estado, visibilizar y afirmar la diversidad religiosa y defender el ejercicio pleno de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en Bogotá.

Se trata entonces de una iniciativa de cuño participativo y pluralista que integra diversos sectores administrativos del Distrito Capital: Educación, Mujer, Planeación, Gestión Pública, Integración Social, Seguridad, Salud y Gobierno, bajo el propósito de desarrollar estrategias comunes que conviertan los derechos fundamentales de religión, culto y conciencia en una realidad plenamente efectiva para la población bogotana.

El proceso de construcción de la política se edificó en torno a varios aspectos complementarios, que abarcan primero, una revisión de los diferentes instrumentos jurídico-normativos que consagran y reglamentan las libertades de religión, culto y conciencia desde los ámbitos nacional e internacional. Segundo, un repaso por los factores históricamente determinantes en la inserción, práctica y asimilación de diferentes confesiones religiosas en el contexto latinoamericano.

Tercero, un componente de diagnóstico cualitativo y cuantitativo elaborado por el Observatorio de la Diversidad Religiosa la Universidad Nacional de Colombia en Convenio con la Secretaría Distrital de Gobierno, que da cuenta de la existencia de problemáticas relacionadas con intolerancia y persecución religiosa, discriminación, conflictos de convivencia que se producen en torno a las celebraciones de culto, y obstáculos que enfrentan las comunidades religiosas en el desarrollo de sus labores sociales. Cuarto, una identificación de los diferentes actores sociales e institucionales involucrados en la materia sobre la que se asienta la política. Y quinto, un marco conceptual que ubica las principales nociones y categorías para el análisis, la interpretación y comprensión de lo referente al hecho religioso, desde el punto de vista teórico y fáctico.

A partir de las problemáticas y aspectos enunciados, la política pública se encauza hacia el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: disminuir factores que alimentan la intolerancia y persecución fundados en la religión; garantizar el goce efectivo de los derechos de todas las confesiones religiosas en condiciones de igualdad; y asegurar la articulación y coordinación de proyectos sociales, entre entidades religiosas, organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional, e instancias estatales del orden distrital y nacional.

Asumir los propósitos y los retos de esta política implica entonces una interiorización de las libertades fundamentales como derechos humanos, así como un acercamiento al universo conceptual de la religión y la conciencia, que junto a los recientes desarrollos jurisprudenciales sobre libertad de religión y objeción de conciencia en Colombia, se van nutriendo con un contenido cada vez mayor en extensión y complejidad.

La Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para Bogotá Distrito Capital 2018-2028, concebida desde este amplio marco de reflexión, constituye un aporte fundamental en la materialización de un Estado Social de Derecho. Por ello, su implementación requiere de la concertación y definición intersectorial de un plan de acción que materialice los propósitos ya planteados, y contribuya cada día a fomentar e inculcar el respeto por las ideas, creencias y opiniones individuales y colectivas como paso ineludible para la construcción de la paz y la convivencia en la Nueva Bogotá.



# TABLA DE CONTENIDO

<b>Prólogo .....</b>	<b>8</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>11</b>
<b>1. Decreto 093 del 12 de febrero de 2018 "por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital." .....</b>	<b>14</b>
<b>2. Documento Técnico Soporte de la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para Bogotá Distrito Capital. ....</b>	<b>28</b>
<b>Sección A.....</b>	<b>28</b>
2.1 Preámbulo de contexto.....	28
2.2 Acercamiento legal: Marco Normativo.....	31
<b>Sección B.....</b>	<b>83</b>
2.3 Pertinencia de la Política Pública.....	83
2.4 Trayectoria de la iniciativa.....	87
2.5 Marco institucional.....	89
2.6 Marco contextual.....	92
2.7 Árbol de problemas.....	123
2.8 Análisis de alternativas.....	127
2.9 Marco conceptual.....	128
2.10 Análisis de actores.....	161
<b>Sección C.....</b>	<b>170</b>
2.11 Objetivos de la Política Pública.....	170
2.12 Principios y enfoques .....	170
2.13 Líneas estratégicas.....	174
2.14 Orientaciones para la implementación de la política.....	175
<b>Bibliografía.....</b>	<b>176</b>
<b>Anexos.....</b>	<b>182</b>
<b>Anexo 1.</b> Así se consolidó la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia en Bogotá (Infografía).....	182
<b>Anexo 2.</b> Indicadores cuantitativos sobre intolerancia, discriminación y persecución religiosa, objeción de conciencia por motivos religiosos y proyectos sociales de las comunidades religiosas en el Distrito Capital (2016). ....	184



## PRÓLOGO

La Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para Bogotá Distrito Capital, que hoy tenemos la satisfacción de presentar a la ciudadanía bogotana, es el resultado de un notable esfuerzo mancomunado en el que han confluído las comunidades religiosas de las múltiples confesiones de fe en la ciudad y la Secretaría Distrital de Gobierno bajo un único propósito convergente: la protección, promoción y defensa de los derechos fundamentales enunciados en su título.

Esta política, además de dar cumplimiento expedito a una de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 "Bogotá Mejor Para Todos", destaca por ser una iniciativa inédita, sin precedentes en Bogotá o en ente territorial alguno de la extensa geografía nacional. Más allá de las dificultades que eso ha interpuesto a su proceso de formulación, lo entendemos como una oportunidad inmejorable de construir, innovar y crear nuevos escenarios y posibilidades, dentro de los cuales estén incluidos actores, sectores y temáticas históricamente ignorados o marginados de la agenda y los procesos públicos de toma de decisiones para la garantía de los derechos humanos, amparados en el ordenamiento jurídico nacional como en instrumentos de derecho internacional universalmente reconocidos.

Es creciente la evidencia histórica y sociológica que nos revela las cruentas y devastadoras consecuencias padecidas por la humanidad a causa de la intolerancia, la persecución y la discriminación por motivos religiosos, que se han manifestado con singular intensidad en nuestro país desde su tránsito a la vida republicana. Las guerras civiles del siglo XIX, la Guerra de los Mil Días (1899-1902), las hegemonías conservadora y liberal de primera mitad del siglo XX, la violencia bipartidista de mediados del siglo XX, el conflicto armado de los últimos cincuenta años han sido periodos de la historia nacional tristemente signados por episodios de profundas rivalidades por cuenta de las cuales la libertad religiosa ha resultado fuertemente lacerada, coartada o simplemente eliminada.

Felizmente, esos tiempos aciagos comienzan a extinguirse, hoy las libertades de religión, culto y conciencia no solo están consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; también se han encumbrado como derechos fundamentales en nuestra Carta Constitucional, con su correspondiente reglamentación legislativa mediante la Ley Estatutaria 133 de 1994. Hoy podemos decir honrosamente que el Distrito Capital suma un aporte significativo mediante la adopción e implementación de esta política pública, cuyo contenido, orientación y propósitos condensan la voluntad y el compromiso de la Administración Distrital con el fin supremo de promover, garantizar y defender las libertades de religión, culto y conciencia de los residentes en nuestra ciudad desde un enfoque pluralista y participativo.

Lugar propio otorga la política a la labor social y humanitaria que han prodigado las comunidades religiosas a poblaciones desposeídas en contextos de alta vulnerabilidad y conflicto. Sus iniciativas en favor de la paz, la convivencia, la reconciliación y la superación de desigualdades sociales, además de constituir una de las vertientes naturales del libre ejercicio de sus convicciones y su credo, son referentes de genuino y ejemplar altruismo, sin duda inspirador para ciudadanos e instituciones públicas.

Otro de los alcances logrados con la política estriba en el reconocimiento de la espiritualidad como una dimensión innegable e imprescindible de la existencia humana, que la vincula con vivencias, experiencias, emociones, creencias íntimas y trascendentes no limitadas a la inmediatez de la realidad materialmente tangible. Hace parte constitutiva e integral de la dignidad de toda persona, por tanto, configura un elemento cuya salvaguarda debe procurarse y garantizarse en todos los órdenes: desde el más amplio del tejido social y comunitario hasta el institucional de las organizaciones de la administración pública.

Un desafío notable, un derrotero por labrar y transitar nos allana esta política pública: el ejercicio real y efectivo de la libertad y la objeción de conciencia. Afrontarlo no será tarea fácil, si consideramos que se trata de un derecho cuyo contenido, abordaje y desarrollos aún están en emergente construcción desde campos tan diversos como la filosofía, las ciencias jurídicas, las humanidades e incluso la neurociencia. Tampoco disponemos de antecedentes en el campo administrativo público frente a su tratamiento, regulación y aplicación, sin desmedro de la creciente jurisprudencia que ha producido la Corte Constitucional colombiana en la materia.

Aun conscientes de que gran parte del conocimiento y experiencia en este ámbito está por adquirirse, ello no declina en modo alguno el compromiso que suscribe hoy el Distrito con la presentación oficial de esta política pública, en la que encauza lo mejor de su recurso humano, técnico, financiero, administrativo y organizativo por la senda que conduce a garantizar a ciudadanos y ciudadanas el goce pleno y efectivo de las libertades de religión, culto y conciencia.

Este es el inicio de un recorrido largo y en buena medida inexplorado, que pone ante nuestros ojos un abigarrado paisaje poblado por una pluralidad de corrientes, movimientos, confesiones, prácticas, ritos, doctrinas y paradigmas coexistentes, cuyas diferencias, antes que restar, aportan un invaluable y fecundo patrimonio cultural y moral que concierne a todos cuidar y preservar. La Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia es un puente tendido en esa dirección.

## INTRODUCCIÓN

La Política Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, surge por iniciativa de un grupo de líderes religiosos de Bogotá, a partir de la realización del *Primer Foro Distrital de Derechos de Religión, Culto y Conciencia*, llevado a cabo en mayo del año 2014. El foro contó con la participación de 350 personas pertenecientes a más de un centenar de confesiones religiosas, denominaciones, asociaciones de ministros y delegaciones de iglesias provenientes de Antioquia, Armenia, Barranquilla y Cali, además de las radicadas en Bogotá.

Este escenario propició el diálogo entre musulmanes, judíos, cristianos, católicos, adventistas, presbiterianos, pentecostales, ortodoxos, anglicanos, asambleístas, bautistas, metodistas, menonitas, luteranos, budistas, mormones, entre muchas otras confesiones e iglesias participantes. Los paneles y conversatorios se adelantaron en torno a los siguientes temas: análisis socio jurídico de la legislación vigente sobre libertad religiosa, de culto y conciencia; contribuciones a la paz y la justicia social desde las Organizaciones Basadas en la Fe; Conversatorio mujer y religión; y, por último, el Conversatorio sobre transformación social desde las comunidades religiosas.

De igual modo, el foro alentó espacios de deliberación con los participantes en mesas de trabajo distribuidas temáticamente así: i) Contenido, alcances y conflictos preexistentes en la legislación sobre libertad e igualdad religiosa, conciencia y culto; ii) La dignidad humana y el individuo por encima de las desigualdades sociales; iii) Estrategia pedagógica para la formación en Derechos Humanos con enfoque en los derechos de libertad de religión, culto y conciencia; iv) Las comunidades religiosas como actores sociales claves en la transformación de su entorno; v) Plan maestro de equipamiento de culto y control de normas urbanísticas; y vi) Plan de incidencia. Además, durante el evento tuvo lugar la *Primera Muestra del Impacto Social de las Organizaciones Basadas en la Fe*, bajo el propósito de visibilizar las acciones de las comunidades religiosas en el campo social.

Tal como se indica, la primera de las mesas versó en torno al “Contenido, alcances y conflictos preexistentes en la legislación sobre libertad e igualdad religiosa, conciencia y culto”. En ella los representantes de diversas confesiones y comunidades religiosas determinaron la necesidad de adelantar acciones por parte de las autoridades públicas para proteger y garantizar la participación igualitaria de dichas comunidades en la construcción del bien común, y para impulsar una pedagogía de los derechos y obligaciones en materia de libertad e igualdad religiosa; así como la necesidad de contar con una política de Estado en la materia, que garantice el derecho fundamental-constitucional de igualdad en las relaciones entre el Estado y las diversas comunidades religiosas. Durante el 2015, desde el trabajo continuo en las mesas, se proponen varios documentos iniciales elaborados a partir de los lineamientos del Decreto 689 de 2011 para la construcción de políticas distritales.

El mismo año se suscribe un convenio interadministrativo entre la Secretaría Distrital de Gobierno y la Universidad Nacional de Colombia (Centro de Estudios Sociales para la Religión), con el propósito de construir lineamientos orientados a la construcción de una política pública para el sector, a partir de la identificación de la diversidad religiosa, de las vulneraciones a sus derechos fundamentales y de las problemáticas para el desarrollo de su labor en el campo social. El primer producto del convenio se concretó en un informe de tipo cualitativo, que condensó los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología de *grupos focales* a 33 confesiones religiosas e iglesias de Bogotá. Además, incluyó el desarrollo de un diplomado dirigido a lideresas y líderes religiosos, y la construcción de una línea base mediante la aplicación de encuestas a 517 de ellos en la ciudad.

La línea base incorporó las siguientes variables: descriptores demográficos de los líderes y lideresas encuestados; descriptores de las entidades religiosas representadas en la muestra; situaciones de discriminación, intolerancia y persecución religiosa; obstáculos para desarrollar sus labores de asistencia espiritual en cárceles, penitenciarias, guarniciones militares y hospitales; problemas de convivencia relacionados con la celebración de cultos; objeción de conciencia al servicio militar obligatorio; percepciones sobre las clases de educación religiosa y educación sexual en las instituciones educativas distritales; proyectos sociales de las comunidades religiosas; mediación de los líderes religiosos en conflictos familiares, vecinales y comunitarios; y espacios de participación de los líderes religiosos.

Durante el 2016 se adelantaron reuniones de socialización y recomendaciones frente a los resultados del informe cualitativo y la línea base elaborados por la Universidad Nacional de Colombia, lo propio surtieron los documentos de avance en la construcción de la política pública. El mismo año la administración distrital "Bogotá Mejor para Todos" incorporó en la agenda pública este capítulo de derechos dentro de la naturaleza y funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno mediante el Acuerdo Distrital 637 de 2016, y creó a su interior la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia como dependencia para agenciar estos temas en la ciudad por medio del Decreto 411 de 2016.

El proceso de formulación, revisión y ajuste del contenido de la política pública se consolidó en el transcurso de 2017, bajo la orientación técnica de la Secretaría Distrital de Planeación y la interlocución con diferentes sectores administrativos del distrito que se identificaron como corresponsables de su implementación, conforme a sus ámbitos misionales propios.

## **1. Decreto 093 del 12 de febrero de 2018 "por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital."**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

DECRETO No. **093** DE

( 12 FEB 2018 )

*"Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital."*

**EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C.**

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 1, 3 y 4 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 y,

**CONSIDERANDO:**

Que el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 reconoce la voluntad que le asiste a los pueblos de promover el progreso social y elevar su nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad, dentro del cual están inmersas las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión.1-

Que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, consagra en el artículo 1 el derecho de todos los pueblos a la libre determinación sobre su condición política, su desarrollo económico, social y cultural, además de lo postulado por el artículo 18 frente a la libertad de toda persona de adoptar la religión o las creencias de su elección, la libertad de manifestar sus creencias individual o colectivamente, en público o en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza, con la correlativa obligación de los Estados Partes a respetar la libertad de los padres o tutores legales, sobre la educación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con sus propias convicciones.

Que así mismo, el preámbulo del Pacto manifiesta que el ideal de un ser humano, libre de temor y miseria, solo puede darse mientras se creen las condiciones para la efectividad de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, mientras el artículo 2 proscribía los actos discriminatorios por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel.: 3813000  
[www.bogota.gov.co](http://www.bogota.gov.co)  
Info: Línea 195

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Continuación del Decreto N°. 093 DE 12 FEB 2018 Pág. 2 de 13

*"Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital."*

Que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José), aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, afirma en su preámbulo que los derechos son atributos de los seres humanos, lo que justifica la protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria a la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos. Por su parte, los artículos 12, 13 y 14 de la Convención observan que las libertades para manifestar la propia religión y las propias creencias, las libertades de pensamiento, expresión y asociación, solo están sujetas a las limitaciones prescritas por la ley y necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.

Que el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, advierte a los Estados Parte su deber de respetar las libertades de religión, culto y conciencia de los niños y las niñas.

Que el artículo 1 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebrada en 1960, considera que las discriminaciones en este ámbito son claramente una violación de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, entendiendo por "discriminación" toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza.

Que la Resolución 36/55 en 1981 "*Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones*", proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, considera el desprecio a las libertades fundamentales, en particular las de religión, culto y conciencia como causante directo e indirecto de guerras y grandes sufrimientos a la humanidad, por tanto su protección es una contribución a la realización de los objetivos de paz mundial, justicia social y amistad entre los pueblos y a la eliminación de las ideologías o prácticas de colonialismo y discriminación racial.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Continuación del Decreto N°. 093 DE 12 FEB 2018 Pág. 3 de 13

*"Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital."*

Que la invocación a Dios expresada en el preámbulo de la Constitución Política de Colombia, afirma la compatibilidad de Dios con todas las creencias religiosas y confiere igual valor y tratamiento jurídico a todas las religiones. Así mismo, en su artículo 1º reconoce al Estado Colombiano como un Estado Social de Derecho, con autonomía de sus entidades territoriales, democrático, participativo y pluralista.

Que los artículos 18 y 19 idem, consagran como derechos fundamentales las libertades de religión, culto y conciencia, los cuales, en conexión directa con los principios fundamentales, son el marco axiológico de nuestro ordenamiento jurídico. Derechos que, en conjunto con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la Ley 25 de 1992 *"Por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política"*, la Ley Estatutaria 133 de 1994 *"por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política"* y su Decreto Nacional reglamentario 1396 de 1997, la doctrina constitucional vigente y lo preceptuado en el artículo 94 de la Constitución Política, integran el Bloque de Constitucionalidad en la misma materia.

Que la Ley 133 de 1994 le otorga al Estado el deber de garantizar la plena libertad religiosa y de cultos, declara que ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal y consigna que Colombia no es un Estado ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos y dentro de su ámbito de aplicación se excluyen las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de fenómenos psíquicos o parapsicológicos; de satanismo, de prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión.

Que el artículo 244 de la Ley 1753 de 2015 *"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 'Todos por un Nuevo país'"*, insta al reconocimiento de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa, de cultos y de conciencia por parte de las entidades competentes, y establece que el Gobierno Nacional formulará y actualizará la política pública en la materia con la participación de las entidades religiosas, garantizando la libertad e igualdad religiosa en términos de equidad y reconociendo su aporte al bien común en lo local, regional y nacional.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Continuación del Decreto N°. 093 DE 12 FEB 2018

Pág. 4 de 13

*"Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital."*

Que mediante Circular Externa No.15-000037908-OAJ-1400 del 9 de octubre de 2015, expedida por el Ministerio del Interior, se exhortó a todos los alcaldes y gobernadores a tener en cuenta el sector religioso, a la hora de diseñar políticas públicas y al realizar la planeación funcional (administrativa, política y presupuestal), disponiendo, a su vez, de los espacios de articulación necesarios para llevar a cabo la participación ciudadana y la socialización, empoderamiento, y difusión de los lineamientos que se tracen a nivel nacional de lo que en materia religiosa establezca.

Que la Resolución 0889 del 9 de Junio de 2017 del Ministerio del Interior, establece los lineamientos que el grupo de organizaciones sociales basadas en principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia y entidades religiosas deberán considerar para la participación y articulación interinstitucional, intersectorial y territorial en la formulación de la Política Pública Integral que garantiza el ejercicio del derecho de libertad religiosa y de cultos, el aporte al bien común de las entidades y organizaciones del sector religioso y todas las acciones y deberes estatales derivadas de estos.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hizo necesario promover la acción del Estado mediante la formulación de una política pública Distrital que responda a las necesidades y nuevas realidades de la sociedad en el ámbito religioso, trabajo que se llevó a cabo con la participación de los actores en dos etapas: la primera de ellas centrada en la definición del horizonte de sentido, la construcción de escenarios de confianza desde la institucionalidad y la identificación del mapa de la diversidad religiosa; la segunda etapa, con la asistencia técnica de la Universidad Nacional de Colombia, que permitió identificar las principales vulneraciones para el ejercicio de los derechos aludidos, los aportes del sector religioso en la construcción del bien común y las recomendaciones o líneas de la política, bajo la metodología de grupos focales para la información cualitativa y la aplicación de encuestas como instrumento para la recolección de información cuantitativa.

Que el resultado de la línea base construido en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia para identificar vulneraciones a las libertades de religión, culto y conciencia en Bogotá destaca indicadores como los siguientes: En los últimos tres años el 84,5% de los líderes religiosos encuestados manifestó haber sufrido por lo menos una situación de intolerancia, discriminación y persecución religiosa; las principales situaciones son: burlas o trato discriminatorio por causa del vestuario (30.9%), por causa de la alimentación

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel.: 3813000  
[www.bogota.gov.co](http://www.bogota.gov.co)  
Info: Línea 195

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Continuación del Decreto N°. **093** DE 12 FEB 2010

Pág. 5 de 13

*"Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital.*

(21.9%), daños intencionales a los lugares de culto (33.3%), información malintencionada u ofensiva por parte de los medios de comunicación (29%), situaciones de intolerancia y discriminación a los niños y niñas en el medio escolar con ocasión de sus creencias (18.8%) y amenazas a la vida e integridad personal de líderes religiosos (12.6%).

Que la misma línea base aporta como evidencia las grandes contribuciones de las Iglesias a la justicia social y la convivencia pacífica. El estudio señala que el 56.7% de las Iglesias lidera o sostiene por lo menos un programa social sin ánimo de lucro, así mismo, que el 83.4% de los líderes religiosos interviene por lo menos una vez al mes en la mediación de un conflicto familiar, social o comunitario.

Que el Acuerdo Distrital 637 de 2016 *"Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"*, en su artículo 15 consagra como una de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno, la de liderar, orientar y coordinar la dirección de asuntos religiosos en el Distrito Capital, formulando, adoptando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos y articulando acciones con las entidades religiosas y las organizaciones basadas en la fe.

Que el Acuerdo Distrital 645 de 2016 *"por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá mejor para todos"*, establece el programa *"Bogotá vive los derechos humanos"*, en su artículo 32, cuyo objetivo es *"garantizar espacios incluyentes, plurales y respetuosos de la dignidad humana y de las libertades civiles, religiosas y políticas de la ciudadanía; con el fin de dotarla de herramientas efectivas para la protección y apropiación de sus derechos humanos y convertirlos en gestores y agentes activos en la construcción de su propio bienestar"*.

Que la Administración Distrital ha promovido espacios de interlocución, de concertación y de participación con más de quinientos líderes y lideresas religiosos de la ciudad, involucrando a representantes del catolicismo, protestantismo, protestantismo histórico, adventistas, pentecostales, musulmanes, judíos, budistas, mormones, entre otros, con el propósito de construir los lineamientos de la presente política pública. Que para el caso de esta Política Pública

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel.: 3813000  
[www.bogota.gov.co](http://www.bogota.gov.co)  
Info: Línea 195

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Continuación del Decreto N°. 095 DE 12 FEB 2018

Pág. 6 de 13

*"Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital."*

es preciso señalar que el Decreto Distrital 668 de 2017 *"Por medio del cual se reglamentan los artículos 127 y 128 del Acuerdo 645 de 2016 y se dictan otras disposiciones"*, establece un régimen de transición en el párrafo tercero del artículo 7, el cual contempla la posibilidad de ceñirse a los lineamientos de la Guía contenida en el Decreto Distrital 689 de 2011, para aquellas iniciativas de políticas públicas distritales que hayan surtido la fase de agenda pública y de formulación a la fecha de entrada en vigencia del citado decreto, previa verificación de la Secretaría Distrital de Planeación.

Que la etapa de agenda pública fue surtida entre mayo del año 2014 y diciembre del año 2015 y la etapa de formulación de la política durante 2016 y 2017, procesos adelantados con la Secretaría Distrital de Planeación.

Que mediante oficio con radicación No. 1-2018-1358 la Secretaría Distrital de Planeación, certifica que el presente Decreto, así como el documento técnico, cuenta con su revisión y verificación técnica en cuanto a su formulación conforme a la anterior guía expedida mediante Decreto Distrital 689 de 2011.

En mérito de lo expuesto,

#### DECRETA:

**Artículo 1º.- Creación.** Créese en Bogotá Distrito Capital la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para el periodo 2018 – 2028.

**Parágrafo.** Hace parte integral del presente Decreto Distrital el Documento Técnico Soporte de la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital.

**Artículo 2º.- Propósito.** Fomentar el respeto por la libertad e igualdad religiosa, de culto y conciencia desde la promoción y apropiación social e institucional de una cultura que reconozca plenamente estos derechos, con el fin de convertir al Distrito Capital en una



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Continuación del Decreto N°. **093** DE **12 FEB 2018**

Pág. 7 de 13

*"Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital."*

ciudad que previene y reduce su vulneración o amenaza y que afianza la pluralidad religiosa expresada material y simbólicamente en el territorio.

**Artículo 3º.- Objetivos específicos.** Son objetivos de la presente política pública:

**3.1** Disminuir factores sociales, culturales e institucionales que alimentan la intolerancia, la exclusión, la persecución y la apología del odio fundados en la religión

**3.2** Garantizar condiciones de igualdad que posibiliten el goce efectivo de los derechos de libertad religiosa, de culto y conciencia en Bogotá.

**3.3** Implementar estrategias para fortalecer y articular iniciativas de paz y proyectos sociales provenientes de las comunidades religiosas con organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional e instancias institucionales del orden distrital y nacional.

**Artículo 4º.- Principios que fundamentan la política pública.** La Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, además de los principios establecidos en tratados internacionales, constitucionales y legales aplicables, se regirá por los siguientes principios:

**4.1 Principio de pluralismo religioso.** Entendido como la coexistencia de las diversas confesiones, creencias y convicciones de fe, incluso para quienes no profesan ninguna de ellas, en un ambiente de apertura, convivencia y colaboración. El principio de pluralismo constituye el conjunto de garantías brindadas por la Administración Distrital para la práctica, el culto y la enseñanza, siempre que al hacerlo se respeten el orden jurídico y los derechos fundamentales de los individuos.

**4.2 Principio de la libertad religiosa.** Este principio se desarrolla tanto en el ámbito individual como colectivo; individual porque constituye una expresión del fuero interno o conciencia de cada ser humano y colectivo porque es una dimensión comunitaria que conlleva a las libertades de expresión, de asociación y de reunión como declaración material de la fe. El ejercicio de la libertad religiosa confiere el derecho a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, el derecho a que sean respetados en su destinación religiosa y su carácter confesional, el derecho a desarrollar actividades de culto, de educación y de ayuda humanitaria que permitan



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Continuación del Decreto N°. 09 DE 12 FEB 2018

Pág. 8 de 13

*"Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital"*

poner en práctica preceptos inmutables, universales y de orden teológico, ético y moral en la construcción de bienes comunes, frente a una realidad social, económica, política, jurídica y cultural de la ciudad.

**4.3 Principio de igualdad religiosa y no discriminación.** Este principio se desarrolla a partir de la igualdad jurídica y material de todas las confesiones religiosas y se manifiesta a través del goce igualitario de la libertad religiosa, de culto y conciencia y del derecho a no ser discriminado o perseguido por motivos religiosos. Por lo tanto, ningún ciudadano o ciudadana del Distrito Capital puede ser excluido o discriminado por sus creencias sin importar la religión que profesa.

**4.4 Principio de inmunidad de coacción y autonomía.** La inmunidad de coacción se define como la restricción expresa que recae sobre toda autoridad pública para imponer, coaccionar o sustituir al individuo en la libertad de tener y profesar la religión de su elección o interferir en las decisiones de su conciencia. Se refiere específicamente al respeto frente a la inmunidad personal o fuero interno del individuo, desde donde éste adopta las decisiones que considera mejores para su ideal de existencia y de perfección humana, donde el Estado carece de potestad para inmiscuirse e incluso para formular sobre ellas un juicio de valor.

**4.5 Principio de Ciudadanía Democrática.** La ciudadanía democrática reconoce la autonomía del conjunto de los ciudadanos, quienes desde el espacio de lo público reivindican sus derechos, incidiendo y modificando la realidad jurídica y la realidad material con el propósito de mejorar sus condiciones y calidad de vida. Asumidos desde su impronta democrática, los ciudadanos no se encuentran aislados del aparato estatal, preocupados únicamente por sus intereses individuales, pues reconocen la pluralidad, la diversidad y la necesidad de trabajar en consenso y solidariamente por el logro de objetivos comunes.

**Artículo 5°.- Enfoques que orientan la política pública.** La Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia tendrá los siguientes enfoques:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Continuación del Decreto N°. **093** DE **12 FEB 2018**

Pág. 9 de 13

*"Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital."*

**5.1 Enfoque basado en Derechos Humanos.** Este enfoque considera que el fin último para el desarrollo y el progreso es el ejercicio pleno de los Derechos Humanos. Por lo tanto la Administración Distrital deberá tener en cuenta las siguientes premisas: Las personas deben ser tratadas como agentes principales de su propio desarrollo, deben implementarse estrategias para el empoderamiento ciudadano y la convivencia pacífica, los programas y proyectos harán especial énfasis en poblaciones vulnerables, excluidas y marginadas, el logro en la reducción de las desigualdades, la inequidad de los ingresos y la desigualdad de capacidades y oportunidades, la identificación de las causas de los problemas sociales y la promoción en el desarrollo de alianzas estratégicas que contribuyan al goce efectivo de los derechos humanos.

**5.2 Enfoque Participativo de las Mujeres en la Resolución de Conflictos en la Consolidación de la Paz y la Reconciliación.** El destacado papel de las líderes religiosas en la prevención y resolución de conflictos, la promoción y consolidación de la paz, es de inobjetable importancia y merecido reconocimiento en pie de igualdad. Son las mujeres líderes religiosas y sus redes quienes desde su capacidad organizativa y creativa proponen escenarios para el diálogo, la concertación y la construcción de tejido social, tal como declara la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada por unanimidad el 31 de octubre del 2000 sobre la mujer, la paz y la seguridad.

**5.3 Enfoque de Interculturalidad.** La interculturalidad es el resultado de un proceso histórico que implica la coexistencia de diversas creencias y culturas en un plano de igualdad, comunicación, negociación, cooperación y especialmente convivencia en medio del pluralismo religioso. Para el caso de la política pública, implica un diálogo interreligioso respetuoso de las diferencias, que propenda por una igualdad real y material bajo la comprensión de que todos pueden aportar en la construcción de los bienes comunes para una sociedad más justa y equitativa por encima de las diferencias doctrinales y conceptuales.

**5.4 Enfoque de Familia.** Conforme al artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en armonía con el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, la familia se reconoce como el núcleo fundamental de la sociedad. Ello significa que el equilibrio de la familia está íntimamente ligado al equilibrio mismo de





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Continuación del Decreto N°. **093** DE **12 FEB 2018**

Pág. 10 de 13

*"Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital."*

la sociedad, pues desde la familia se estructura la vida humana, se establecen las primeras relaciones psicoafectivas, las primeras regulaciones de la conducta, patrones éticos básicos, valores morales, la formación de la personalidad, el primer contexto de educación y de experiencias sociales y cívicas, es considerada la red social primaria que brinda apoyo espiritual, emocional y material, prioritariamente en circunstancias extremas y adversas. El factor de protección que ofrece la familia se relaciona positivamente con aspectos espirituales, psíquicos, físicos y psicosociales. En este sentido las iglesias son claves en la protección, prevención y en el abordaje de conflictos que surgen al interior de ellas.

- 5.5 Enfoque Espiritual y de Creencias Religiosas.** La dimensión espiritual engloba las necesidades, expectativas y esperanzas reales, simbólicas y de sentido de la realidad del ser humano, que lo llevan a reflexionar conscientemente sobre el significado de su vida, su origen, misión y destino. Su existencia desborda la dimensión material, lo que implica algo más que su cuerpo físico y la vida en el aquí y el ahora. La respuesta a estas preguntas incluye generalmente elementos culturales, tradicionales y experienciales que se manifiestan en estilos de vida, doctrinas y ritos.

La dimensión espiritual se despliega en prácticas comunitarias (celebraciones, ritos, cultos) que edifican y sostienen colectivamente las creencias religiosas, ejercidas en atención a una divinidad y sobre un fundamento de verdad y moral cuyo sustento no obedece al canon científico-racional o de comprobación empírica. Este enfoque plantea para el Estado un reconocimiento y respeto por las expresiones religiosas y los principios y valores que guían cada creencia.

- 5.6 Enfoque Territorial.** Toda interacción humana se despliega e impacta sobre un espacio físico determinado, un entorno colectivo que abarca tanto elementos naturales como equipamientos construidos y adaptados a las demandas materiales y simbólicas subyacentes a la vida social. Correlativamente, los derechos y libertades ciudadanas encuentran en el territorio un medio para su realización, de allí que su configuración, uso y cuidado sea factor decisivo e ineludible que posibilita la consecución práctica de las garantías democráticas.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Continuación del Decreto N°. **093** DE 12 FEB 2018.

Pág. 11 de 13

*"Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital."*

Esta perspectiva hace del ordenamiento territorial de la ciudad un ámbito que supera aspectos meramente formales o estéticos, para situarlo de manera directa en la esfera de los derechos, de modo que reconozca la importancia de la democratización del uso del espacio público, del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Maestro de Equipamientos de Culto y el Código Nacional de Policía como instrumentos rectores que armonizan el ejercicio y práctica de las libertades de religión y culto con las directrices que fundamentan el desarrollo y uso físico e infraestructural en Bogotá, D.C.

**Artículo 6°.- Líneas estratégicas de la política pública.** La Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia se desarrollará bajo las siguientes líneas estratégicas:

- 6.1 Línea estratégica de pedagogía e interacción con ciudadanos, funcionarios de la Administración Distrital y Gobierno Nacional.** Fomentar e inculcar el respeto por las ideas, creencias y opiniones individuales desde las libertades de religión, culto y conciencia constituye el primer escenario para la construcción de la paz; es a partir del respeto por las distintas maneras de concebir el mundo que debe posicionarse esta reivindicación en la agenda pública distrital. El Estado democrático, participativo y pluralista está fundado en la dignidad humana y en la coexistencia de todos los ideales políticos, sociales y creencias religiosas de los ciudadanos.
- 6.2 Línea estratégica de goce efectivo de los derechos y garantías para el ejercicio pleno de las libertades.** El Estado Social de Derecho tiene como fin último hacer real y efectiva la vigencia de los Derechos Humanos, de allí la necesidad de ratificar en la persona humana el sujeto, razón y fin del ordenamiento jurídico. Este postulado confirma la relevancia que cobra el reconocimiento de los derechos de religión, culto y conciencia, y con ellos la aconfesionalidad del Estado Colombiano.
- 6.3 Línea estratégica de articulación y fortalecimiento de iniciativas de paz y proyectos sociales provenientes del sector religioso, organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y el Estado.** La ciudad se ve afectada por múltiples problemáticas sociales, en las que intervienen las comunidades religiosas mediante su trabajo en promoción de paz, convivencia armónica y reconciliación.

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel.: 3813000  
[www.bogota.gov.co](http://www.bogota.gov.co)  
Info: Línea 195

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Continuación del Decreto N°. **093** DE **12 FEB 2018**

Pág. 12 de 13

*"Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital."*

La Administración Distrital debe propiciar la creación de redes interreligiosas que integren alternativas frente a estos problemas sociales y estructurales, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y programas del gobierno nacional y distrital.

**Artículo 7º.- Responsabilidad Institucional Distrital.** La dirección de la política pública de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia para el Distrito Capital, estará en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno. Su implementación estará a cargo de los sectores central, descentralizado y localidades de la Administración Distrital, cada cual dentro de su órbita misional.

**Artículo 8º.- Formulación y Aprobación del Plan de Acción Distrital.** Dentro del año siguiente a la expedición del presente Decreto Distrital, la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, con la participación de los actores competentes, formulará el plan de acción que define metas, recursos presupuestales y responsabilidades para la implementación, seguimiento, evaluación e impacto de la presente política, el cual se presentará para aprobación y adopción ante el Consejo Distrital de Política Económica y Social –CONPES.

**Artículo 9º.- Ámbito de aplicación.** La Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para el Distrito Capital, se aplica en el territorio de Bogotá D.C., y de su implementación son responsables las entidades y organismos del Sector Central, Descentralizado y de las Localidades que conforman la Administración Distrital.

**Artículo 10º.- Financiación.** La financiación de la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital, se realizará mediante la asignación de los recursos de inversión del Distrito Capital según la disponibilidad que se tenga de los mismos. De otra parte, los gastos que genere la implementación de la Política Pública serán atendidos con cargo a lo establecido en los presupuestos anuales de cada entidad vinculada al plan de acción de que trata el artículo 8 del presente decreto.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.

Continuación del Decreto N°. 093 DE 12 FEB 2018 Pág. 13 de 13

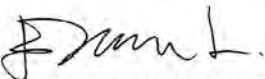
*"Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital."*

**Artículo 11°.- Vigencia y derogatoria.** El presente decreto, rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

**PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá, D.C., a los

**12 FEB 2018**

  
**ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO**  
Alcalde Mayor de Bogotá

  
**MIGUEL URIBE TURBAY**  
Secretario Distrital de Gobierno

Proyecto: Paula Beltrán Rodríguez - Contraloría Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia - SDG **PS**  
Revisó: Mardory I. Jarama Cortés - Subdirectora de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia - SDG **PS**  
Diana Marcela Daza Rodríguez - Directora de Políticas Sectoriales - SDP **PS**  
Aprobó: Cristian Francisco Pulido Acuña - Subsecretario para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos (E) - SDG **PS**  
Paula Gómez Campos - Subsecretaria de Planeación Socioeconómica - SDP **PS**  
Adriana Lucio Jiménez Rodríguez - Directora Jurídica - SDG **PS**

## 2. Documento Técnico Soporte de la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para Bogotá Distrito Capital.

### Sección A

#### 2.1 Preámbulo de contexto

La Carta Política de 1991 introdujo un cambio radical en la concepción de los Derechos Humanos, con una apuesta indeclinable por hacer real y efectiva su vigencia en cada individuo, de allí que la Corte Constitucional ratificara que la persona humana es el sujeto, razón y fin del ordenamiento jurídico. La Carta robustece un enunciado teórico donde los valores, desde el punto de vista ético que preconiza el valor de la dignidad humana, constituyen las mismas exigencias universales que hoy conocemos como Derechos Humanos.

El preámbulo de nuestra Constitución fija aquellos valores y principios que deben orientar el Estado colombiano, y al invocar la protección de Dios está reconociendo la doble dimensión espiritual y material innegablemente inherente a la existencia humana. Al respecto Madrid Malo sostiene que antes de reconocerse al ser humano como sujeto de derechos, debe reconocérsele como sujeto moral (Malo, 1998, p. 20)

El reconocimiento de los derechos fundamentales de religión, culto y conciencia en el país tiene lugar solo hasta 1991, tardíamente si se consideran casos como la Constitución alemana, la cual consagra dicho reconocimiento desde 1949, la Constitución italiana que lo hace en 1947 y la española en 1978. Siendo esta última la fuente de donde se extraen los principales elementos que le dan forma a la Ley Estatutaria 133 de 1994 sobre Libertad Religiosa y de Cultos en Colombia.

El Dios de la Constitución es Dios y es dioses, arropa todas las creencias religiosas sin distinción y al margen de que los colombianos profesen mayoritariamente una en particular. En virtud de tal precepto, la Carta confiere igual valor y tratamiento jurídico a todas las confesiones religiosas existentes.

La Corte Constitucional ha precisado la importancia de la libertad interior en tanto soporte de los derechos y libertades humanas, a partir

de allí su garantía se configura como medio para la autorrealización y autodeterminación en la conducción del destino propio; la libertad de elegir lo bueno y justo en términos espirituales y terrenales y el lugar donde está recogida la esencia de la dignidad humana. Para dilucidar en su extensa amplitud las libertades de conciencia y religión, la Corte Constitucional también reconoce que las decisiones de la persona, adscritas a un sistema de valores autónomamente asumido, hacen parte de su dominio particular e inalienable, en cuyas profundidades no cabe ninguna intervención o coacción del Estado.

Las manifestaciones religiosas encuentran en el ejercicio de lo cívico una de sus expresiones prácticas, y es sobre tales expresiones donde la intervención del Estado está autorizada, mientras se muestre imperiosa en aras de impedir o limitar cualquier circunstancia que vulnere los derechos de los demás, altere la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos.

Ahora bien, el notable aumento de opciones religiosas en Colombia desde la expedición de la Ley 133 de 1994 o Ley Estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos, ha hecho indispensable para el Gobierno nacional la identificación de los elementos integrados en conceptos como *iglesia*, *denominación* y *confesión religiosa*, de manera que su reconocimiento jurídico observe la realidad histórica y cultural subyacente en cada cual.

Las creencias o confesiones religiosas conciben un Dios o dioses como centro de su cuerpo doctrinal, una historicidad, un texto de doctrina, una estructura que las ordena, unos fieles o creyentes, un aparato ético que las rige, unas buenas prácticas frente a la intervención social, unos usos y costumbres que les provee identidad cultural y una representatividad nacional o internacional. Las denominaciones cuentan con una organización religiosa, una estructura y una doctrina que puede tener muchos aspectos en común con una determinada confesión religiosa. Por su parte las iglesias, los templos, las mezquitas y sinagogas deben entenderse como los espacios a través de los cuales se concretizan las expresiones religiosas, son el lugar donde se puede ejercer plena, libre y públicamente la libertad de culto.

De otro lado, la existencia de los pueblos indígenas con sus cosmovisiones, también obliga a preguntarse por los verdaderos alcances de la legislación frente a un universo religioso más amplio que el concebido originariamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que los pueblos indígenas son verdaderos sujetos de derecho con singularidad propia, y en el caso de las comunidades ancestrales existe una estrecha relación entre cultura, espiritualidad y territorio.



Las bases de un Estado democrático, participativo, incluyente y pluralista, se expresan en la aceptación general de la diversidad de creencias y expresiones religiosas en todo el territorio nacional. Colombia debe adoptar medidas positivas para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos, así como medidas negativas donde las autoridades públicas se abstienen de cometer actos discriminatorios y de intolerancia religiosa que vulneren el derecho a la igualdad. Armonizar la realidad social con la norma tiene por finalidad evidenciar y ajustar aquellos aspectos que distancian la realidad formal de la realidad material, pues resulta inocuo afirmar las libertades fundamentales sin igualdad real y material para su ejercicio.

Adicionalmente, los instrumentos internacionales que ha ratificado Colombia con relación a la libertad de religión, entre ellos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José) y la Convención sobre los Derechos del Niño, no solo cumplen un papel primordial al complementar el contenido de los derechos constitucionales y precisar límites en su aplicación, también reconocen que en la diversidad de expresiones religiosas se encuentra implícitamente una búsqueda por el bienestar de la humanidad, traducida en grandes contribuciones a la cohesión social y la estabilidad política, social y económica de las naciones.

En este contexto, se considera importante reconocer el valioso trabajo que adelantan las comunidades religiosas frente a las cada vez más profundas desigualdades sociales. Su labor las convierte en promotoras de convivencia social, en agentes de reconciliación al interior de sus territorios, en actores sociales y políticos que transforman y trascienden sus entornos, en proveedoras de bienes tangibles e intangibles ante la orfandad social y estatal. Las iglesias, confesiones religiosas y denominaciones cuentan, entre otras, con una línea de acción en el campo social, que se nutre de los principios aportados por el aparato ético de cada creencia religiosa, fuente de los valores profundos de la vida en comunidad: solidaridad, respeto, amor, igualdad, verdad, justicia, libertad, acceso a los bienes para el disfrute de todos; valores de un efecto altamente significativo por su contribución decisiva al desarrollo integral del ser humano, entendido en su aspecto físico, intelectual y espiritual.

El peso de esta estructura axiológica se soporta en la verdadera dignificación del ser humano, el reconocimiento de su valor intrínseco, de su irreductibilidad, de la satisfacción de sus necesidades legítimas, del desarrollo de las capacidades para el ejercicio efectivo de la libertad que permite a cada individuo la posibilidad de concebir iniciativas, de proponer y materializar sus sueños y expectativas.

Las Entidades Religiosas asumen un papel central frente a los crecientes conflictos urbanos y los derivados de la confrontación armada en el país, pues ellas promueven iniciativas de paz y enarbolan el deseo de vivir libre de cualquier violencia, buscan el autoagenciamiento de las comunidades a partir de manifestaciones y expresiones claras contra la violencia y la precarización rural. No es desconocido que el histórico asistencialismo estatal ha sido insuficiente frente a la crisis humanitaria de un país que se debate entre la guerra y la muerte, pues el Estado no ha logrado reconocer integralmente todas las dimensiones del ser humano, necesarias para una plena y feliz realización. A su turno, el trabajo articulado de las organizaciones de inspiración religiosa cuenta con gran potencial, condensado en un capital social que debe visualizarse como un conjunto de redes que promueve cambios, reivindica derechos y aporta al logro de una sociedad más justa y equitativa.

El campo de la enseñanza religiosa es otra de las singulares aristas involucradas en el goce de los derechos que alientan la presente política pública, con reformas trascendentales por emprender. La Carta Política reconoce el pluralismo religioso, que es expresión de la libertad para elegir un credo y recibir educación escolar acorde con las convicciones religiosas propias, de allí su significado como parte imprescindible de la impronta democrática de nuestro país.

## 2.2 Acercamiento legal: Marco Normativo

El presente marco normativo delimita el campo de acción de la política, desglosando el contenido legal y jurisprudencial que reglamenta el ejercicio de los derechos de libertad religiosa, culto y conciencia.

### LEGISLACIÓN COLOMBIANA

#### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

**PREÁMBULO.** (...) *El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente (...)*



**ARTÍCULO 1.** Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

**ARTÍCULO 5.** El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

**ARTÍCULO 13.** Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

*El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.*

*El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.*

**ARTÍCULO 18.** Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.

**ARTÍCULO 19.** Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

**ARTÍCULO 22.** La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

**ARTÍCULO 42.** La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

*El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables (...)*

**ARTÍCULO 68.** *Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.*

*La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.*

*Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. (...)*

**ARTÍCULO 93.** *Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.*

*Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.*

*El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.*

**ARTÍCULO 85.** *Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los Artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.*

## **LEY 20 DE 1974**

**"Por la cual se aprueba el "Concordato y el Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede" suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973"**

**Artículo 1.** *El Estado, en atención al tradicional sentimiento católico de la*

Nación Colombiana, considera la Religión Católica, Apostólica y Romana como elemento fundamental del bien común y del desarrollo integral de la comunidad nacional. El Estado garantiza a la Iglesia Católica y a quienes a ella pertenecen el pleno goce de sus derechos religiosos, sin perjuicio de justa libertad religiosa de las demás confesiones y de sus miembros lo mismo que de todo ciudadano.

### **LEY 25 DE 1992**

#### **"Por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del Artículo 42 de la Constitución Política".**

**Artículo 1.** El Artículo 115 del Código Civil se adicionará con los siguientes incisos:

"Tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito para ello concordato o tratado de Derecho Internacional o convenio de Derecho Público Interno con el Estado colombiano.

"Los acuerdos de que trata el inciso anterior sólo podrán celebrarse con las confesiones religiosas e iglesias que tengan personería jurídica, se inscriban en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Gobierno, acrediten poseer disposiciones sobre el régimen matrimonial que no sean contrarias a la Constitución y garanticen la seriedad y continuidad de su organización religiosa.

"En tales instrumentos se garantizará el pleno respeto de los derechos constitucionales fundamentales".

### **LEY 48 DE 1993**

#### **"Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización".**

**Artículo 28.** Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar:

Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Así mismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto. (...)

**Artículo 29.** Aplazamientos. Son causales de aplazamiento para la prestación del servicio militar por el tiempo que subsistan, las siguientes:

d) Haber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa; Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-478 de 1999, en el entendido de que la misma se refiere a todas las iglesias y confesiones religiosas reconocidas jurídicamente por el Estado colombiano. (...)

### **LEY 65 DE 1993**

#### **"Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario".**

**Artículo 5.** Respeto a la dignidad humana. Modificado por el artículo 4º de la Ley 1709 de 2014. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.

Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto.

La carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

**Artículo 152.** Facilidades para el ejercicio y la práctica del culto religioso. Los internos de los centros de reclusión gozarán de libertad para la práctica del culto religioso, sin perjuicio de las debidas medidas de seguridad.

### **LEY ESTATUTARIA 133 DE 1994**

#### **"Por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de cultos, reconocido en el Artículo 19 de la Constitución Política".**

**Artículo 2.** Ninguna Iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos.

El Poder Público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las Iglesias y confesiones religiosas y facilitará la participación de éstas y aquéllas en la consecución del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de común entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en la sociedad colombiana.

**Artículo 5.** No se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos; el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión.

**Artículo 7.** El derecho de libertad religiosa y de cultos, igualmente comprende, entre otros, los siguientes derechos de las Iglesias y confesiones religiosas:

- a. De establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos y de que sean respetados su destinación religiosa y su carácter confesional específico;
- b. De ejercer libremente su propio ministerio; conferir órdenes religiosas, designar para los cargos pastorales; comunicarse y mantener relaciones, sea en el territorio nacional o en el extranjero, con sus fieles, con otras Iglesias o confesiones religiosas y con sus propias organizaciones;
- c. De establecer su propia jerarquía, designar a sus correspondientes ministros libremente elegidos, por ellas, con su particular forma de vinculación y permanencia según sus normas internas;
- d. De tener y dirigir autónomamente sus propios institutos de formación y de estudios teológicos, en los cuales puedan ser libremente recibidos los candidatos al ministerio religioso que la autoridad eclesiástica juzgue idóneos. El reconocimiento civil de los títulos académicos expedidos por estos institutos será objeto de Convenio entre el Estado y la correspondiente Iglesia o confesión religiosa o, en su defecto, de reglamentación legal;
- e. De escribir, publicar, recibir, y usar libremente sus libros y otras publicaciones sobre cuestiones religiosas.
- f. De anunciar, comunicar y difundir, de palabra y por escrito, su propio credo a toda persona, sin menoscabo del derecho reconocido en el literal g) del Artículo 6 y manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y la orientación de la actividad humana;
- g. De cumplir actividades de educación, de beneficencia, de asistencia que permitan poner en práctica los preceptos de orden moral desde el punto de vista social de la respectiva confesión.

## LEY 115 DE 1994

### "Por la cual se expide la Ley General de Educación".

**Artículo 13.** Objetivos comunes de todos los niveles. (...)

- b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos;

- d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable;(...)

**Artículo 14.** Enseñanza obligatoria. (...)

- e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad.

**Artículo 23.** ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: (...)

4. Educación ética y en valores humanos.

6. Educación religiosa. (...)

**Artículo 24.** EDUCACIÓN RELIGIOSA. Se garantiza el derecho a recibir educación religiosa; los establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, así como el precepto constitucional según el cual en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. En todo caso la educación religiosa se impartirá de acuerdo con lo establecido en la ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos.

**Artículo 25.** FORMACIÓN ÉTICA Y MORAL. La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores, y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional.

**DECRETO 782 DE 1995**

**"Por el cual se reglamenta parcialmente las leyes 25 de 1992 y 133 de 1994".**

La norma establece los requisitos para la obtención de personerías jurídicas especiales por parte de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros. Define el registro, duración, reformas estatutarias y la celebración de convenios de derecho público interno.

**DECRETO 1396 DE 1997**

**"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 133 de 1994, el artículo 45 del Decreto-ley 2150 de 1995 y se modifica el Decreto 782 de 1995".**

Mediante este Decreto Nacional el Estado continúa reconociendo personería jurídica a la Iglesia Católica y a sus entidades eclesiásticas tales como diócesis, comunidades religiosas y demás entidades eclesiásticas a las que la ley canónica otorga personería jurídica, representadas por su legítima autoridad, conforme a lo establecido en el artículo IV del concordato de 1973, aprobado por la Ley 20 de 1974.

**DECRETO 1519 DE 1998**

**"Por el cual se establecen medidas tendientes al libre ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto en los centros penitenciarios y carcelarios".**

**Artículo 1º.** Los internos de los centros penitenciarios y carcelarios del país gozan del derecho a la libertad de cultos y de profesar libremente su religión, así como de difundirla en forma individual o colectiva. Las autoridades penitenciarias y carcelarias deberán permitir sin restricción alguna el libre ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de la seguridad de los centros de reclusión.

La asistencia religiosa de los internos corresponderá a los ministros de culto, iglesia o confesión religiosa a la cual pertenezcan.

**Artículo 2º.** El ejercicio del derecho de libertad de religión y cultos en los centros de reclusión comprende, entre otras cosas:

- a) La celebración de cultos o ceremonias religiosas al interior de los centros penitenciarios;

- b)** La comunicación de los internos con los ministros o representantes de los distintos cultos, iglesias o confesiones religiosas;
- c)** El establecimiento de lugares adecuados para el ejercicio del derecho de libertad de cultos y religiones;
- d)** La asistencia a los internos por el ministro de culto, iglesia o confesión religiosa a que pertenezca.

### **DECRETO 354 DE 1998**

#### **"Por el cual se aprueba el Convenio de Derecho Público Interno número 1 de 1997, entre el Estado Colombiano y algunas Entidades Religiosas Cristianas no Católicas".**

**Artículo VII.** De la libertad de escoger educación religiosa cristiana no católica. El Estado colombiano garantiza a los padres de familia fieles de las entidades religiosas que suscriben el presente Convenio el derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores o incapaces, en consecuencia, ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa diferente a la de sus convicciones o las de sus padres. (...)

**Artículo X.** De la Libertad de Enseñanza. Las Entidades Religiosas que suscriben el presente Convenio, en ejercicio de la libertad de enseñanza podrán fundar, organizar y dirigir centros de educación a cualquier nivel, incluidos la educación campesina y rural y para la rehabilitación social y en general cualquier rama de la educación, para lo cual deberán cumplir las disposiciones legales vigentes. (...)

**Artículo XIV.** Asistencia Religiosa. Las Entidades Religiosas parte del presente Convenio, podrán prestar asistencia espiritual y pastoral cristiana no católica a los miembros de la Fuerza Pública y a las personas que ingresen a centros educativos, hospitalarios, asistenciales y carcelarios del Estado que la soliciten. (...)

**Artículo XIX.** De los lugares de culto en las Instituciones del Estado. En el ejercicio de su misión pastoral, en especial la asistencia religiosa, las Entidades Religiosas que suscriben el presente convenio, tendrán derecho a utilizar un lugar destinado a la celebración de cultos en condiciones de igualdad con otras entidades religiosas reconocidas oficialmente por el Estado colombiano, en todas las instituciones que sean del Estado, sin que se pueda negar su acceso. Al efecto, el director o responsable de cada institución coordinará el ejercicio de este derecho, con todas las Entidades Religiosas parte del presente Convenio.



**Artículo XX.** De los lugares de culto. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política y el literal b) del artículo 6 de la Ley 133 de 1994, se garantiza a los miembros y fieles de las Entidades Religiosas que suscriben el presente convenio el respeto a los inmuebles en donde celebren sus cultos y mientras éstos se realicen, el uso del espacio público adyacente, en igualdad de condiciones con otras Entidades Religiosas reconocidas oficialmente por el Estado colombiano.

### **LEY 599 DE 2000 Código Penal Colombiano**

#### **"De los delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos"**

**Artículo 201.** Violación a la libertad religiosa. El que por medio de violencia obligue a otro a cumplir acto religioso, o le impida participar en ceremonia de la misma índole, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.

**Artículo 202.** Impedimento y perturbación de ceremonia religiosa. El que perturbe o impida la celebración de ceremonia o función religiosa de cualquier culto permitido, incurrirá en multa.

**Artículo 203.** Daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto. El que cause daño a los objetos destinados a un culto, o a los símbolos de cualquier religión legalmente permitida, o públicamente agravie a tales cultos o a sus miembros en razón de su investidura, incurrirá en multa.

**Artículo 204.** Irrespeto a cadáveres. El que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos acto de irrespeto, incurrirá en multa.

Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte, sin sobrepasar las diez (10) unidades multa.

### **DECRETO 505 DE 2003**

#### **"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 133 de 1994" Sobre los efectos jurídicos de las Personerías Jurídicas Especiales reconocidas por el Ministerio del Interior y de Justicia**

**Artículo 1º.** Los efectos jurídicos de las Personerías Jurídicas Especiales reconocidas por el Ministerio del Interior y de Justicia, de conformidad con lo previsto en la Ley 133 de 1994, se podrán extender a sus entes religiosos afiliados o asociados mediante Resolución expedida por este Ministerio en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo, previa solicitud de los interesados y una vez se presente la Certificación de que trata el artículo siguiente. (...)

### **DECRETO 2355 DE 2009**

**"Por el cual se reglamentaba la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificados".**

**Capítulo IV:** De la contratación de la administración del servicio educativo con las iglesias y las confesiones religiosas.

### **LEY ANTIDISCRIMINACIÓN - LEY 1482 DE 2012**

**"Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones".**

**ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA LEY.** <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1752 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Esta ley tiene por objeto sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación.

### **DECRETO 1066 DE 2015**

**"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior".**

**Artículo 1.1.1.1.** Cabeza del sector. El Ministerio del Interior tendrá como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población LGBTI, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa, derecho de autor y derechos conexos, los cuales se desarrollarán a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo.

Igualmente, el Ministerio del Interior coordinará las relaciones entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, para el desarrollo de la Agenda Legislativa del Gobierno Nacional.

### **LEY 1801 DE 2016**

**"Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia".  
Grupos de Especial Protección Constitucional**

**Artículo 40.** Comportamientos que afectan a los grupos sociales de especial protección constitucional. Los siguientes comportamientos

afectan a los grupos sociales de especial protección (personas en condiciones de vulnerabilidad, discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres en estado de embarazo) y por lo tanto no deben realizarse:

1. Perpetrar, permitir o inducir abusos o maltrato físico, verbal, psicológico o sexual en lugar público o privado, incluido su lugar de trabajo.
2. Utilizar a estas personas para obtener beneficio económico o satisfacer interés personal.
3. Omitir dar la prelación a las personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad o adulto mayor, mujeres en estado de embarazo, personas con niños en brazos y personas que por su condición de salud requieran preferencia, especialmente en las filas, en el uso de los vehículos de transporte público, colectivo o individual y en todos los sitios, bienes y lugares públicos o abiertos al público.
4. Dificultar, obstruir o limitar información e insumos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, del hombre y de la comunidad LGBTI, incluido el acceso de estos a métodos anticonceptivos.
5. Irrespetar las manifestaciones y reuniones de las personas en el espacio público o en lugares privados, en razón a su etnia, raza, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia personal.
6. Limitar u obstruir las manifestaciones de afecto público que no configuren actos sexuales, de exhibicionismo en razón a la raza, orientación sexual, género u otra condición similar.

### **DECRETO 1079 DE 2016**

**"Por el cual se declara el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos".**

**Artículo 1º.** Declaración Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos. Declárase el 4 de julio de cada año, como el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos.

**Artículo 2º.** Aplicación. En dicha fecha, el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, y en articulación con las entidades territoriales, coordinará con las Iglesias, Confesiones, Denominaciones, Comunidades Religiosas, Federaciones, Confederaciones, Asociaciones de Ministros y distintas Organizaciones sociales religiosas, jornadas de reflexión institucional, de oración, actos religiosos y conmemorativos de difusión y socialización sobre el respeto e igualdad de religiones y cultos; permitiendo en estos espacios de diálogo y debate, en todos los ámbitos de la vida social, cultural y política, el efectivo disfrute de las garantías del ejercicio de la libertad religiosa y de cultos en el territorio nacional.

## LEY 1861 DE 2017

### "Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización".

**Artículo 12.** Causales de exoneración del Servicio Militar Obligatorio. Están exonerados de prestar el servicio militar obligatorio, cuando hayan alcanzado la mayoría de edad en los siguientes casos: (...)

f) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Asimismo, los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias dedicados permanentemente a su culto;

n) Los ciudadanos objetores de conciencia; (...)

**PARÁGRAFO 1o.** Los ciudadanos adelantarán el trámite de reconocimiento de su objeción de conciencia, a través de la comisión interdisciplinaria creada para tal fin.

**PARÁGRAFO 2o.** Las personas que se encuentren en una causal de exoneración podrán prestar el servicio militar cuando así lo decidan voluntaria y autónomamente.

## ACUERDOS DISTRITALES

### ACUERDO 26 DE 1998

### "Por el cual se adoptan medidas de simplificación tributaria en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se dictan otras disposiciones".

**Artículo 3º.** Exclusiones al Impuesto Predial Unificado. No se declarará ni pagará impuesto predial unificado por los siguientes inmuebles:

- a. Las tumbas y bóvedas de los cementerios, siempre y cuando no sean de propiedad de los parques cementerio.
- b. Los inmuebles de propiedad de la iglesia católica destinados al culto y vivienda de las comunidades religiosas, a las curias diocesanas y arquidiocesanas, casas episcopales y curales, y seminarios conciliares.
- c. Los inmuebles de propiedad de otras iglesias diferentes a la católica, reconocidas por el Estado Colombiano y destinadas al culto, a las casas pastorales, seminarios y sedes conciliares.

**Parágrafo.** Las demás propiedades de las iglesias serán gravadas en la misma forma que las de los particulares.

- d. En consideración a su especial destinación, los bienes de uso público de que trata el artículo 674 del Código Civil.
- e. Los predios de la Defensa Civil Colombiana siempre y cuando estén destinados al ejercicio de las funciones propias de esa entidad.

### ACUERDO 125 DE 2004

**"Por medio del cual se modifica y adiciona el Acuerdo Número 21 del 9 de diciembre de 1998, se implementa la Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación y se dictan otras disposiciones"**

**ARTÍCULO 3º.- Artículo Nuevo.** CONTENIDO DE LA CÁTEDRA DE DERECHOS HUMANOS, DEBERES Y GARANTÍAS Y PEDAGOGÍA DE LA RECONCILIACIÓN.

Entiéndase por Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación, el conjunto de contenidos, procesos pedagógicos, metodologías, estrategias, metas, actividades y acciones que transversalizan el currículo escolar de las instituciones educativas, de educación formal y no formal y que hacen parte integral de su Proyecto Educativo Institucional. La Cátedra de Derechos Humanos hará parte del área de Ética y Valores, contemplada en el Plan de Estudios para las instituciones educativas, de conformidad con la Ley General de Educación.

La cátedra deberá educar en la autonomía, la libertad personal, la responsabilidad individual y colectiva, el respeto a la dignidad humana, el pluralismo cultural, ideológico, político y religioso, la tolerancia, la solidaridad y las prácticas democráticas de la participación.

### ACUERDO 215 DE 2006

**"Por medio del cual se promueve la cultura ciudadana de la donación voluntaria, responsable, altruista y solidaria de sangre en el Distrito Capital".**

**Artículo primero.** - El presente Acuerdo tiene por objeto contribuir al fomento de la cultura ciudadana de donación voluntaria, responsable, altruista y solidaria de sangre.

**Parágrafo:** La Secretaría de Salud de Bogotá implementará las acciones pertinentes para que las empresas públicas y privadas, como universidades, comunidades religiosas, centros comerciales, clubes deportivos y en general todas las comunidades organizadas, faciliten a la población la participación en las campañas y jornadas de donación voluntaria, responsable, altruista y solidaria de sangre.

Para tal efecto, las diferentes entidades del Distrito de acuerdo a su función misional y a su órbita de competencia legal, apoyarán a la Secretaría de Salud de Bogotá en su obligación de promover, divulgar y fomentar de manera permanente, los cambios culturales ciudadanos que impulsen a la donación voluntaria, responsable, altruista y solidaria de sangre, de acuerdo con la normatividad vigente.

### **ACUERDO 268 DE 2006**

#### **"Por el cual se reglamenta la asistencia espiritual en hospitales y centros de reclusión del distrito capital"**

**Artículo primero.** - La Administración Distrital a través de las entidades de salud, hospitales, cárceles y centros de detención y reclusión, garantizarán a quienes se encuentren dentro de sus instalaciones y así lo soliciten, la prestación de asistencia espiritual, la cual podrá ser ofrecida por entidades religiosas y similares legalmente constituidas, conforme lo establece la Ley 133 de 1994 Estatutaria de Libertad Religiosa y de Culto y su Decreto Reglamentario 354 de 1998.

**Parágrafo:** Fijase el término de noventa (90) días calendario, para que las respectivas autoridades y establecimientos públicos del Distrito Capital, adopten las medidas necesarias e implementen los procedimientos que permitan la asistencia espiritual, de que trata el presente artículo.

**Artículo segundo.** - La Secretaría de Gobierno Distrital y la Secretaría de Salud Distrital, serán las encargadas de velar por el real y efectivo cumplimiento de la asistencia espiritual de que trata el artículo primero del presente Acuerdo, con plena igualdad entre las distintas entidades religiosas legalmente constituidas, que existen en el Distrito Capital.

**Parágrafo:** La Secretaría de Gobierno Distrital y la Secretaría de Salud Distrital o quien haga sus veces, deberán informar al Concejo de Bogotá anualmente, sobre la implementación de los mecanismos para garantizar la asistencia espiritual, en los establecimientos y entidades indicadas en el artículo primero de este Acuerdo.

### **ACUERDO 288 DE 2008**

#### **"Por medio del cual se institucionaliza la semana por la paz en todas las instituciones educativas de Bogotá Distrito Capital"**

**Artículo 1.** Objetivo. Institucionalícese la "Semana por la Paz" durante la tercera semana del mes de septiembre, en todas las instituciones educativas de Bogotá Distrito Capital.

**Artículo 2.** *Propósitos.*

- a. *Generar espacios para la puesta en marcha de jornadas lúdicas, culturales, religiosas y académicas específicas, sobre la resolución no violenta de conflictos para los alumnos y alumnas, en todas las instituciones educativas de Bogotá Distrito Capital.*
- b. *Vincular al sector político, religioso, cultural y académico distrital, para la participación en las jornadas establecidas durante la semana por la paz en todas las instituciones Educativas de Bogotá, Distrito Capital.*

**Artículo 3.** *La Administración Distrital a través de la Secretaría de Educación, establecerá los lineamientos para el cumplimiento del presente Acuerdo.*

**ACUERDO 309 DE 2008**

**"Por medio del cual se establecen restricciones al consumo de bebidas alcohólicas en zonas aledañas a establecimientos educativos y religiosos"**

**Artículo 1.** *Prohibase el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público alrededor de establecimientos educativos y religiosos en el Distrito Capital, en un radio de ciento sesenta (160) metros.*

*Parágrafo: El radio de aplicación de la medida se denominará área de influencia.*

**Artículo 2.** *Sanciones*

*Los establecimientos de comercio que favorezcan el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público del área de influencia señalada en el artículo primero, serán sancionados con las medidas correctivas pertinentes establecidas en el Artículo 164 del Acuerdo 79 de 2003 - Código de Policía de Bogotá.*

*A quien se encuentre consumiendo bebidas alcohólicas en el espacio público del área de influencia, se le aplicarán las medidas correctivas pertinentes de acuerdo a la normatividad vigente.*

**Artículo 3.** *Corresponde a los Comandantes de Policía, dar aplicación a las medidas correctivas señaladas en el presente Acuerdo.*

### **ACUERDO 329 DE 2008**

**"Por medio del cual se institucionaliza la Semana Distrital del Buen Trato desde el 19 de noviembre hasta el 25 de noviembre de cada año en Bogotá, D.C."**

**Artículo 1º.** Institucionalícese la Semana Distrital del Buen Trato en Bogotá D.C., la cual se llevará a cabo anualmente, iniciando el 19 de noviembre (Día internacional para la prevención del abuso contra los niños) y finalizando el 25 de noviembre (Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer).

**Artículo 2º.** La Semana Distrital del Buen Trato tiene como objetivo promover acciones pedagógicas y campañas de sensibilización pública, para reconocer y prevenir situaciones de violencia intrafamiliar y sexual, generando conciencia ciudadana sobre la importancia de dar y recibir buen trato, como eje de mejoramiento para la convivencia y la prevención de la violencia, principalmente contra las niñas, los niños y las mujeres.

**Artículo 3º.** La Secretaría de Integración Social a través del Consejo Distrital para la Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Explotación Sexual, o quien haga sus veces, coordinará la realización de la semana distrital del buen trato, definirá los ejes temáticos de las jornadas, diseñará las actividades y vinculará a las entidades y funcionarios de la administración distrital en su ejecución. Con 30 días de anterioridad, se publicará la agenda de actividades que se llevará a cabo en la semana distrital del buen trato.

**Parágrafo:** La Administración coordinará la participación de las instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, religiosas y sociales la comunidad, los niños, niñas y adolescentes que deseen vincularse en las actividades de la semana del buen trato.

### **ACUERDO 491 DE 2012**

**"Por medio del cual se modifica el acuerdo 370 de 2009, se crea el sistema distrital de atención y reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en Bogotá, D.C., se adicionan lineamientos a la política pública y se dictan otras disposiciones".**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente Acuerdo tiene como objeto crear el Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y establecer los lineamientos en el Distrito Capital, para la formulación de la política pública a favor de las víctimas de graves violaciones a los



derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los tratados internacionales ratificados por Colombia y en la normatividad nacional.

### **ACUERDO 584 DE 2015**

**"Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública de mujeres y equidad de género en el distrito capital y se dictan otras disposiciones".**

**Artículo 2°.** Enfoques. Los lineamientos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá D.C., se fundamentan en los siguientes enfoques:

(...)

Enfoque Diferencial. Reconocimiento y transformación de las desigualdades que impidan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres por razones de raza, etnia, ruralidad, cultura, situación socioeconómica, identidad de género y orientación sexual, ubicación geográfica, discapacidad, religión, ideología y edad. Se concreta en la incorporación de acciones afirmativas para transformar las condiciones de discriminación, desigualdad y subordinación. (...)

**Artículo 3°.** Principios. Los lineamientos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá D.C., se basan en los siguientes principios:

(...)

- d. Reconocimiento de las diferencias. Valorar la construcción de identidades de género, sexuales, étnicas, raciales, culturales, religiosas, ideológicas, territoriales, de discapacidad, etareas, de origen geográfico y otras, que históricamente han sido motivo de discriminación, desigualdad y subordinación. (...)

**Artículo 4°.** Objetivo General. Garantizar los derechos de las mujeres, reconociendo sus identidades de género, sexuales, étnicas, raciales, culturales, religiosas, ideológicas, territoriales, de discapacidad, etareas, de origen geográfico y otras, mediante el desarrollo de medidas de política pública, con el fin de contribuir a la eliminación de la discriminación, la desigualdad y la subordinación en Bogotá D.C.

**Artículo 5°.** Objetivos específicos:

(...)

- c. Superar estereotipos y prácticas sociales, culturales, religiosas e ideológicas. Avanzar en la superación de los estereotipos y los roles

sociales afianzados en la cultura que reproducen discriminación, desigualdad y subordinación en las mujeres, para re significar imaginarios, representaciones y prácticas sexistas, racistas, de prejuicio sexual, y de situación socioeconómica. (...)

### **ACUERDO 645 DE 2016**

**Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos"(...)**

**Artículo 32.** Bogotá vive los derechos humanos

El objetivo de este programa es garantizar espacios incluyentes, plurales y respetuosos de la dignidad humana, y de las libertades civiles, religiosas y políticas de la ciudadanía; con el fin de dotarla de herramientas efectivas para la protección y apropiación de sus derechos humanos y convertirlos en cogestores y agentes activos en la construcción de su propio bienestar.

### **ACUERDO 637 DE 2016 (CORREGIDO POR EL DECRETO 340 DE 2016)**

**"Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"**

**Artículo 52.** Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno. La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles.

Además de las atribuciones generales establecidas para las secretarías en el presente Acuerdo, la Secretaría Distrital de Gobierno tendrá las siguientes funciones básicas:

(...)

- k).** Liderar, orientar y coordinar la dirección de asuntos religiosos en el Distrito, Capital formulando, adoptando y ejecutando políticas,

*planes, programas y proyectos y articulando acciones con las entidades religiosas y las organizaciones basadas en la fe. (...)*

### **ACUERDO 685 DE 2017**

#### **"Por medio del cual se crea el comité distrital de libertad religiosa y se dictan otras disposiciones"**

El objetivo del comité es promover el diálogo y la convivencia interreligiosa, además de garantizar el goce de los derechos plasmados en la Ley 133 de 199, a través de la participación activa en la formulación de planes y políticas, la interlocución con las instancias distritales y la comunidad, entre otras funciones descritas en el artículo 3º del Acuerdo Distrital.

## **DECRETOS DISTRITALES**

### **DECRETO 563 DE 2015**

#### **"Por medio del cual se adopta el Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica". (...)**

**Artículo 3º.** - Principios. Las actuaciones de los actores regidos por el presente protocolo, en especial la fuerza pública de la Policía Nacional y las autoridades distritales, se regirán por los siguientes principios: (...)

- d.** Igualdad: los intervinientes en la aplicación del presente protocolo observarán el principio de igualdad en el desarrollo de sus acciones. Toda discriminación por carácter de género, orientación sexual, étnica, capacidad, edad, política o religiosa, o cualquier otro motivo similar, resulta proscrita en la aplicación de este protocolo. (...)

### **DECRETO 411 DE 2016**

#### **"Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".**

**ARTÍCULO 1º. OBJETO Y FUNCIONES ESENCIALES.** La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles.

**ARTÍCULO 2º. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.** Para el desarrollo de su objeto, la Secretaría Distrital de Gobierno tendrá la siguiente estructura organizacional: (...)

3. SUBSECRETARÍA PARA LA GOBERNABILIDAD Y LA GARANTÍA DE DERECHOS

3.1. Dirección de Derechos Humanos

3.1.1. Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia

3.1.2. Subdirección de Asuntos Étnicos

3.2. Dirección de Convivencia y Diálogo Social. (...)

## **PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTO DE CULTO DE BOGOTÁ**

### **DECRETO 311 DE 2006**

**"Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Culto de Bogotá Distrito Capital" (...)**

**Artículo 16.** Usos principales. Se reconocen como usos principales de un equipamiento de Culto las actividades de rito y ceremonia; las actividades de residencia y las actividades de formación.

**Parágrafo.** Se reconocen como parte de los usos principales de los equipamientos de culto aquellas actividades anexas que dan soporte al desarrollo adecuado de las actividades de rito, residencia y formación. Comprenden las áreas administrativas, los salones de enseñanza, la vivienda del oficiante y demás espacios indispensables para el respectivo culto.

**Artículo 17.** Usos complementarios. Se consideran usos complementarios al equipamiento aquellas actividades que contribuyen al adecuado funcionamiento del culto, mediante las cuales se pongan en práctica los preceptos de orden moral desde el punto de vista social de la respectiva confesión y los requeridos para su sostenimiento. (...)

**Artículo 19.** Prohibiciones para la localización de los equipamientos de culto. No se permitirá la localización de los equipamientos de culto en:

1. Los componentes de la estructura ecológica principal, es decir, en el Sistema de Áreas Protegidas, los parques urbanos, los corredores ecológicos y el Área de Manejo Especial del Río Bogotá.
2. Dentro del suelo rural en el Parque Minero Industrial del Mochuelo y en las zonas reservadas para el manejo y disposición final de residuos sólidos.
3. Las áreas de riesgo no mitigable.
4. En el sistema de espacio público (...)

**Artículo 21.** Localización en corredores viales rurales. (...) En todos los corredores viales rurales se permite únicamente la localización de los equipamientos de culto de escala zonal y vecinal.

Los equipamientos que se localicen en los tramos que atraviesen elementos del sistema de áreas protegidas del orden nacional y regional, se acogerán a lo dispuesto en las normas vigentes. (...)

**Artículo 29.** Impactos sonoros. Todos los equipamientos de culto deberán cumplir con las restricciones de ruido establecidas por el Departamento Administrativo del Medio Ambiente y por el Ministerio de Salud o las entidades que hagan sus veces, plasmadas en las diferentes normas vigentes. En caso de no existir reglamentación específica en la materia para el sector, el equipamiento se deberá acoger a lo definido por el Acuerdo 20 de 1995 y las normas que lo modifiquen o complementen. (...)

**Artículo 32. Exigencias de Estacionamientos.** La exigencia de estacionamientos de los equipamientos de culto se regirá por lo estipulado para las áreas de demanda definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. (...) siguientes condiciones:

- a.. Se podrá disminuir la exigencia de parqueaderos hasta en un 25% cuando estos equipamientos estén localizados en el área de influencia de la red de corredores troncales de buses y sus rutas alimentadoras, construida, no mayor a 500 metros.
- b.. Los equipamientos de culto existentes deberán hacer convenios para la prestación del servicio de estacionamiento en un radio máximo de 500 metros. (...)

**Artículo 50.** Volumetría: Los equipamientos de rito, sujetos a regularización no estarán sometidos a la altura definida en la norma del sector. El área neta de celebración en todas las escalas deberá ser mínimo el doble de la altura permitida por piso en concordancia con el artículo 390 del POT. (...)

**Artículo 63.** Impactos sociales del Plan. El Plan Maestro de Equipamientos de Culto contribuirá en:

- a. La protección de la vida y del derecho al ejercicio de la libertad de culto de la comunidad que concurre a los equipamientos; permitirá el confort y la habitabilidad de estos espacios, el mejoramiento de la accesibilidad física como resultado de una localización más equilibrada en el territorio.
- b. La disminución de los conflictos y querellas civiles asociados a los impactos negativos que se ocasionan durante las actividades del culto.
- c. El aumento de la aceptabilidad de la actividad de culto en el territorio.
- d. Aumento de la disponibilidad de espacio público en la ciudad como resultado de las compensaciones y sustituciones.

### **DECRETO 076 DE 2011**

**"Por el cual se modifica el artículo 4 y se deroga el artículo 52 del Decreto Distrital 311 de 2006 que adoptó el Plan Maestro de Equipamientos de Culto para Bogotá, D. C."**

**Artículo 1º.** Modificar el artículo 4 del Decreto Distrital 311 de 2006, el cual quedará así:

"El Plan Maestro de Equipamientos de Culto tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019. Para tales efectos, se considera el corto plazo desde la fecha de publicación de este decreto hasta el 31 de diciembre del año 2013; como mediano plazo, hasta el 31 de diciembre del año 2015, y como largo plazo, hasta el 31 de diciembre del año 2019".

## **JURISPRUDENCIA COLOMBIANA**

### **SENTENCIA C-027 DE 1993**

**CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD LEY 20 DE 1974 (Por la cual se aprueba el Concordato y Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973". M.P. SIMÓN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**

El pilar esencial del Derecho de los Tratados está representado por el principio Pacta Sunt Servanda, el cual obliga a Colombia en cuanto norma de derecho consuetudinario y en cuanto norma de derecho internacional convencional, según la consagración positiva de la Convención de Viena, preceptuando que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Por otra parte,

expone la Corte Constitucional que el concordato en comento es un Convenio Internacional de carácter bilateral, que no admite pacto en contrario dada la naturaleza de lo que protege como consecuencia de su aceptación universal o normas jus cogens.

Afirma la singularidad de dicho concordato por cuanto la libertad de cultos, de conciencia, de expresión y el principio de igualdad se predicen del hombre como sujeto autónomo. El convenio considera a la Religión católica como elemento fundamental del bien común, aspecto que no contraviene la Constitución por cuanto corresponde a los fines del estado plasmados en ella. Una manifestación de la libertad religiosa, es la de aceptar la independencia y autonomía de la autoridad eclesiástica Católica como realidad viviente y hecho sociológico e indiscutible del pueblo colombiano.

### SENTENCIA T- 342 DE 1994

#### **LIBERTAD DE CULTOS, DERECHO A LA IGUALDAD NUKAK MAKU. M.P. ANTONIO BARRERA CARBONELL**

Acción de tutela contra la ("Asociación Nuevas Tribus de Colombia"), según la demanda es una organización que desarrolla acciones de proselitismo religioso y conversión ideológica, desarraigando la doctrina indígena, sustituyendo las prácticas curativas propias de la tribu, también desarrolla investigaciones etnográficas y lingüísticas sin el conocimiento, dirección o participación de entidades estatales o para el beneficio de las mismas, ocasionando el rompimiento de la estructura social de la comunidad Nukak Maku, ubicada en el Lago Pabon del Departamento del Guaviare.

#### *Decisión de la Corte*

La Corte Constitucional advierte sobre la pluralidad cultural de la Nación. La diversidad en cuanto a la raza y a la cultura, es decir, la no coincidencia en el origen, color de piel, lenguaje, modo de vida, tradiciones, costumbres, conocimientos y concepciones, con los caracteres de la mayoría de los colombianos, es reconocida en el ordenamiento jurídico protege "la diversidad étnica y cultural de su población" y las "riquezas culturales y naturales de la nación". Cualquier acción de las autoridades públicas o de los particulares que impliquen violación o amenaza de la diversidad étnica y cultural de la comunidad "Nukak-Maku", puede configurar la transgresión o amenaza de vulneración de otros derechos que son fundamentales,

como la igualdad, la libertad, la autonomía para el desarrollo de la personalidad, la salud y la educación.

Por otra parte expone la Corte que, dentro de las garantías a la libertad religiosa se presenta la de profesar las creencias de manera pública y privada, sin embargo la misma tiene unos límites, la libertad reconocida por la Carta Política para profesar y difundir una religión, que comporta el deber correlativo de no pretender, a través de la fuerza o de otros medios censurables e ilegítimos, homogeneizar religiosa ni culturalmente los diferentes estamentos sociales, significa entonces para la comunidad indígena “Nukak-Maku” el derecho a conocer y practicar cualquier otra clase de pensamiento o culto religioso, lo cual es posible, sin que ello conduzca inevitablemente a una situación de conflicto entre su cultura y la de los extraños.

### **SENTENCIA C-088 DE 1994**

#### ***LIBERTAD DE CULTOS, LIBERTAD DE RELIGIÓN. M.P. FABIO MORÓN DÍAZ***

Revisión previa del Proyecto de Ley Estatutaria sobre Libertad Religiosa. No. 209 Senado. 1 Cámara. Legislatura de 1992. “Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política”

#### **PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE LIBERTAD RELIGIOSA- Contenido**

El proyecto de ley estatutaria de libertad religiosa y de cultos, no se ocupa solamente del punto de la creencia, profesión o difusión, individual o colectiva del culto, sino de la existencia organizada de las iglesias y de las confesiones religiosas como personas jurídicas, con capacidad de producir efectos normativos, fiscales, civiles, subjetivos, personalísimos, de crédito, reales y de derecho público y de cooperación, y de la relación de las personas con aquellas en cuanto a determinadas manifestaciones de la libertad.

#### **PREVALENCIA DE TRATADOS INTERNACIONALES/DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS**

El proyecto hace énfasis en la necesidad de aplicar, por vía de autoridad, los criterios desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos, para los fines de la interpretación de la parte



de los derechos constitucionales fundamentales que se ocupa de ellos, y así el legislador destaca que es su voluntad la de respetar las orientaciones del Constituyente en esta materia; además, allí se indica que se trata de un derecho humano de aquellos que son indisponibles y que en ningún caso pueden ser desconocidos por las autoridades públicas, ni por los particulares, pues se proyecta en todas sus dimensiones a las relaciones entre particulares.

#### ORDEN PÚBLICO EN MATERIA RELIGIOSA

El orden público como límite al ejercicio del derecho de libertad religiosa, hay que concebirlo como medio para lograr el orden social justo al que se refiere la Carta de 1991, tanto en su preámbulo como en su artículo segundo. Este orden social justo se funda en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales y en el cumplimiento de los fines propios del Estado Social de Derecho.

**LIBERTAD DE RELIGION-Límites.** Los límites al ejercicio de la libertad religiosa están en tres postulados: 1) La presunción debe estar siempre a favor de la libertad en su grado máximo, 2) Esta sólo puede restringirse en la medida en la que, racional y objetivamente, "la libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias en una sociedad democrática", 3) Las posibles restricciones deben ser establecidas por la ley, no arbitrarias ni discrecionales, como corresponde a un verdadero Estado de Derecho.

### SENTENCIA C-511 DE 1994

#### **LIBERTAD DE CONCIENCIA, OBJECCIÓN DE CONCIENCIA. M.P. FABIO MORÓN DÍAZ**

Dos ciudadanos presentan demandas de inconstitucionalidad ante la Corte, de los artículos 4o. (parcial), 9o. (parcial), 10, 11, 13 (parcial), 14, 41 (parcial), 42, 49 (parcial), 55 (parcial), 57 y 36, 37, 41 (todos parcialmente), de la Ley 48 de 1993 "Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización.

#### *Decisión de la Corte*

La Corte realiza un análisis del alcance del servicio militar obligatorio, en principio lo entiende como un deber de los ciudadanos para mantener la

integridad nacional. Sostiene que los mayores de 15 años y menores de 18 que deseen prestar servicio militar voluntario pueden ser aceptados.

Al hablar de la libertad y objeción de conciencia, se remite al concepto utilizado en la T-409 de 1992, "La garantía de la libertad de conciencia no necesariamente incluye la consagración positiva de la objeción de conciencia para prestar el servicio militar. Esta figura, que en otros sistemas permite al individuo negarse a cumplir una obligación como la mencionada cuando la actividad correspondiente signifique la realización de conductas que pugnan con sus convicciones íntimas, no ha sido aceptada por la Constitución colombiana como recurso exonerativo de la indicada obligación". Un deber constitucional no puede entenderse como la negación de un derecho, pues sería tanto como suponer, en el constituyente, trampas a la libertad.

Declarar exequibles los artículos 4o. (parcial), 9o., 10, 11 (parcial), 13, 14, 42 literal a), 49 (parcial), 55 (parcial) y 57 de la Ley 48 de 1993.

### **SENTENCIA T-200 DE 1995**

**LIBERTAD DE CULTOS, AUTONOMÍA DE LAS RELIGIONES. M.P.  
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO**

#### **LIBERTAD DE CULTOS-Alcance/LIBERTAD DE CULTOS-Limitaciones**

Ciudadanas que interponen acción de tutela contra la Arquidiócesis de Manizales, una de las ciudadanas es madre soltera, otra procreó en unión marital de hecho y la tercera civilmente casada. Afirman ser católicas y querer educar a sus hijos en dicha fe. Las tres mujeres afirman que, al intentar bautizar a sus hijos, algunas parroquias niegan el derecho, bajo el argumento de que son "hijos del pecado".

#### *Decisión de la Corte*

La garantía constitucional responde a la libertad de practicar el culto y profesar la fe, de manera individual y colectivamente, la difusión del credo y de los principios que orientan dicha religión. Sin embargo, observa la Corte, estas libertades no son absolutas, pues encuentran sus límites en el imperio del orden jurídico, en el interés público y en los derechos de los demás. Su ejercicio abusivo, como el de cualquier otro derecho, no puede llevar a convertir la libertad de cultos en motivo para cercenar los demás derechos fundamentales, lo anterior

tratándose de aquel fanatismo religioso que pone en peligro los derechos a la vida e integridad de las personas.

Igualmente hacen parte de la garantía constitucional la autonomía de las autoridades eclesiásticas y la fijación de las normas con base en las cuales ellas actúan, decisiones de dichas autoridades que se convierten en obligatorias para sus fieles. Observa la Corte que las normas establecida en el marco de su autonomía no dependen del Estado, lo que se configura en la protección de la verdadera libertad de religiosa.

### SENTENCIA T-327 DE 2009

**LIBERTAD DE RELIGIÓN, LIBERTAD DE CONCIENCIA. M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB**  
**LINEA JURISPRUDENCIAL SOBRE EL DERECHO AL SABATH DE LOS MIEMBROS DE COMUNIDADES RELIGIOSAS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA**

Ciudadano que trabaja para una Fundación Medica, en el cargo de coordinador de sistemas, manifiesta ser miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, razón por la cual debe guardar el día sábado como un "día de precepto o día de guarda". El accionante pactó con su empleador desde el inicio de su contrato, un horario laboral de lunes a viernes, compensando horas adicionales de la jornada laboral del sábado. Posteriormente se le negó el permiso los días sábados y le fue dado por terminado su contrato con justa causa.

#### *Decisión de la Corte*

- (i) El derecho a la libertad de conciencia y de cultos implica no sólo la protección de sus manifestaciones privadas, sino la de su ejercicio público y divulgación
- (ii) Los conflictos entre la libertad religiosa y algunos derechos patronales como la determinación del horario, debe resolverse bajo el principio de minimización de los límites a esta libertad. En efecto, el derecho fundamental a la libertad religiosa de toda persona, incluye la protección de guardar un día de descanso para la adoración de Dios cuando ésta constituya un elemento fundamental de la religión que se profesa y la creencia de la

persona es seria y no acomodaticia. Así, esta garantía no puede ser desconocida por el patrono imponiendo horarios de trabajo el día de adoración, cuando existen medios alternativos a su alcance y

- (iii) Teniendo en consideración que el ámbito de protección constitucional del derecho a la libertad religiosa de las personas que pertenecen a la iglesia adventista del séptimo día, comprende el derecho a que tanto las instituciones educativas como los lugares donde laboran, tomen en consideración la santidad del Sabbath para los mismos, esta garantía no puede supeditarse a un acuerdo previo de las partes.

### **SENTENCIA T- 493 DE 2010**

#### **LIBERTAD RELIGIOSA, PRINCIPIO DE IGUALDAD. M.P. JORGE IGNACIO PRETEL CHALJUB**

Caso en que el ICFES no le permite a un miembro de la Iglesia Evangélica Libre de Quibdó presentar el examen de Estado para el ingreso a la Educación Superior en un día distinto al día domingo. Los argumentos esgrimidos por el Instituto consisten en afirmar que los derechos adquiridos por las Iglesias que suscriben el Convenio de Derecho Público – Decreto 354 de 1998 –, no pueden hacerse extensibles a las demás confesiones religiosas.

#### *Decisión de la Corte*

La Corte observa lo siguiente, de conformidad con el texto superior, el derecho a la libertad religiosa implica no sólo la posibilidad de profesar de manera privada y silenciosa el credo de la preferencia, si no que la garantía se extiende a la difusión y realización de actos públicos asociados con las convicciones espirituales. La libertad religiosa, entonces, garantizada por la Constitución, no se detiene en la asunción de un determinado credo, sino que se extiende a los actos externos en los que éste se manifiesta. (...)

En relación con la esfera privada, se destaca, en primer lugar, el derecho que tienen todas las personas a profesar una religión y a difundirla en forma individual o colectiva y, en segundo lugar, el derecho de toda persona a celebrar ceremonias, ritos y actos de acuerdo con sus propias convicciones religiosas. En el campo de lo público, el derecho a la libertad religiosa supone poner en pie de

*igualdad a todas las confesiones religiosas e iglesias ante la ley y, en consecuencia, eliminar el carácter confesional del Estado. De este modo se consagra la laicidad del poder público y se afirma el pluralismo religioso.*

## SENTENCIA C-817 DE 2011

### **LIBERTAD RELIGIOSA, ESTADO LAICO Y PLURALISMO RELIGIOSA. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA**

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1402 de 2010 "por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años de la Diócesis de El Espinal y se declara monumento nacional a la catedral de El Espinal, en el departamento del Tolima."

Se distinguen los siguientes tipos de Estado de acuerdo a la manera como resuelven la cuestión religiosa:

1. Estados confesionales, los cuales adscriben el aparato estatal a un credo particular y específico y, de manera correlativa, prohíben o restringen la práctica de otras expresiones religiosas distintas. Estas medidas no solo toman la forma de desestímulos para la práctica de credos diferentes, sino la asimilación de la población al credo oficial, por lo que es usual que las prescripciones religiosas tengan carácter jurídico formal.
2. Estados que tienen una religión oficial, pero que a su vez son tolerantes a otras prácticas religiosas, razón por la cual no imponen sanciones a quienes no comparten el credo estatal. En este escenario, resultan admisibles regulaciones legales que promuevan la religión del Estado o que le reconozcan tratamientos preferentes respecto de otras religiones. La doctrina constitucional en comento señala que dentro de esa categoría se encuentran dos vertientes: la conformada por los Estados con religión oficial, pero que toleran otros credos; y el grupo de Estados que, como sucede con el Reino Unido, tienen una religión oficial, pero aceptan la plena libertad religiosa para sus ciudadanos. Como se explicará con mayor detalle en el fundamento jurídico siguiente, el Estado colombiano regulado por la Constitución anterior adscribía a la primera vertiente de este modelo.
3. Estados que, aunque no asumen oficialmente una religión oficial, esto es, a través de normas jurídicas formales, en todo

- caso admiten la validez en su ordenamiento de normas que otorgan tratamiento preferencial a un credo particular, merced de su carácter mayoritario y/o su vínculo con una práctica social igualmente mayoritaria. Es decir, son estados de orientación confesional.
4. Estados que, siendo ejemplos paradigmáticos Estados Unidos y Francia, basan su modelo de organización política en un criterio secular, fundado en la estricta separación entre iglesias y Estado, al igual que en el reconocimiento de la libertad religiosa y en la correlativa prohibición para el Estado de prohiar un credo particular. Así, como lo indica la sentencia C-350/94 “[e]stos regimenes constitucionales reconocen el hecho religioso y protegen la libertad de cultos, pero, por su laicismo, no favorecen ninguna confesión religiosa por cuanto consideran que ello rompería la igualdad de derecho que debe existir entre ellas. Ello implica, como contrapartida, que la autonomía de las confesiones religiosas queda plenamente garantizada, puesto que, así como el Estado se libera de la indebida influencia de la religión, las organizaciones religiosas se liberan de la indebida injerencia estatal.” Para efectos de esta sentencia, esta categoría será definida como de estados laicos o seculares.
  5. Estados que manifiestan expresamente que son ateos y, a su vez, intolerantes de toda práctica religiosa. La Corte en la sentencia en comento trae a colación para esta categoría el ejemplo de la Constitución de la República Socialista de Albania de 1976, la cual en su artículo 54 prohibía la creación de organizaciones religiosas, y en su artículo 36 establecía que “el Estado no reconoce ninguna religión y fomentará y desarrollará la propaganda ateísta con el fin de infundir al pueblo la concepción materialista científica del mundo”. Sin embargo, la misma decisión señaló que esta postura es contraria a los derechos humanos y, por ende, al modelo democrático.

### **SENTENCIA T- 077 DE 2015**

#### **LIBERTAD DE CULTOS, LIBERTAD DE CONCIENCIA, PRIVADOS DE LA LIBERTAD. M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO**

Personas privadas de la libertad que pertenecen a la doctrina evangélica de los Nazarenos, quienes según sus convicciones “es un pecado deshonroso ante los ojos de Dios, despojarse de sus barbas y pelo”. Los ciudadanos interponen acción de tutela contra el Complejo Carcelario de Jamundí, entidad que se ha negado a responder sus peticiones sobre su presentación personal y el ingreso de túnicas para sus ritos ceremoniales.

*Decisión de la Corte***DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**-Obligación del Estado de garantizarlos.

Por mandato constitucional se protege tanto la posibilidad de profesar de manera privada y silenciosa el credo de la preferencia, como la difusión y realización de actos públicos asociados con las convicciones espirituales. Así, la garantía no se detiene en la asunción de un determinado credo, sino que se extiende a los actos visibles en los que este se manifiesta. Además de las manifestaciones sociales del culto, el texto Superior permite que el practicante se niegue a realizar aquellas conductas que vayan en contra de su conciencia. Lo anterior, por cuanto para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas de su religión reviste una importancia cardinal, puesto que ella determina la mayoría de sus proyectos de vida personal. Ahora bien, respecto de la libertad de cultos esta Corporación ha señalado que se trata de una garantía que no cuenta con atribuciones absolutas que le permitan desconocer otros derechos fundamentales igualmente protegidos.

**SENTENCIA SU- 626 /2015****LIBERTAD RELIGIOSA, LIBERTAD DE CONCIENCIA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN. M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO**

**LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS**-Alcance de la protección, El reconocimiento y protección de la libertad religiosa y de cultos impone al Estado la obligación no solo de abstenerse de adoptar medidas que puedan afectar indebidamente su ejercicio sino también la obligación de adoptar y aplicar normas que aseguren su respeto. Se trata de la dimensión prestacional de las libertades reconocidas en el artículo 19 y exige de las autoridades públicas -con fundamento en el artículo 2º de la Carta- acciones fácticas y normativas encaminadas a garantizar la igual protección de las iglesias, confesiones así como de sus integrantes. No obstante la posición especial que el Estado tiene en relación con la protección de esta libertad, la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares -según se desprende de los artículos 6º y 86 de la Constitución- supone que estos también se encuentran vinculados por deberes de respeto exigibles directamente y cuya infracción puede plantearse mediante el ejercicio de la acción de tutela.

### **LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CONCIENCIA-Diferencias y relación**

La protección de la libertad religiosa se encuentra estrechamente vinculada con el amparo de la libertad de conciencia y pensamiento. Se trata de libertades que otorgan a la persona una particular inmunidad en el proceso de definición y delimitación del propio sistema de creencias. Estas libertades imponen a los Estados y a los particulares, una prohibición absoluta de adoptar comportamientos que tengan por objeto o como efecto coaccionar a las personas en relación con la forma de valorar y vivir sus relaciones trascendentes; según este Tribunal “[l]a vida religiosa es del fuero íntimo del ser, de suerte que resulta intolerable la posibilidad de ser manipulada desde el exterior.” En esta dimensión se trata del derecho a “profesar de manera privada y silenciosa el credo de la preferencia”. De manera particular, la libertad religiosa le permite al individuo adherirse o no a un sistema de creencias relacionado con la trascendencia, la divinidad y su veneración, de forma que no será posible que el Estado o los particulares impongan tal sistema o intenten hacerlo. Se trata de un derecho absoluto a oponerse a cualquier injerencia indebida en una de las manifestaciones más básicas de la dignidad del ser humano. Esta dimensión de la libertad religiosa se encuentra directamente conectada con el ámbito de protección del derecho a la intimidad de manera tal que, sin perjuicio de las facultades de los padres’ o tutores respecto de los hijos en materia educativa, este derecho es absolutamente irrestringible.

## **MARCO INTERNACIONAL**

### **CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS**

#### **BAYATYAN VS. ARMENIA (SOLICITUD N° 23459/03)**

El caso se refiere al objetor de conciencia armenio Vahan Bahatyan, nacido en 1983, y residente en Yerevan, Armenia. Es un Testigo de Jehová que se negó a prestar el servicio militar por motivos de conciencia. En el 2001 fue condenado a una pena de prisión de un año y medio. Su sentencia fue aumentada en un año después de que el Fiscal apelara a una sentencia más severa, alegando que su objeción de conciencia era “infundada y peligrosa”. Cuando esta decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo de Armenia, Bayatyan llevó su caso ante el Tribunal Europeo y éste decidió en su contra. [www.old.wri-irg.org/es/node/9442](http://www.old.wri-irg.org/es/node/9442)



Posteriormente llevó su caso ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien, en el año 2011, dictaminó que Armenia había vulnerado su derecho a la objeción de conciencia.

Para el Tribunal los artículos 9 y 14 de la Convención son aplicables al caso. Respecto al artículo 9º se evidenció la violación al derecho a la libertad religiosa, el Tribunal delimitó el derecho a la igualdad y no discriminación en el sentido en que este derecho se aplica en una faceta positiva y negativa, en la faceta negativa es la prohibición de un trato discriminatorio en situaciones que no requieran un trato diferenciado, en la faceta positiva, la no discriminación implica igualdad dentro de la diferencia, es decir, un trato igual para situaciones iguales y un trato diferencial para situaciones diferenciales. El Tribunal consideró que no hubo justificación suficiente por parte del Estado para no dar un trato diferencial a aquellas personas que estuvieran detenidas por la no prestación del servicio militar basado en sus creencias religiosas.

## CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

### CASO: MARÍA ELENA LOAYZA TAMAYO VS. PERÚ

La señora María Elena Loiza Tamayo profesora universitaria fue detenida por la policía (División Nacional Contra el Terrorismo DINCOTE) el día 6 de febrero de 1993 en la ciudad de Lima (Perú), por su presunta colaboración con el grupo Sendero Luminoso. Se le mantuvo retenida en las instalaciones de la Veterinaria del Ejército por varios días y manifestó la actora que fue víctima de tortura y violación por parte de miembros de la DINCOTE, continuó detenida y fue juzgada por el delito de "terrorismo" por la jurisdicción civil.

*La Corte concluye que el Perú violó en perjuicio de la señora María Elena Loayza Tamayo el derecho a la libertad personal, el derecho a la protección judicial y la dignidad humana, establecidos respectivamente en los artículos 7 y 25 de la Convención Americana. La incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, los golpes y otros maltratos como el ahogamiento, la intimidación por amenazas de otros actos violentos, las restricciones al régimen de visitas (...), constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 5.2. de la Convención Americana.*

Adicionalmente, en el voto razonado del conjunto de jueces en el caso Loayza Tamayo Vs. Perú, la Corte hace una serie de recomendaciones frente a la reparación integral, y relacionadas con el daño al proyecto de vida, solicitando que en el futuro se reoriente y enriquezca la jurisprudencia en la materia.

15. Entendemos que el proyecto de vida se encuentra indisolublemente vinculado a la libertad, como derecho de cada persona a elegir su propio destino. Así lo ha conceptualizado correctamente la Corte en la presente Sentencia, al advertir que “difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación de esta Corte”

16. El proyecto de vida envuelve plenamente el ideal de la Declaración Americana de 1948 de exaltar el espíritu como finalidad suprema y categoría máxima de la existencia humana. El daño al proyecto de vida amenaza, en última instancia, el propio sentido que cada persona humana atribuye a su existencia. Cuando ésto ocurre, un perjuicio es causado a lo más íntimo del ser humano: tratase de un daño dotado de autonomía propia, que afecta el sentido espiritual de la vida.

## **LA ÚLTIMA TENTACIÓN DE CRISTO (OLMEDO BUSTOS Y OTROS) VS. CHILE**

Demanda contra el Estado de Chile por vulnerar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes, como resultado de la censura judicial impuesta a la exhibición cinematográfica de la película “La Última Tentación de Cristo”.

La Corte Interamericana consideró que El Estado de Chile, violó el artículo 13 de la Convención Americana, dado que el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión no puede estar sujeto a censura previa. La Corte observa que el Estado ha incumplido el deber general de respetar los derechos y libertades reconocidos en

aquella y de garantizar su libre y pleno ejercicio, como lo establece el artículo 1.1 de la Convención en el derecho de gentes. Una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. Esta norma es universalmente aceptada, con respaldo jurisprudencial.

Aclara que el Estado de Chile incumplió los deberes generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Decide que el Estado chileno debe modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película "La Última Tentación de Cristo", y debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de un plazo de seis meses a partir de la notificación de la Sentencia, un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto.

## DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (DIDH)

### CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 1945

#### **Los propósitos de las Naciones Unidas son:**

*Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;*

*Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;*

*3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las*

*libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión;*

*4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.*

## **LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CONSIGNA EL RESPETO POR LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES 1948**

**Artículo 18.** *"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".*

## **CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO 1948**

**Artículo 2.** *En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:*

- a)** *Matanza de miembros del grupo;*
- b)** *Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;*
- c)** *Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;*
- d)** *Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;*
- e)** *Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.*

## EL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DE 1950

**Artículo 9.** “Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Estipula que la libertad religiosa incluye el derecho a cambiar de religión y a manifestar públicamente las creencias. Establece los motivos que permiten restringir estos derechos”.

## CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS 1951

**Artículo 4. - Religión.** Los Estados Contratantes otorgarán a los refugiados que se encuentren en su territorio un trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la libertad de instrucción religiosa de sus hijos.

## CONVENCIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA, DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 1962

**Artículo 1.** A los efectos de la presente Convención, se entiende por «discriminación» toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial:

- a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza;
- b) Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo;

- c)** A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; o
- d)** Colocar a una persona o a un grupo de personas en una situación incompatible con la dignidad humana.

*A los efectos de la presente Convención, la palabra «enseñanza» se refiere a la enseñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de ésta y las condiciones en que se da.*

## **CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL 1965.**

La Convención afirma que no puede soportarse científicamente ninguna doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial, afirma que dichas conductas son moralmente condenables y socialmente injustas y peligrosas.

En su artículo 5, la convención compromete a los Estados parte a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley y al goce de los fundamentales entre ellos, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

## **EL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS – ART. 18, RATIFICADO POR COLOMBIA MEDIANTE LA LEY 74 DE 1968**

**Artículo 18.** "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar

su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

## **PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES, RATIFICADO EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO POR LA LEY 74 DE 1968.**

**Artículo 2.** “1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (...)”

**Artículo 13.** 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Conviene en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Conviene asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y

entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. (...)

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

## **CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ), RATIFICADO POR COLOMBIA EN LA LEY 16 DE 1972**

### **Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos.**

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

### **Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión**

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias



*está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.*

- 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. (...)*

### **Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión**

*(...) 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. (...)*

### **Artículo 16. Libertad de Asociación**

- 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. (...)*

## **DECLARACIÓN SOBRE TODAS LAS FORMAS DE INTOLERANCIA, DISCRIMINACIÓN FUNDADAS EN LA RELIGIÓN O CONVICCIONES, PROMULGADA POR ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 1981.**

La Declaración es enfática en afirmar que cualquier discriminación por motivos de religión o convicciones constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por tanto dichas discriminaciones, deben ser reconocidas como una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Pactos Internacionales y un obstáculo para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones.

Observa esta declaración que es deber de los Estados adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar toda discriminación por

motivos de religión o convicciones en el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en todas las esferas de la vida civil, económica, política, social y cultural.

## **Artículo 2**

1. *Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares.*
2. *A los efectos de la presente Declaración, se entiende por "intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones" toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales.*

## **Artículo 5**

- a) *Los padres o, en su caso, los tutores legales del niño tendrán el derecho de organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones y habida cuenta de la educación moral en que crean que debe educarse al niño.*
- b) *Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores legales, y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.*
- c) *El niño estará protegido de cualquier forma de discriminación por motivos de religión o convicciones. Se le educará en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y hermandad universal, respeto de la libertad de religión o de convicciones de los demás y en la plena conciencia de que su energía y sus talentos deben dedicarse al servicio de la humanidad.*
- d) *Cuando un niño no se halle bajo la tutela de sus padres ni de sus tutores legales, se tomarán debidamente en consideración los deseos expresados por aquéllos o cualquier otra prueba que se haya obtenido de sus deseos en materia de religión o de convicciones, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.*
- e) *La práctica de la religión o convicciones en que se educa a un niño no deberá perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral teniendo en cuenta el párrafo 3 del artículo 1 de la presente Declaración.*

## LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, RATIFICADA POR COLOMBIA MEDIANTE LEY 12/1991.

### Artículo 14

1. "Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.
3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás"

### **OBSERVACIÓN GENERAL NO. 22, COMENTARIOS GENERALES ADOPTADOS POR EL COMITÉ DE LOS DERECHOS HUMANOS, ARTÍCULO 18 - LIBERTAD DE PENSAMIENTO, DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN, 48º PERÍODO DE SESIONES, NACIONES UNIDAS (1993).**

Con respecto al Art. 18., el Comité manifiesta que dicha norma protege las creencias teístas, no teístas y ateas, advierte que los términos creencias y religión deben entenderse en un sentido amplio, cuya aplicación no se limita a las religiones tradicionales, de manera que las religiones minoritarias puedan ser objeto de hostilidades por parte de las religiones dominantes.

El Comité también expone que la libertad de manifestar la religión o las creencias mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza abarca una amplia gama de actividades entre ellas: actos rituales y ceremoniales con los que se manifiestan directamente las creencias, así como a las diversas prácticas que son parte integrante de tales actos, comprendidos la construcción de lugares de culto, el empleo de fórmulas y objetos rituales, la exhibición de símbolos y la observancia de las fiestas religiosas y los días de asueto.

La observancia y la práctica de la religión o de las creencias pueden incluir no sólo actos ceremoniales sino también costumbres tales como la observancia de normas dietéticas, el uso de prendas de vestir o tocados distintivos, la participación en ritos asociados con determinadas etapas de la vida, y el empleo de un lenguaje especial que habitualmente sólo hablan los miembros del grupo. La práctica y la enseñanza de la religión o de las creencias incluyen además la libertad de escoger a sus dirigentes religiosos, sacerdotes y maestros, la libertad de establecer seminarios o escuelas religiosas y la libertad de preparar y distribuir textos o publicaciones religiosos.

## **CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (1979). RATIFICADA POR COLOMBIA MEDIANTE LEY 984 DE 2005**

La Convención enfatiza en los derechos civiles, en la condición jurídica y social de la mujer y en el acceso sin discriminación en los campos de la educación, laboral, las actividades económicas y sociales. Observa que a través de aspectos culturales y de tradición se manifiestan los estereotipos, hábitos y normas que originan las múltiples limitaciones jurídicas, políticas y económicas al adelanto de la mujer.

**Artículo 1.** *A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.*

## DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH)

Los Convenios y Protocolos de Ginebra tienen como propósito limitar la barbarie y evitar la degradación de la guerra, también suponen una protección especial para aquellas personas que no participan directamente en los conflictos armados personal sanitario, personal religioso y personal de asistencia humanitaria.

### EL CONVENIO DE GINEBRA PARA ALIVIA LA SUERTE QUE CORREN LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN CAMPAÑA (CONVENIO I). APROBADO EL 12 DE AGOSTO DE 1949.

El convenio está dirigido brindar un trato humano y digno a los enfermos y heridos que estén en poder de las partes en conflicto. El Convenio define las prescripciones relativas al tratamiento de los muertos y el servicio de tumbas, donde las partes en conflicto, velarán por el entierro de los muertos de manera honrosa y si es posible, respetando las ritualidades según sus propias creencias. De igual manera este mismo instrumento, establece la protección para el personal sanitario, personal destinado a la administración de unidades y establecimientos sanitarios, personal de las sociedades de socorro, el personal religioso y capellanes, dicha protección conlleva la obligación de no reconocerlos como prisioneros de guerra, no ser retenidos y permitirles seguir prestando sus servicios bajo la dirección de la parte adversaria.

**Artículo 12 - Protección, trato y asistencia.** Los miembros de las fuerzas armadas y las demás personas mencionadas en el artículo siguiente, que estén heridos o enfermos, habrán de ser respetados protegidos en todas las circunstancias.

*Serán tratados y asistidos con humanidad por la Parte en conflicto que los tenga en su poder, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, las opiniones políticas o en cualquier otro criterio análogo. Está estrictamente prohibido todo atentado contra su vida y su persona, en particular matarlos o exterminarlos, someterlos a tortura, efectuar en ellos experimentos biológicos, dejarlos deliberadamente sin atención médica o sin asistencia, o exponerlos a riesgos de contagio o de infección causados con esa finalidad. (...)*

## **EL CONVENIO DE GINEBRA PARA ALIVIAR LA SUERTE QUE CORREN LOS HERIDOS, LOS ENFERMOS Y LOS NÁUFRAGOS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL MAR (CONVENIO II). APROBADO EL 12 DE AGOSTO DE 1949.**

Este convenio consagra un respeto y protección especial a personal religioso, médico y sanitario que preste asistencia médica y espiritual a los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar. El mismo convenio establece la protección de este personal, para aún cuando caiga en poder del enemigo, de manera que pueda continuar prestando sus servicios.

**Artículo 37** - *Personal sanitario y religioso de otros barcos. Será respetado y protegido el personal religioso, médico y sanitario que preste asistencia médica o espiritual a las personas mencionadas en los artículos 12 y 13 y que caiga en poder del enemigo; podrá continuar desempeñando su cometido mientras sea necesario para la asistencia a los heridos y a los enfermos. Después, deberá ser devuelto, tan pronto como el comandante en jefe en cuyo poder esté lo juzgue posible. Al salir del barco, podrá llevar consigo los objetos de propiedad personal (...)*

## **EL CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO DEBIDO A LOS PRISIONEROS DE GUERRA (CONVENIO III). APROBADO EL 12 DE AGOSTO DE 1949.**

El Convenio se aplica a los miembros de las fuerzas armadas, miembros de tripulaciones y población de los territorios ocupados a partir del momento en que caigan en poder del enemigo y hasta su liberación y su repatriación definitiva. Establece como principio, que los prisioneros de guerra deben ser liberados y repatriados sin demora tras el cese de las hostilidades activas. Consagra en el artículo 33, el principio de no discriminación para el personal religioso o sanitario, que asiste a los prisioneros de guerra. Así mismo, el convenio consagra la libertad para el ejercicio de la religión a los prisioneros, reservando lugares adecuados para la celebración de sus cultos.

**Artículo 34 - Religión.** Los prisioneros de guerra tendrán plena libertad para el ejercicio de su religión, incluida la asistencia a los actos de su culto a condición de que sean compatibles con las medidas de disciplina normales prescritas por la autoridad militar. Para los actos religiosos se reservarán locales adecuados.

**Artículo 35 - Capellanes retenidos.** Los capellanes que caigan en poder de la Potencia enemiga y que queden o sean retenidos para asistir a los prisioneros de guerra estarán autorizados a prestarles los auxilios de su ministerio y a ejercerlo libremente entre sus correligionarios, de conformidad con su conciencia religiosa. Estarán repartidos entre los diferentes campos o destacamentos de trabajo donde haya prisioneros de guerra pertenecientes a las mismas fuerzas armadas, que hablen el mismo idioma o pertenezcan a la misma religión. Disfrutarán de las facilidades necesarias, incluidos los medios de transporte previstos en el artículo 33, para visitar a los prisioneros de guerra en el exterior de su campamento. Tendrán, sometida a censura, libertad de correspondencia, para los actos religiosos de su ministerio, con las autoridades eclesiásticas del país donde estén detenidos y con las organizaciones religiosas internacionales. Las cartas y tarjetas que envíen con esta finalidad se añadirán al contingente previsto en el artículo 71.

## **CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEBIDA A LAS PERSONAS CIVILES EN TIEMPO DE GUERRA (CONVENIO IV). APROBADO EL 12 DE AGOSTO DE 1949.**

El presente Convenio protege a las personas que, en cualquier momento y de la manera que sea, estén, en caso de conflicto o de ocupación, en poder de una Parte en conflicto o de una Potencia ocupante de la cual no sean súbditas. El Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. Cobija a las personas que no participan directamente en las hostilidades incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, heridos o detenidos.

Según este convenio las personas protegidas que se encuentran en los territorios de las partes en conflicto y territorios ocupados, tienen derecho en todas las circunstancias a que su persona, su honor, sus derechos familiares, sus convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus costumbres sean respetados.

**Artículo 58 -** *Asistencia espiritual. La Potencia ocupante permitirá a los ministros de los diversos cultos la asistencia espiritual a sus correligionarios. Aceptará, asimismo, los envíos de libros y de objetos que requieran las necesidades de índole religiosa y facilitará su distribución en territorio ocupado.*

**Artículo 93 -** *Religión. Los internados tendrán plena libertad para el ejercicio de su religión, incluida la asistencia a los actos de su culto, a condición de que sean compatibles con las medidas de disciplina normales prescritas por las autoridades detenedoras.*

*Los internados que sean ministros de un culto estarán autorizados a ejercer plenamente su ministerio entre sus correligionarios. A este respecto, la Potencia detenedora velará por que estén repartidos equitativamente entre los diferentes lugares de internamiento donde haya internados que hablen el mismo idioma y pertenezcan a la misma religión. Si no los hay en número suficiente, les otorgará las facilidades necesarias, entre otras los medios de transporte, para trasladarse de un lugar de internamiento a otro, y estarán autorizados a visitar a los internados que haya en hospitales. Los ministros de un culto tendrán, para los actos de su ministerio, la libertad de correspondencia con las autoridades religiosas del país de detención, y, en la medida de lo posible, con las organizaciones internacionales de su confesión. Esta correspondencia no se considerará que es parte del contingente mencionado en el artículo 107, pero estará sometida a las disposiciones del artículo 112. (...)*



**PROTOCOLO I ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES 1977. ESTE PROTOCOLO CONFIERE UNA PROTECCIÓN ESPECIAL HACIA LOS HERIDOS Y ENFERMOS SEAN MILITARES O CIVILES, LAS PARTURIENTAS, LOS RECIÉN NACIDOS, LOS INVÁLIDOS Y LAS MUJERES ENCINTA, NÁUFRAGOS, PERSONAL SANITARIO Y PERSONAL RELIGIOSO EN LA QUE SE REQUIERE A LOS ESTADOS CONTRATANTES ABSTENERSE DE CUALQUIER ACTO DE HOSTILIDAD CONTRA ESTAS POBLACIONES.**

**Artículo 10 -** *Protección y asistencia.*

1. *Todos los heridos, enfermos y náufragos, cualquiera que sea la Parte a que pertenezcan, serán respetados y protegidos.*
2. *En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la medida de lo posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su estado. No se hará entre ellos ninguna distinción que no esté basada en criterios médicos.*

**Artículo 15 -** *Protección del personal sanitario y religioso civil.*

1. *El personal sanitario civil será respetado y protegido.*
2. *En caso necesario se proporcionará al personal sanitario civil toda la ayuda posible en aquellas zonas en las que los servicios sanitarios civiles se encuentren desorganizados por razón de la actividad bélica.*
3. *En los territorios ocupados, la Potencia ocupante proporcionará al personal sanitario civil toda clase de ayuda para que pueda desempeñar su misión humanitaria de la mejor manera. La Potencia ocupante no podrá exigir que, en el cumplimiento de su misión, dicho personal dé prioridad al tratamiento de cualquier persona, salvo por razones de orden médico. No se le obligará a realizar tareas que no sean compatibles con su misión humanitaria.*

4. *El personal sanitario civil podrá trasladarse a los lugares donde sus servicios sean indispensables, sin perjuicio de las medidas de control y seguridad que la Parte en conflicto interesada juzgue necesarias.*
5. *5. El personal religioso civil será respetado y protegido. Son aplicables a estas personas las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo relativas a la protección y a la identificación del personal sanitario.*

## **PROTOCOLO II ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL 1977.**

Este protocolo se aplica a todos los conflictos armados que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

**PROTOCOLO III ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949. RELATIVO A LA APROBACIÓN DE UN SIGNO DISTINTIVO ADICIONAL, 2005. ESTE SIGNO DISTINTIVO ADICIONAL, DENOMINADO COMO EL "EMBLEMA DEL TERCER PROTOCOLO", SE CREA POR CUANTO LOS EMBLEMAS QUE SE VIENEN UTILIZANDO TALES COMO LA MEDIA LUNA ROJA Y EL LEÓN Y EL SOL ROJOS, SE ENTENDÍAN EN ALGUNOS CONTEXTOS CON ALGUNA CONNOTACIÓN RELIGIOSA O POLÍTICA.**

**Artículo 1.** *Respeto y ámbito de aplicación del presente Protocolo*

1. *Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el presente Protocolo en todas las circunstancias.*
2. *El presente Protocolo, en el que se reafirman y completan las disposiciones de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 ("Convenios de Ginebra") y, cuando sea aplicable, de sus dos Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 ("Protocolos adicionales de 1977") relativas a los signos distintivos, a saber, la cruz roja, la media luna roja y el león y sol rojos, se aplicará en las mismas situaciones que esas disposiciones.*

## Sección B

### 2.3 Pertinencia de la Política Pública

A través de su historia, la humanidad ha experimentado innumerables conflictos entre religiones, que han devenido en exterminio étnico o genocidio de millones de personas en razón de diferencias doctrinales. Durante la Edad Media, la reforma protestante y la contrarreforma católica, las guerras de religión de Francia durante el siglo XVI –enfrentamientos civiles entre católicos y protestantes calvinistas–, las Guerras de los Tres Reinos de 1639 entre Escocia con la reforma protestante encabezada por John Knox, Irlanda con el catolicismo e Inglaterra con la Iglesia Anglicana de Enrique VIII, entre otros episodios históricos de similar trascendencia.

Más recientemente, la guerra civil española iniciada en 1936 encarnó no solo una lucha entre un régimen de facto de cuño militarista-autoritario en ciernes y unas facciones demócratas de resistencia, también supuso una contienda religiosa que desató la persecución y asesinato de clérigos de la iglesia católica. Otro tanto revela el conflicto armado y religioso de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que tuvo como consecuencia el asesinato de millones de judíos, islamistas, Testigos de Jehová, comunistas, gitanos y homosexuales, hoy catalogada una de las mayores matanzas por intolerancia religiosa registradas en la historia de la humanidad. La guerra civil entre judíos y árabes a partir de la creación del Estado de Israel y la reclamación de los árabes por su propio territorio, es aún una guerra inconclusa.

Igualmente, ilustrativos se muestran los conflictos entre el Cristianismo y el Islam, la guerra Bosnia- Herzegovina marcada por la identidad étnica y la religión (musulmanes, cristianos ortodoxos y católicos) que involucró violaciones masivas de mujeres musulmanas por los serbios cristianos, limpieza étnica mediante el genocidio y el desplazamiento forzado, destrucción de lugares de culto y cementerios. Así mismo, en América Latina la polarización política conservadora-liberal determinó varios conflictos: de un lado los conservadores destinatarios del respaldo de la Iglesia Católica y, de otra parte, el pluralismo religioso defendido por el liberalismo.

Es importante también resaltar los movimientos religiosos motivados por Martin Luther King, que suscitaron cambios trascendentales en la sociedad norteamericana a partir de la década del sesenta del siglo XX. La defensa de los derechos civiles y políticos de los afroamericanos, se estableció con un llamado a la conciencia y las ideas religiosas de los ciudadanos norteamericanos, para develar las profundas desigualdades que daban forma a una discriminación sedimentada por siglos.

La violencia política en Colombia no se sustrajo al fenómeno, pues destacó su marcado acento religioso. Mientras los conservadores estaban apoyados por amplios sectores de la Iglesia Católica, el nuevo protestantismo fue apoyado por los sectores liberales del país. Un estudio del balance bibliográfico sobre el hecho religioso en Colombia (Plata y Vega, 2005) sostiene que la religión propició la intolerancia, la violencia y la guerra, pero aproximaciones más recientes e interdisciplinarias asocian la religión con el cambio social, la búsqueda de la paz y la resistencia al conflicto armado. El informe referenciado señala que la iglesia dominante fue promotora de la persecución religiosa contra los grupos protestantes que arribaron al país durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX.

Por su parte, el enlace entre religión, cambio social y búsqueda de la paz tiene entre sus precedentes la experiencia del sacerdote Camilo Torres Restrepo en la dirigencia de la organización social "Frente Unido", y en las primeras etapas de conformación del grupo revolucionario Ejército de Liberación Nacional – ELN. Las ideas del clérigo repercutieron significativamente en el surgimiento de la denominada "Teología de la Liberación", corriente que defiende la dignidad humana como eje esencial para la eliminación de toda injusticia, exclusión y marginación, partiendo del reconocimiento de la realidad social y una participación más activa de la Iglesia en la reducción de dichas desigualdades.

La naciente conexión entre religión, no violencia, cambios sociales y paz define este nuevo enfoque, desde el cual las iglesias resitúan su labor en ámbitos como la educación y el trabajo con énfasis en el campesinado colombiano, junto a una incursión creciente en la defensa de los Derechos Humanos por parte de líderes religiosos.

El mundo enfrenta hoy un período de cambios drásticos asociados a ideologías políticas y nuevos equilibrios de poder, fenómenos como la inmigración y el terrorismo alimentan el nacionalismo, el racismo y la xenofobia, algunos países incluso consideran como alternativa levantar muros para blindar a sus naciones de amenazas provenientes de otros países, sumadas a las amenazas de grupos fundamentalistas y sus acciones terroristas, del narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de personas, tráfico de armas y amenazas nucleares.

Las concepciones modernas más radicales del Estado y la sociedad han relegado el campo religioso, desconociendo su relevancia en tanto marco simbólico no aislado del resto de los fenómenos sociales. Ese desconocimiento se hace aún más problemático en América Latina y en el contexto colombiano, donde conviven las cosmovisiones premoderna, moderna y postmoderna. La premoderna caracterizada por la centralidad

de la visión popular católica, la moderna por el avance de la ciencia y la centralidad de la razón en desmedro de cualquier paradigma asociado a la religión, y la postmoderna que acoge la pluralidad de las visiones religiosas asumiendo el componente religioso en la naturaleza del ser humano.<sup>1</sup>

Es necesario profundizar sobre el posicionamiento de las comunidades religiosas como gestoras y promotoras de programas sociales frente y bajo la coordinación del Estado, aspecto que implica el reconocimiento de nuevos actores sociales de índole religioso dentro de la sociedad civil.

Ello conlleva a que las comunidades religiosas, en medio de su multiconfesionalidad, propendan por una mayor representatividad en el seno de la sociedad, buscando todas las confluencias posibles. Mediante esfuerzos convergentes trazan estrategias dentro del espacio democrático, a partir de las cuales definen: el campo de intervención sociopolítica, la función que cumplen dentro de la pluralidad de proyectos sociales, su representatividad en términos de propuestas aglutinantes y dialogantes, los fines del poder y representatividad que buscan, los recursos que disponen, los objetivos específicos que persiguen y su afinidad con la agenda pública colombiana, las acciones que desarrollan y la trascendencia política y social de sus propuestas, los resultados históricos obtenidos y por obtener mediante una evaluación histórica del resultado social de su actividad religiosa, y las relaciones tejidas con otros actores para llevar a cabo sus estrategias.

Con corte a tercer trimestre de 2017, en Colombia existen 6.449 lugares de culto con personería jurídica otorgada por el Ministerio del Interior, que incluyen iglesias, asociaciones de ministros, ministerios apostólicos, confesiones, confederaciones y denominaciones. El mayor porcentaje presente en Bogotá con 1.537 iglesias, es decir el 24% del total, seguida por Atlántico 860 (13,3%), Valle 694 (10,7%) y Antioquia 501 (7,7%). Estas cifras no incluyen aquellos grupos que surgen espontáneamente y que no cuentan con reconocimiento jurídico.

Las iglesias en Colombia han realizado esfuerzos continuos por dar respuesta a los problemas inmediatos de su entorno (comunidad, barrio) a partir de la implementación de programas de atención de adicciones, persona mayor, mujeres cabeza de hogar, prevención de violencia intrafamiliar, cursos de emprendimiento, etc.

<sup>1</sup> Los estudios desde la sociología de la religión en América Latina dan cuenta del fracaso de la visión moderna que celebraba la desaparición de la religión. Lo que está teniendo lugar es una transformación de la religión demostrada por el surgimiento de nuevos movimientos religiosos, el crecimiento renovado de las grandes religiones tradicionales y la ampliación del lugar y poder público de las religiones. El estudio de David Stoll (2002) hace una descripción del campo religioso cristiano en América Latina en el contexto sociopolítico.

Así mismo, la nueva agenda pública en Colombia que incorpora temas como la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio con ocasión de las creencias religiosas, políticas y sociales de los jóvenes; la celebración de matrimonios del mismo sexo; el aborto en los tres casos establecidos por la Corte Constitucional; y la participación cada vez más activa de líderes religiosos en proyectos sociales, exige una mayor atención sobre este campo junto a procesos de construcción de paz y diálogo entre las religiones.

Afirmar la validez y la existencia de otras religiones, es afirmar la pluralidad de ideas políticas, de formas de ver y concebir el mundo, ello significa afirmar la realidad de los Derechos Humanos. La libertad de religión involucra al creyente y al no creyente. Este derecho fundamental

es considerado la piedra angular de los Derechos Humanos, y su enorme importancia deriva del hecho de que la convicción religiosa, es para la persona humana, lo más esencial para la elección fundamental que está llamada a hacer, y lo que determina la condición de fondo de toda su existencia (Jesús González Schmal citado en Vizcaíno, 2010, p. 28).

El trabajo interreligioso es fuente de estabilidad entre las naciones y cobra vigencia en los actuales tiempos. Conforme a los enunciados teóricos del teólogo Hans Kung,

No habrá paz entre naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo de las religiones. No habrá diálogo de las religiones sin estándares éticos globales y no habrá en nuestro Globo supervivencia en paz y justicia sin un nuevo paradigma de relaciones internacionales basadas en estándares éticos globales. (Küng, 2008, párr.4)

La teoría de Kung, supone prevenir un choque entre civilizaciones lo que implica con urgencia un diálogo entre las religiones.

En último término, la formulación de una política pública de libertades de religión, culto y conciencia cobra validez en su propósito intrínseco: la garantía de derechos fundamentales constitucional y universalmente reconocidos, junto a la apropiación de una cultura de respeto por la pluralidad religiosa en la ciudad.

La adopción y consecuente implementación de la política garantiza una serie de decisiones, acciones y medidas políticas, administrativas y operativas con carácter perdurable, un respaldo institucional y jurídico

consistente, en orden a producir cambios sociales e institucionales conducentes a superar factores y situaciones que han impedido el goce plenamente efectivo de estos derechos fundamentales.

## 2.4 Trayectoria de la iniciativa

En el año 2014, el grupo de trabajo de la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la Secretaría Distrital de Gobierno, se propuso la construcción de un plan de incidencia con los líderes religiosos, representantes de distintas confesiones religiosas con presencia en la ciudad.

Para ello elaboró varias estrategias, la primera de ellas dirigida a acercar las iglesias al Estado, en un proceso de construcción de confianza. Esta estrategia se desarrolló a través de reuniones consultivas y de socialización con los representantes de las diferentes iglesias, confesiones y denominaciones con presencia en Bogotá; construcción de documentos; atención de ministros con el fin de identificar problemáticas frente a vulneraciones para el ejercicio de sus derechos; y una primera aproximación a la caracterización del universo religioso, cuyo piloto se realiza en la localidad de Kennedy.

Como segunda estrategia se propuso la visibilización o promoción de los derechos. Desde esa óptica se crean espacios de deliberación con representantes de distintas confesiones religiosas en torno a los derechos fundamentales y la construcción de agendas colectivas, además de buscar la vinculación de nuevos actores representantes de todos los credos. Bajo tal perspectiva se realiza el primer Foro Distrital por los Derechos de Libertad de Religión, Culto y Conciencia, que tuvo lugar el 29 de mayo de 2014 con la participación de 350 asistentes pertenecientes a más de un centenar de confesiones religiosas, denominaciones, asociaciones de ministros y delegaciones de iglesias provenientes de Antioquia, Armenia, Barranquilla y Cali, además de las radicadas en Bogotá.

La tercera estrategia se dirigió hacia la consolidación del denominado *Proceso Distrital por los Derechos de Religión, Culto y Conciencia*, con la constitución de mesas de trabajo para alcanzar mayor incidencia frente a la promoción, reconocimiento y garantía de los derechos en las políticas distritales y nacionales. El proceso se definió como un conjunto de actores, estrategias y propuestas necesarios para la definición de políticas públicas que defiendan, protejan y promuevan los derechos de libertad de religión, culto y conciencia en Bogotá.



El proceso tuvo como propósito incidir en las políticas distritales y nacionales para convertir los derechos formales de religión, culto y conciencia en derechos reales y efectivos. Ello involucró varias apuestas, entre ellas: ampliar el margen de responsabilidad estatal frente a posibles violaciones a la libertad e igualdad religiosas; diseñar estrategias legales y políticas para visibilizar los derechos; diseñar estrategias de comunicación para mejorar la comprensión de los derechos entre los ciudadanos y las instituciones; acompañamiento y asesoría legal; investigación y recolección de información sobre violaciones a los derechos; capacidad de movilización de las comunidades religiosas en torno a la reivindicación de sus derechos.

Las mesas conformadas a partir de la realización del Foro en el mes de mayo de 2014, contaron con la participación de lideresas y líderes religiosos de distintas confesiones, en las cuales se propusieron y adelantaron las siguientes agendas de trabajo:

Mesa de trabajo	Propuestas de líderes religiosos
<b>Mesa No. 1:</b> Contenido, alcances y conflictos preexistentes en la legislación sobre libertad e igualdad religiosa, conciencia y culto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de una política pública.</li> <li>• Propuesta de modificación a la Ley 133 de 1994.</li> <li>• Trabajo de interlocución con el Ministerio del Interior.</li> </ul>
<b>Mesa No. 2:</b> La dignidad humana y el individuo por encima de las desigualdades sociales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crear una red de Entidades Religiosas, sus organizaciones y fundaciones, en torno al trabajo social y humanitario.</li> </ul>
<b>Mesa No. 3:</b> Estrategia pedagógica para la formación en Derechos Humanos con enfoque en los derechos de libertad de religión, culto y conciencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicaciones sobre los derechos y obligaciones del Estado para su garantía.</li> <li>• Formación en DDHH</li> </ul>
<b>Mesa No. 4:</b> Las comunidades religiosas como actores sociales en la transformación de su entorno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Articulación con programas de la Secretaría Distrital de Gobierno.</li> </ul>
<b>Mesa No. 5:</b> Plan maestro de equipamiento de culto y control de normas urbanísticas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartilla pedagógica. Normas de convivencia en la celebración de los cultos.</li> </ul>
<b>Mesa No. 6:</b> Plan de incidencia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda de incidencia</li> <li>• Agenda de paz</li> </ul>

## 2.5 Marco institucional

La Política Pública Distrital de Libertades fundamentales de religión, culto y conciencia surge como una iniciativa mancomunada en la que concurren el sector institucional y comunidades religiosas con significativa presencia en la ciudad, tanto por su número creciente de feligreses como por los múltiples ámbitos sociales sobre los que recaen sus actividades pastorales, educativas, sociales, asistenciales y humanitarias.

Fruto de tal iniciativa acunada desde 2014, el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 *"Bogotá Mejor para Todos"*, trazó entre sus metas la instauración de un área funcional, que dentro de la estructura organizacional del Distrito Capital asumiera el propósito misional de velar por la garantía, promoción y protección de los derechos a las libertades de religión, culto y conciencia de los residentes en la ciudad.

A su turno, la estrategia "ejes articuladores del desarrollo y prioridades para la gestión territorial" incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 *"Todos por un Nuevo País"*, incluyó en la agenda de gobierno un reconocimiento expreso a las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de la libertad de religión, de culto y conciencia, con el propósito de garantizar su realización plena a través de la formulación de políticas públicas en la materia. Armónicamente con el Derecho a la Paz, trazado como uno de sus pilares fundamentales, el mismo plan reconoce los destacables aportes al bien común por parte de las Entidades Religiosas en lo local, regional y nacional.

Porsu parte, el Decreto Distrital 441 de 2016 da vida jurídica y administrativa a la Subdirección de Asuntos de Libertad de Religión y Conciencia, como unidad organizacional adscrita a la Dirección de Derechos Humanos y la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. Entre sus funciones se fijó la implementación de políticas, planes, programas y proyectos tendientes al fortalecimiento de los derechos aludidos.

Bajo este nuevo andamiaje institucional, prosiguió el proceso de formulación participativa de la política pública, con el liderazgo de la Subdirección creada y la confluencia dinámica de iglesias, asociaciones de ministros, confesiones y denominaciones representativas de la pluralidad religiosa que se extiende a lo largo y ancho de la ciudad. Si bien su concepción y construcción brota del sector administrativo de Gobierno (art. 51 y 52 Acuerdo Distrital 257 de 2006, modificados por los artículos 14 y 15 del Acuerdo 637 de 2016), la política pública impacta

sobre distintos campos como la formación escolar, la articulación interreligiosa en torno a iniciativas sociales y de construcción de paz, el reconocimiento del papel de las líderes religiosas en la resolución de conflictos, la armonización de las actividades religiosas con instrumentos de planeación y regulación como el Plan de Ordenamiento territorial, el Plan Maestro de Equipamiento de Cultos y el Código Nacional de Policía, así como el ejercicio de capellanías en centros educativos, penitenciarios y de reclusión, instalaciones militares y de policía, clínicas y hospitales.

De lo anterior se desprende que su implementación aboga a la convergencia intersectorial extensiva a Educación, Mujer, Planeación, Gestión Pública, Integración Social, Seguridad y Salud, además de la articulación intrasectorial con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio público frente a la habilitación y uso de escenarios públicos para actos y eventos religiosos, aunado a la exploración de rutas que permitan ampliar la inclusión del sector religioso en instancias de participación locales y distritales, con el acompañamiento del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC.

La creación de la dependencia, junto a la formulación y adopción de la política pública de libertades de religión, culto y conciencia, no son medidas aisladas o atomizadas, pues además de ser mutuamente complementarias, se encuentran enmarcadas en el programa *Bogotá vive los derechos humanos* (art. 32 PDD), que corresponde al pilar *Construcción de comunidad y cultura ciudadana* del Plan de Desarrollo Distrital "*Bogotá Mejor para Todos*".

Ambas se engranan armónicamente dentro de una estrategia de dimensiones más amplias e integradoras, que es la conformación y funcionamiento de un Sistema Distrital de Derechos Humanos, cuyo propósito radica en:

... garantizar espacios incluyentes, plurales y respetuosos de la dignidad humana, y de las libertades civiles, religiosas y políticas de la ciudadanía. Lo anterior, con el fin de dotar a las personas de herramientas efectivas para la protección y apropiación de sus derechos humanos y convertirlos en cogestores y agentes activos en la construcción de su propio bienestar. (Bases del Plan de Desarrollo Distrital "*Bogotá Mejor para Todos*", p. 287).

La inclusión de líderes y representantes de comunidades religiosas en espacios de discusión e incidencia sobre asuntos y problemáticas públicas, tal como se concibe en uno de los componentes de la política pública (*goce efectivo de derechos*), se orienta a encauzar la interacción

y el diálogo del sector religioso con diferentes instancias y mecanismos propios del sistema distrital de participación ciudadana (Decreto 448 de 2007) y el sistema de coordinación administrativo del Distrito (Título III Acuerdo 257 de 2006).

El Comité Distrital de Libertad Religiosa, creado mediante el Acuerdo Distrital 685 de 2017 en cumplimiento de la meta fijada por el Plan de Desarrollo Distrital "*Bogotá mejor para Todos*", se erige como la instancia preeminente de participación ciudadana donde organizaciones, denominaciones y confesiones religiosas con presencia en la ciudad aúnan esfuerzos para la promoción, articulación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias e iniciativas tendientes a la garantía, defensa y protección de la libertad religiosa, de cultos y conciencia en la capital.

El contenido de la presente política, se postula como referente temático y operativo para el componente de libertad religiosa, de culto y conciencia de la Política integral de Derechos Humanos del Distrito (art. 94 Plan Distrital de Desarrollo "*Bogotá Mejor para Todos*"), en la perspectiva de armonizar estas dos herramientas bajo el propósito común que las alienta: la protección, defensa y garantía de Derechos Humanos fundamentales, a cuyo título son prevalentes y de prioritaria atención en el ordenamiento normativo-institucional nacional y distrital.

De otro lado, el Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP en 2016, establece como una de las garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización (especialmente por razón de la acción política y social), la participación de organizaciones y movimientos sociales, en particular de mujeres, campesinos y campesinas, gremios, minorías étnicas, iglesias, confesiones religiosas, organizaciones basadas en la fe y organizaciones del sector religioso y del sector educativo, entre otros, en el denominado Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia.

Adicionalmente el Pacto Político Nacional, como un compromiso del Gobierno Nacional y el nuevo movimiento político surgido de las FARC-EP, tendrá por responsabilidad sumar a todos los sectores de la sociedad, entre ellos las iglesias, en torno a la necesidad de superar el conflicto armado en las regiones, conjuntamente con los partidos y movimientos políticos, los gremios, las fuerzas vivas de la nación, la sociedad organizada y las comunidades en los territorios, sindicatos, el Consejo Nacional Gremial, los propietarios y directivos de los medios de comunicación, la academia e instituciones educativas, las organizaciones de mujeres y de población LGBTI, personas en condición de discapacidad,

jóvenes, los pueblos y comunidades étnicas, las organizaciones de víctimas, defensoras y defensores de Derechos Humanos y las demás organizaciones sociales.

Finalmente, la política se acompasa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de la Agenda 2030, postulados en septiembre de 2015 durante la Cumbre de Naciones Unidas y aprobados por distintos dirigentes mundiales. Estos objetivos tienen como particularidad su aplicación en toda la comunidad internacional (lo que los distingue de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, cuyo cumplimiento asumía a los países en vías de desarrollo como únicos destinatarios), y su consecución involucra la participación mancomunada de gobiernos, sociedad civil y sector privado. En ellos se consagran obligaciones que comprometen decididamente a los Estados en la reducción de la pobreza y las desigualdades, el logro de la paz y la justicia, así como el afianzamiento de instituciones sólidas que asuman la protección de las libertades fundamentales, conforme la legislación interna y los instrumentos normativos internacionales.

## 2.6 Marco contextual

La Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, se ha concebido fundamentalmente con una impronta garantista, en virtud de la cual centra su interés en la prevención y superación de las diferentes condiciones y situaciones que han dado lugar a la vulneración, discriminación, persecución, restricción y limitación del ejercicio de los derechos que están en el núcleo de su contenido.

Para tal propósito, uno de los componentes esenciales en el proceso de construcción de la política ha sido, ineludiblemente, la indagación y detección de los principales elementos fácticos que develan la existencia de una problemática pública abiertamente lesiva para la sociedad bogotana, al punto de afectar o amenazar la realización efectiva de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 18 y 19 de la Constitución Política de Colombia.

En lo sucesivo, el marco contextual esboza una serie de elementos descriptivos y explicativos que permiten, desde una perspectiva de rango amplio, situar factores históricos, sociales, políticos y culturales determinantes en la inserción, práctica y asimilación de diferentes confesiones religiosas, a través de un recorrido sucinto por varios países latinoamericanos, con mayor detenimiento en el caso colombiano, para

arribar finalmente a una aproximación concreta sobre las problemáticas actuales que amenazan la libertad religiosa y de cultos en Bogotá.<sup>2</sup>

### ***Inserción de confesiones, organizaciones y corrientes religiosas. Antecedentes históricos en Latinoamérica, Colombia y Bogotá.***

El pluralismo religioso como baluarte de las democracias contemporáneas ha sido el producto de innumerables contiendas históricas, que en Latinoamérica adquieren unas connotaciones particulares cuyas secuelas sociales y culturales, aunque atenuadas, siguen sin ser superadas. El peso mayoritario de la religión católica en la región, desde la época hispánica y a lo largo de su vida republicana, no ha estado exento de pugnas y conflictos cruzados por aristas políticas que han perfilado de singular manera la conformación de las comunidades nacionales, sin desconocer matices y tensiones, disímiles de un país a otro.

La llegada del protestantismo al subcontinente inició un proceso de diversificación religiosa paulatina, nutrido por corrientes procedentes de Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza, Escocia y Estados Unidos. Su arribo a América Latina tiene lugar entre 1528 y 1546, cuando la familia Welser, de filiación luterana, se asentó en el territorio que hoy conforma la República de Venezuela. Prosiguieron las colonias de Hugonotes en Brasil a partir de 1555, la Iglesia Reformada holandesa que se instaló al noreste brasileño entre 1624 y 1654, los presbiterianos encabezados por el escocés William Paterson en Panamá hacia 1698, y por los pastores Juan C. Hill y Federico Crowe en Guatemala entre 1841 y 1882.

A partir de la segunda década del siglo XIX, el liberalismo y la consolidación de los procesos independentistas en Latinoamérica permitieron el avance del protestantismo y más tardíamente del pentecostalismo, que emprendieron a su turno una amplia traducción y difusión de la biblia en lenguas vernáculas para favorecer su propia expansión. En 1819 es fundada la primera iglesia no católica del continente, de tradición anglicana ubicada en Río de Janeiro; por su parte, la labor del pastor bautista escocés James Thomson extiende la presencia misionera y la fundación de escuelas públicas a diversos países como Argentina en 1819, luego a Chile en 1821, Perú en 1822, Ecuador en 1824 y Colombia en 1825, donde además fue fundador de la Sociedad Bíblica Colombiana.

<sup>2</sup> La temática objeto de estudio posee debilidades en términos de información cualitativa y cuantitativa, ya que no cuenta en el nivel distrital o nacional con abundantes investigaciones, registros ni mediciones desde fuentes oficiales y no oficiales que sirvan como insumos suficientes para desarrollar un análisis completo y detallado sobre las libertades de religión, culto y conciencia en Bogotá. No obstante, lo anterior también se constituye en una oportunidad para la política pública, en la perspectiva de gestionar y desarrollar acciones encauzadas a la generación de mayores recursos de información y conocimiento en esta materia.

El año 1872 registró la llegada de misioneros presbiterianos, metodistas, congregacionalistas y anglicanos norteamericanos.

Atendiendo la categorización historiográfica más extendida, es en el transcurso de los siglos XIX y XX que la afluencia de las iglesias *protestantes históricas* tiene su mayor auge, bajo el auspicio de proyectos misioneros estadounidenses. En este período es notoria la expansión de comunidades luteranas, menonitas, presbiterianas, anglicanas, metodistas, junto a misiones de bautistas, cuáqueros y adventistas.

El entorno político regional fue claramente decisivo. En alusión a las medidas políticas tras los procesos independentistas, que atenuaron la extendida influencia de la que gozaba la Iglesia Católica, Plata Quezada (2004) afirma:

El proyecto liberal en el campo religioso, común a toda América Latina, consistió fundamentalmente en reducir a toda costa el poder de la institución eclesiástica:

- En la esfera política, apartándola del Estado.
- En la esfera económica, secularizando sus bienes, suspendiendo el reconocimiento de los diezmos eclesiásticos y dejando de subvencionar sus obras, escuelas o misiones.
- En la esfera social, tratando de reducir al sacerdote a la esfera privada y disminuir su control sobre el orden familiar.
- En la esfera ideológica, promoviendo la educación laica o neutra en la escuela pública (p. 213).

Explorando casos específicos, el influjo de las ideas liberales dio cabida a reformas en países como Brasil, donde la Constitución de 1824 permitió la congregación de no católicos, aunque en edificios no identificables como templos, y en 1890 instituyó la separación de Iglesia y Estado. En Chile, una ley de 1865 reconoció la preeminencia de la Iglesia Católica, pero permitiendo la realización de cultos no católicos, otorgándoles la posibilidad de fundar colegios. Ecuador por su parte, contó con una religión oficial y promovida por el Estado desde 1830 hasta 1906 (Saranyana & Alejos Grau, 2002, p.174).

Entre las personalidades y organizaciones protestantes que incursionaron en Latinoamérica durante el siglo XX, destaca la figura de John Mackay, pastor presbiteriano que desembarca en Perú hacia 1916, donde funda un colegio protestante y extiende sus oficios misionales a países como Uruguay y México entre 1925 y 1932, en los que se asienta con gran influencia. Otro tanto puede mencionarse sobre la Foreign Missions

Conference, misión creada en Nueva York en 1913, cuyos esfuerzos de evangelización se concentraron en América Latina. La centuria presenció además el surgimiento de los grupos pentecostales y neopentecostales, de progresivo impacto en diferentes latitudes del continente.

A mediados del siglo XX las campañas de evangelización provenientes del extranjero se despliegan masivamente, extendiéndose a territorios como Honduras, Surinam, Panamá, Perú, México, Ecuador, Bolivia, Brasil y Colombia. En ellos, el Instituto Lingüístico de Verano -The Summer Institute of Linguistics- centró su labor en el abordaje de poblaciones indígenas, que en el caso colombiano fue paralelo a su participación en el Centro de Investigaciones Lomalinda, dedicado a la traducción de la Biblia en lenguas nativas.

Entre los años sesenta y setenta, se gesta una nueva concepción eclesial y pastoral, que dirige su atención a la superación de la injusticia social como propósito que aboca un compromiso superior de las iglesias, en términos doctrinales y en el ejercicio práctico de la religión.

El contexto de creciente pobreza y marginalidad que se agudizaba en Latinoamérica, alimenta las bases de este espíritu renovador, dentro del cual las iglesias ya no se reducen a un papel evangelizador, para asumir un rol protagónico en tanto cogestoras de procesos de desarrollo social. El surgimiento de movimientos imbuidos de aquella impronta social fue abrumador: corrientes de intelectuales y teólogos movilizaron acciones y propuestas reivindicatorias de libertad y justicia social, sensibles ante la atroz ola de dictaduras que azotaba el subcontinente y la devastadora situación social y económica que padecían sus naciones.

Ilustración de lo anterior ofrece el movimiento Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL),<sup>3</sup> integrado por representantes del protestantismo y de la iglesia católica, pioneros de la corriente denominada "cristianismo social" de la cual derivó lo que luego sería conocido como *Teología de la Liberación*.

Esta corriente representó el compromiso de las comunidades religiosas con la emancipación de los oprimidos, agenciada a partir de una praxis revolucionaria que pugna con las estructuras perpetradoras de las desigualdades históricamente asentadas. Sus principales promotores fueron Rubem Alves, Gustavo Gutiérrez, Hugo Assmann, Juan Luis Segundo, José Comblin, Leonardo Boff, Mauricio López y Richard Shaull.

<sup>3</sup> Movimiento ecuménico del que formaron parte líderes religiosos católicos y protestantes e intelectuales de la época, surge en 1959 como una corriente que buscó reflexionar sobre la justicia social en América Latina.



Desde la pedagogía humanista, despuntan figuras como Paulo Freire, cuyos planteamientos teóricos y metodológicos tendieron las bases del paradigma de la educación popular.

Entre las expresiones organizativas que nutrieron el contenido y la práctica de la *Teología de la liberación*, destacan la Conferencia de Medellín de 1968, la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y el movimiento Comunidades Eclesiales de Base (CEB), cuya opción solidaria en función de los pobres se gestó a partir de grupos de estudio bíblico en las favelas de Brasil en la década del 60, con el ex sacerdote brasileño Leonardo Boff como su más insigne referente.

En este contexto de demandas, cambios sociales, políticos y económicos, destaca además la presencia de organizaciones como la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos (FUMEC), de corte ecuménico; y el Movimiento Estudiantil Cristiano de Cuba (MEC) fundado por jóvenes cristianos en 1960, que nace con el impacto de la Revolución Cubana y se dedica a la formación teológica junto con acciones de incidencia en el campo social y comunitario.<sup>4</sup> El Comité Ecuménico de Acción Social (CEAS), colectivo procedente de Mendoza (Argentina), es reconocido por su activo papel en la asistencia a los exiliados de la dictadura chilena, así como el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), movimiento que surge a partir de la Conferencia de Oaxtepeque, afirmando la lucha por la justicia y la dignidad humana sin desatender una vocación ecuménica.<sup>5</sup>

Otro tanto ocurrió en la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II convocado por Juan XXIII entre 1962 y 1965, cuyos fines esenciales se centraron en la promoción del desarrollo de la fe católica; la renovación moral de la vida cristiana de los fieles; la adaptación de la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos vigentes, así como el mejoramiento de las relaciones con las religiones restantes.

La renovada perspectiva de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II, se patentó en el contenido de diferentes encíclicas como *Gaudium Et Spes Sobre La Iglesia en el Mundo Actual*, en la que las autoridades eclesiásticas resaltan la importancia de la justicia social como componente imprescindible para el desarrollo de los pueblos. Al tiempo,

<sup>4</sup> La FUMEC se originó en Suecia en 1895. Este organismo también se concibe con el propósito de construir puentes de diálogo social y político frente a la paz y la justicia social, su presencia en América Latina se sitúa en 1902.

<sup>5</sup> El CLAI fue fundado en Lima en 1982 y entre sus miembros están iglesias bautistas, congregacionales, episcopales, evangélicas unidas, luteranas, moravas, menonitas, metodistas, nazarenas, ortodoxas, pentecostales, presbiterianas, reformadas y valdenses, organismos cristianos especializados en áreas de pastoral juvenil, educación teológica y educación cristiana de veintiún países de América Latina y el Caribe.

reconoce en el ser humano al autor, centro y fin de la vida económica y social, propugna por la supresión de las diferencias económicas y reivindica la tierra como beneficio común de todos, cuya destinación debe ser equitativa bajo la égida de la justicia y la caridad.

Por su parte, la encíclica *Populorum progressio* (1967) de Pablo VI, constitutiva de la doctrina social de la Iglesia Católica, también se muestra reveladora, pues consagra la importancia de un desarrollo integral para América Latina y África, regiones especial e históricamente afectadas por sus niveles de pobreza y violencia. Su trascendencia ha llegado al punto de ser considerada uno de los elementos catalizadores en el contexto de conformación de movimientos revolucionarios en diferentes países de la región -como lo retrata el Ejército de Liberación Nacional (ELN)-, de cuño declaradamente religioso y que abanderaron figuras sacerdotales entre las que sobresalieron Camilo Torres Restrepo y Manuel Pérez Martínez.

El caso colombiano presenta singularidades que es pertinente reseñar con cierto énfasis. Aunque la primera iniciativa protestante en el país se da a través de la Sociedad Bíblica Británica, con James Thompson, la primera iglesia radicada en territorio nacional fue la Iglesia Bautista, ubicada en la isla de San Andrés en el año de 1845. Le sucedieron la Iglesia Presbiteriana en 1851 con el misionero Henry Pratt y la Unión Misionera de Cali en 1908.

Los menonitas, engendrados por la reforma protestante del siglo XVI en Alemania y los Países Bajos, se ven forzados a un proceso de migración tras la persecución que sufrieron en Europa, que les obliga a trasladarse hacia Rusia, territorio del cual saldrían por efecto de los sucesos revolucionarios de 1917 para asentarse en América Latina, especialmente México en 1922, Paraguay hacia 1927 y finalmente Colombia en 1945, cuando arribaron a las ciudades de Cali y Chocó (García, 2007, párr. 1-3).

A mediados del siglo XX, otras iglesias se suman al flujo multirreligioso en tierra colombiana. Según el investigador y docente William Beltrán, la Iglesia Luterana inicia su trabajo en el Departamento de Boyacá hacia 1936; los metodistas wesleyanos hacen lo propio en Antioquia en 1942; Asambleas de Dios, de corte pentecostal, se establece en Boyacá hacia 1932, y la Iglesia del Evangelio Cuadrangular en Santander desde 1942 (Beltrán, 2012, pp. 59).

La presencia del pentecostalismo en el país data de los inicios de la República entre los años 1819 y 1840, favorecida por el propósito liberal de conseguir la separación entre Estado e Iglesia, que allanaría el terreno a los primeros intentos de libertad religiosa y de educación independiente (Vargas y Centeno, 2014, p. 10).

Derivado del paulatino proceso decimonónico de afianzamiento y consolidación del protestantismo, durante las décadas del treinta y cuarenta del siglo XX llegan al país las iglesias y denominaciones pentecostales. La primera de ellas se funda en 1937 bajo el nombre *Iglesia de las Buenas Nuevas* en el departamento de Santander, con el bautizo de 52 colombianos por parte de los misioneros Charles y Clara Berchtold. En 1941 es el misionero James Elmer Ball, proveniente de la Iglesia Pentecostal Incorporada de Estados Unidos, quien se asienta en la ciudad de Bucaramanga, donde se ocupa durante once años en el encuentro de nuevos fieles para la iglesia (Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, 2017, párr.1).

Paralelamente, la unificación de las Asambleas Pentecostales de Canadá y la Iglesia Pentecostal Incorporada de Estados Unidos da forma a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que en adelante se encargaría de apoyar el pentecostalismo en el país por medio del envío de más misioneros. Su expansión permitió en 1948 la construcción del templo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el Departamento del Valle del Cauca, sumado a la posterior ordenación del primer colombiano al ministerio del pastorado pentecostal en 1953 y la transferencia de la dirección de la Iglesia sobre pastores colombianos en el mismo decenio (Iglesia Pentescotal Unida de Colombia, párr.4 y 5).

Entre 1958 y 1993, aumentaron las iglesias pentecostales en el país, junto a sus labores sociales y de evangelización. Algunos de sus líderes incursionaron en el ámbito político incidiendo en la Asamblea Constituyente de 1991 y en la conformación de partidos políticos tras la diversificación de alternativas religiosas desatada en el panorama nacional por efecto de la nueva Carta Política (Vargas y Centeno, 2014, p. 14).

Afincada en una perspectiva más receptiva con diversas corrientes de pensamiento, los movimientos Neopentecostales se instauran en Colombia desde 1983 en la capital del país, para luego extenderse a otras regiones de las cuales Cundinamarca y Boyacá representan los departamentos con presencia mayoritaria (Díaz, 2010, pp. 38-41). Estos nuevos movimientos religiosos cuentan con redes de jóvenes, hombres, mujeres y niños, además de escuelas internas de líderes juveniles y de adultos para formación de nuevos fieles. Han sido visibles sus esfuerzos por incorporar la libertad de culto como tema relevante en la agenda gubernamental colombiana (Díaz, 2010, pp. 38-41).

La inserción del islam en territorio colombiano se remonta a la primera llegada de los europeos y esclavos a América. Procedentes del norte

y oeste de África, varios de los esclavos sometidos en continente americano profesaban la religión musulmana, que sin embargo fue diluyéndose bajo el peso del catolicismo colonial. (Islam-AIFayer, 2017, párr. 1).

La más alta migración árabe hacia territorio nacional tuvo lugar en el transcurso del siglo XIX, continuó hasta la cuarta década del siglo XX y se retomó a partir de la creación del Estado de Israel y de los conflictos de Medio Oriente a finales de los sesenta (Ministerio de Cultura, 2014, p. 11). Aunque en su mayoría cristianas, algunas de las familias procedentes de Siria, Palestina y Líbano profesaban el islam.

En las primeras décadas del siglo XX, la mayor parte de la comunidad musulmana se hallaba asentada en los pueblos del Caribe. Su propagación se desencadenó por diferentes latitudes del país, hasta vincular numerosos colombianos como fieles (Islam-AIFayer, 2017, párr. 1).

En los años setenta varias familias musulmanas de procedencia sunita llegaron al país, y aun en medio de numerosas dificultades mantuvieron la reproducción de su cultura y valores, sustentadas en comunidades (Ummah) conformadas en territorios como Maicao – La Guajira y San Andrés. La creciente migración musulmana y la generación de redes intraétnicas de solidaridad favorecieron tales esfuerzos (Islam-AIFayer, 2017, párr. 3).

Los musulmanes llegan a Bogotá en los años veinte del siglo XX, cuando varios árabes de origen palestino se ubicaron en el centro de la ciudad en búsqueda de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. El importante flujo de migrantes en la ciudad, provocado a mediados de la centuria por el conflicto árabe – israelí y auspiciado por algunos de sus grupos familiares asentados desde años atrás en territorio nacional, permitió al islam fortalecer sus lazos de identidad y sus valores morales frente a otras religiones (Castellanos, 2009, p.2).

Los años noventa continuaron registrando el arribo de musulmanes desde África, Asia Central y el Lejano Oriente, además del considerable aumento de conversos de nacionalidad colombiana. La presencia chiita se incrementó notoriamente con la llegada de iraníes y libaneses a la ciudad, en la que predominaban entonces las comunidades sunitas (Castellanos, 2009, p. 3).

En 1997 se crea la “Confesión Centro Islámico de Santafé de Bogotá” con la misión de conformar una comunidad islámica para acoger los diferentes creyentes de todo el país y el mundo, ofrecer información sobre la religión y la civilización islámica. (Islam-AIFayer 2017, párr. 3).

Por su parte, la religión mormona se establece en Colombia hacia 1948, cuando James Richard Clark, líder mormón en Estados Unidos, se radica en el municipio El Dificil (Magdalena) e inicia con su núcleo familiar las primeras reuniones litúrgicas domésticas, que darían origen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días, 2017, párr. 1 y 2).

En 1966 se creó la primera unidad en Colombia llamada "Rama Uno Bogotá" y se bautizó el primer feligrés de la iglesia mormona con nacionalidad colombiana. En agosto del mismo año, llegaron los primeros misioneros a Bogotá con el propósito fundar el primer distrito mormón, al que siguió la instauración del segundo distrito en Cali para 1968. Cuatro años más tarde se inicia la labor del Sistema Educativo Mormón en el país, con el objetivo de crear una institución donde se enseñara el legado del profeta José Smith, quien conforme a la doctrina profesada por sus fieles, fue instruido e inspirado por Dios y el Espíritu Santo para fundar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este sistema alcanzó a albergar 250 alumnos entre Bogotá y Cali. (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días, 2017, párr. 5).

La primera capilla mormona construida fue "Versalles" establecida en Cali por el misionero Joaquín Murillo Vargas en 1974. Le sucedió la "Capilla Kennedy" construida en el año de 1976. El templo mormón de Bogotá se edificó en 1984 y a la fecha congrega más de 15 mil familias de la ciudad (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días, 2017, párr. 6 y 12).

Los budistas llegaron a Colombia aproximadamente en 1945, provenientes de países como Estados Unidos, Líbano, Turquía, Siria, Japón, Corea, China e India. Sin embargo, la escasa representación de la religión en el país hizo de su inserción un fenómeno de impacto incipiente en la sociedad colombiana.

En los años ochenta una ola de migrantes japoneses trajo los primeros misioneros budistas a países como Perú y Brasil. Actualmente en Bogotá existen cuatro sitios de culto en los cuales se practica la religión budista: KTC Colombia y Budismo Camino del Diamante, que practican Budismo Tibetano; la Comunidad Zoto Sen y la Fundación para Vivir el Zen, que practican Budismo Zen. (Budismo Colombia, 2017, párr. 2).

Finalmente, los judíos llegaron a territorio nacional en el período colonial y sumaron con su apoyo económico al proceso de Independencia. Hacia 1819, el gobierno instituido les otorgó autorización para radicarse en el país, la garantía de su libertad religiosa y los mismos derechos políticos del resto de ciudadanos, sin embargo, su residencia debía circunscribirse únicamente a la región Caribe (Bibliowicz, 2006, párr. 1).

Durante la primera mitad del siglo XX, numerosos migrantes judíos sefardíes llegaron al país desde Grecia, Turquía, el norte de África y Siria, luego lo harían desde Europa del Este. En 1933, la migración aumentó considerablemente debido al surgimiento del nazismo con su imposición de leyes y prácticas antisemitas. (Bibliowicz, 2006, párr. 6 y ss.).

En Bogotá se asentaron entre los años veinte y treinta, escapando primero a los efectos de la Gran Depresión en 1929 y luego a los embates de la Segunda Guerra Mundial, de allí que la mayoría de los judíos recibidos en la capital fueran europeos o solicitantes de asilo político (Osterwald, 2013, p. 10).

Pese a restricciones pretéritas como los elevados cobros estatales para entrar en territorio nacional, y a actitudes discriminatorias provenientes de instancias gubernamentales y fuerzas políticas nacionales (Bibliowicz, 2006, párr. 8, 9 y 14), la población judía en Colombia continúa en paulatino crecimiento reflejado en la construcción de sinagogas, cementerios y diferentes actividades comerciales y productivas. En la ciudad destacan tres organizaciones que aglutinan la comunidad judía: el Centro Israelita de Bogotá, la Asociación Israelita Montefiore y la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá (Osterwald 2013, p. 11), además de cuatro sinagogas y doce rabinos.

### ***Discriminación, persecución e intolerancia religiosa en Colombia.*** **Contexto histórico y sociopolítico**

El proceso de diversificación religiosa en Colombia es indisociable de los acontecimientos políticos y sociales que en un primer momento histórico dieron forma a la República, y que han signado, desde entonces, años de confrontaciones, conflictos, antagonismos, disputas, avances y retrocesos con particulares manifestaciones en el ámbito religioso, incluso hasta nuestros días. Como ocurrió en otras naciones latinoamericanas en su etapa germinal, las contiendas políticas por la conducción del Estado en Colombia concitaron enfrentamientos de orden religioso, con tempranas y prolongadas manifestaciones, tal como precisa Carlos Arboleda:

Durante las luchas de independencia, se llama “masones y luteranos” a los revolucionarios del 20 de julio de 1810, como una forma de descalificarlos, aunque al mismo tiempo se estaba reconociendo el influjo de elementos modernistas en las ideas independentistas. Si se les llama masones y luteranos es porque se reconoce que son portadores de una nueva filosofía y de una nueva interpretación de la vida social, caracterizada por las ideas de libertad, reconocimiento de la conciencia

individual, independencia mental, creencia en el progreso, pero que era juzgada herética en los medios eclesiásticos. **Comienza a formarse el conflicto entre tolerancia e intolerancia que recorrerá todo el siglo XIX y gran parte del XX** (Arboleda, 2011, p. 111) [negrilla fuera del original].

Por su parte, Plata ubica a mediados del siglo XIX las primeras medidas políticas que dieron lugar a *"la creación de una atmósfera intolerante"* desencadenada por los cambios de cariz anticlerical, cuyo

primer ciclo reformista se cerró en 1853 cuando la nueva constitución liberal declaró solemnemente la separación Iglesia y Estado, pues el gobierno liberal consideró que la unión de las potestades civil y eclesiástica constituía una "fuente de tiranía" que debía ser cortada de raíz. Este dictamen conllevó la declaración de libertad de cultos y el establecimiento del matrimonio civil. La ley de separación de Iglesia y Estado fue la primera decretada en toda Latinoamérica (Plata, 2004, p. 215).

El efecto desencadenado por las reformas impulsó la diversificación religiosa en el país, con el arribo de nuevas iglesias y comunidades religiosas a territorio colombiano. Tal como resalta Rodríguez (2004): "El protestantismo llega a Colombia con el apoyo de los liberales y masones, quienes buscaban combatir la hegemonía de la Iglesia católica. Fue un ambiente hostil en el cual se sufrió mucha persecución". (p. 319).

La presencia de diversas manifestaciones religiosas estuvo lejos de ser pacífica, contrario a ello configuró un clima de tensión conflictiva en el que

Si bien es cierto que la Iglesia actuó con intransigencia hacia las reformas, también hay que reconocer que el gobierno atizó el fuego con medidas agresivas como vender biblias protestantes, estimular el odio a los clérigos, tachar de oscurantistas, "gallinazos" y corruptos a los clérigos, imponer violentamente las reformas e invitar a protestantes a ocupar los templos católicos (Arboleda, 2011, p. 159).

Este contexto virulento fue el caldo de cultivo para decantar la alianza entre Iglesia Católica y el Partido Conservador, así como el catalizador de las sucesivas guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia.

La Constitución de 1886 instituyó el nuevo marco normativo, político e institucional fundante de la llamada *hegemonía conservadora*, caracterizada por un nuevo proyecto de nación que fijó como sus rasgos fundamentales los siguientes:

Una fe, una lengua, unos símbolos religiosos, una cosmovisión abarcante, un sistema educativo, un sistema político que querían ser la expresión más pura de la nacionalidad colombiana. Ser colombiano es ser católico y viceversa, pues desde el principio se fue católico. Esta Constitución une Iglesia y Estado al adoptar el credo católico como credo del país, colocándolo bajo la protección del gobierno y estableciendo su enseñanza en todas las escuelas (Arboleda, 2011, p. 185).

La firma del Concordato de 1887 ratificó el carácter confesional del nuevo régimen, tal como lo revelan las líneas de su primer artículo:

La religión Católica, Apostólica y Romana es la de Colombia; los poderes públicos la reconocen como elemento esencial del orden social, se obligan a protegerla y hacerla respetar, lo mismo que a sus ministros, conservándola a la vez en el pleno goce de sus derechos y prerrogativas.

Para 1930, el ascenso al poder del liberalismo trajo consigo expectativas de cambio frente a la amplia influencia social y política de la Iglesia Católica, cuyo fuero se había revitalizado y afianzado con la Carta Política de 1886 y el Concordato entre la Santa Sede y el Estado Colombiano. Aunque varió la élite partidista a cargo de la conducción del Estado, las conflictividades entre facciones religiosas se mantuvieron y recrudecieron.

De acuerdo con Moreno (2004), durante el período de la República Liberal (1930-1946) hubo continuidad en algunos aspectos. Por ejemplo, la resistencia, la intolerancia y rechazo de la presencia protestante en diferentes poblaciones continuó tal como había sucedido en la década del veinte; al mismo tiempo, empeoraron las condiciones en ciertos lugares donde el predominio liberal se mostró intolerante con los conservadores, y éstos arreciaron sus ataques contra líderes protestantes (p. 426).

La confrontación entre católicos y protestantes continuó sin tregua, considerando que

La decidida oposición de la Iglesia Católica significó para los protestantes, a pesar de la aparente libertad de que gozaron para la difusión de su mensaje durante el periodo liberal, que quedasen



relegados a una situación de discriminación y exclusión (...) Algunos de los aspectos de la vida nacional en los cuales la Iglesia Católica conservaba un poder casi absoluto eran: la celebración de matrimonios, los entierros, el registro de nacimiento y la educación. Por su parte, los convertidos a las diversas misiones protestantes asumieron una actitud hostil hacia el catolicismo, que se expresó fundamentalmente en la condena de ciertos rituales católicos como actos de idolatría, particularmente en lo relacionado con la veneración a la Virgen María y a los santos; así mismo, los protestantes condenaban la autoridad del papa, por medio de argumentos altamente lesivos para los católicos (Beltrán, 2008, p. 173).

La época infaustamente designada como "La Violencia", un período de feroz y descarnada confrontación bélica bipartidista, preservó matices religiosos. La connivencia entre conservadores y católicos, de un bando, y de sectores liberales y protestantes, del otro, reeditaba enfrentamientos ya asentados en la sociedad colombiana, atizados por un proceso gradual de expansión de movimientos protestantes que se expresó con mayor notoriedad a partir de la década del cuarenta.

De acuerdo con Beltrán (2008):

Esta ola de expansión protestante fue observada por la Iglesia Católica como una grave amenaza, por lo cual reaccionó con un profundo rechazo que se hizo sentir a través de la condena del protestantismo y la denuncia de su avance como un atentado a la unidad nacional y de los pueblos latinoamericanos, pues quebrantaba la homogeneidad católica, base de la identidad latinoamericana (p. 171).

Es precisamente el propósito declarado de la identidad nacional sobre el cual se va a cimentar la convergencia entre católicos y conservadores, que signó la intersección de política y religión como contención férrea a la propagación de doctrinas protestantes en diferentes latitudes del país.

Los años cincuenta cargaron el pesado lastre heredado de los cruentos enfrentamientos interpartidistas y el masivo desplazamiento a los centros urbanos provocado por la violencia, además fueron testigos del primer régimen dictatorial instaurado en Colombia a cargo de Gustavo Rojas Pinilla, el cual:

A la vez que privilegiaba a la Iglesia católica, tomaba medidas en contra de las iglesias protestantes. Una de ellas fue la de prohibir

a los misioneros no católicos adelantar labores proselitistas [y] de culto público en territorios de Misiones. Esta disposición se amplió en enero de 1954, mediante circular del Ministro de Gobierno, Lucio Pabón Núñez, donde extendía la prohibición en todo el territorio nacional. Es notoria, pues, la utilización del poder del Estado para privilegiar una confesión religiosa, el catolicismo militante (Cifuentes y Figueroa, 2004, pp. 392-393).

El caldeado y tenso ambiente internacional de posguerra que dio lugar a la Guerra Fría, también permeó la contienda religiosa en territorio colombiano, si se considera que:

las denominaciones evangélicas y pentecostales fueron rotuladas con una nueva estigmatización: intelectuales y activistas de izquierda las consideraron la punta de lanza del expansionismo imperialista estadounidense, en un proceso que, según ellos, anticipaba la anexión de América Latina a los Estados Unidos, y que tenía entre sus objetivos destruir la unidad de los pueblos latinoamericanos, en un fenómeno denominado por los analistas del fenómeno como “teoría de la conspiración”. Esta estigmatización, en el caso nacional, las llevó a ser consideradas por parte de los grupos armados revolucionarios de izquierda como una amenaza, situación relacionada, en alguna medida, con el asesinato de líderes y pastores evangélicos y pentecostales en “zonas de conflicto armado”, un fenómeno recurrente hasta el día de hoy (Beltrán, 2008, p.184).

Durante la efímera etapa del Frente Nacional (1958-1974) desescaló la contienda entre protestantes y católicos, pues tal período “sembró las semillas de una muy relativa paz religiosa, aunque la constitución seguía reconociendo la primacía de la religión católica en el país” (Arboleda, 2011, p. 10). Lo anterior no erradicó el sentimiento antiprotestante por parte de sectores católicos, más bien conllevó el decrecimiento de la persecución mediante ataques directos.

En 1965, El Concilio Ecuménico Vaticano II introduce un punto de inflexión en la tradición doctrinal católica romana, pues valida la existencia de otras creencias religiosas y reconoce su posibilidad de existencia en condiciones de libertad. De acuerdo con Vigil (2015):

Sólo con el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica se reconcilió finalmente con esas “libertades modernas” y con la secularización del Estado moderno, aceptándolas sin reticencias e incorporándolas a su propia visión de la sociedad. En el Concilio la

Iglesia aceptó concretamente la libertad religiosa, la individual y la colectiva, la secularización del Estado moderno, la convivencia en igualdad social con otras religiones y hasta con el ateísmo (p. 1764).

Colombia y el Estado Vaticano suscriben un nuevo concordato en 1973, que ratifica los vínculos entre la iglesia católica y el país, esta vez bajo la estela de un marco doctrinal renovado. Habría de esperarse hasta 1991 para la consagración constitucional de la apertura interreligiosa y la secularización estatal.

La Carta Política de 1991 preconiza el pluralismo religioso, la libertad de cultos, el derecho a profesar libremente la religión propia y difundirla, la igual libertad entre confesiones religiosas e iglesias. Por su parte, y en aplicación de los preceptos constitucionales señalados, la Ley 133 de 1994 *"por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política"*, estipula, entre otras, las siguientes disposiciones: la inexistencia de iglesia o confesión religiosa oficial en el Estado colombiano, sin que ello suponga la indiferencia de este frente a los sentimientos religiosos de sus ciudadanos; el derecho de profesar las creencias religiosas elegidas libremente o no profesar ninguna; el derecho de toda persona de recibir e impartir enseñanza religiosa o rehusarla; derecho a practicar de manera pública o privada, colectiva o individual, actos cúltricos sin ser perturbado por ello; derecho a no ser obligado a practicar culto alguno o recibir asistencia religiosa contraria a las convicciones personales; la autonomía y libertad plenas de las iglesias y confesiones religiosas para establecer sus propias normas organizativas.

Adicionalmente, mediante el Decreto 354 del 19 de febrero de 1998, se *"aprueba el convenio de Derecho Público Interno entre el Estado Colombiano y algunas entidades religiosas cristianas no católicas"* (Arboleda, 2011, p. 236). El convenio dota de efectos civiles los matrimonios celebrados por los ministros de culto acreditados como tales por las entidades religiosas que lo suscriben, con arreglo a las disposiciones constitucionales y legales. De igual modo, garantiza la educación religiosa escolar acorde con las creencias y confesiones del estudiantado o sus padres en los centros de enseñanza pública; permite la asistencia espiritual en instalaciones militares y policiales, clínicas y hospitales, centros de reclusión carcelarios y penitenciarios, así como en centros educativos; establece la posibilidad de disponer de espacios para adelantar los actos litúrgicos y ceremoniales en entidades estatales; protege los inmuebles en los cuales se adelantan las celebraciones religiosas, permitiendo además el uso del espacio público adyacente a los mismos mientras tales celebraciones tengan lugar.

## **Elementos de diagnóstico y línea base**

Aunque esta armonización legal con los postulados constitucionales representa un avance significativo, aún persisten episodios de agresión, discriminación e intolerancia infligida a comunidades religiosas por el ejercicio de sus creencias. Tal como enfatiza uno de los autores abordados:

La guerrilla colombiana ha ejercido presión sobre algunos grupos religiosos tanto católicos como protestantes. Respecto a los católicos se ha hecho por razones de tipo político. Presunción de que estas personas estaban de acuerdo con los grupos paramilitares o que eran de tendencia conservadora, aunque, en general, la Iglesia católica ha entrado fuertemente en la proposición de diálogos de paz en el país (Arboleda, 2011, p. 229).

Sobre las últimas décadas, reportes del Secretariado Nacional de Pastoral Social del Episcopado indican:

A la Iglesia también le ha tocado la suerte de la mayoría de los colombianos; desde 1989, cuando fue asesinado el obispo de Arauca, hasta julio de 2002, han sido asesinados dos obispos, incluido el de Arauca; cuarenta y tres sacerdotes, dos religiosos y dos misioneros; secuestrados cuatro obispos, nueve sacerdotes y un misionero, y amenazados ocho obispos, tres religiosas y doce sacerdotes. Los responsables de estos hechos pertenecen a la guerrilla, a los paramilitares, al narcotráfico o a la delincuencia común (Cifuentes y Figueroa, 2004, pp. 418-419).

Ana María Bidegain, historiadora cuya labor académica se ha centrado en buena parte en proyectos de investigación dedicados al hecho religioso en Colombia, agrega a las cifras referidas las siguientes:

La situación entre el protestantismo no ha sido diferente. En un informe presentado por la conferencia de obispos en julio de 1999, se indicaba que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia el año pasado reportó la muerte de cuatro de sus pastores, y las iglesias evangélicas reportaron la muerte de veinticinco de sus miembros e igualmente se vieron obligados a cerrar 300 centros de culto. Al indagar la situación con miembros de iglesias evangélicas se anota que algunos han sido asesinados por causa del mensaje, su predicación no cae bien, y se calcula que alrededor de más de 50 pastores han perdido la vida en los últimos 10 años del conflicto. **Lo que indudablemente convierte a Colombia en el país con mayor número de asesinatos a religiosos en el mundo entero** (Bidegain, 2005, párr. 13) [negrilla fuera del original].

Un reporte de la Federación de Iglesias Cristianas indica que a 1999:

la iglesia evangélica ha sufrido la muerte de 35 pastores a manos de la insurgencia. La población atribuye el asesinato a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que desde 1996 advierten a los pastores que no debían celebrar reuniones ni visitar las comunidades de la zona porque se prestaba para que se infiltraran las fuerzas militares y los grupos paramilitares. También les incomodaba el mensaje contra la violencia que predicaban los pastores. Además, 300 iglesias tuvieron que cerrar sus puertas ante las amenazas y cinco fueron destruidas por la guerrilla. La iglesia evangélica también se ha visto afectada por el reclutamiento forzoso de decenas de sus jóvenes y en muchos lugares rurales tiene que pagar a la guerrilla un “impuesto de guerra” equivalente al 50 por ciento de los diezmos y ofrendas que recoge (Arboleda, 2011, pp. 230-231).

Ricardo Esquivia Ballestas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Paz del Consejo Evangélico de Colombia (Cedecol) y director del Centro Cristiano para la Justicia, la Paz y Acción No violenta (Justapaz), entregó al Congreso Mundial Menonita de 2002 un informe sobre ataques a personas y a templos protestantes en el período 2001-2002 por parte de la guerrilla de las Farc y de los paramilitares. Allí se reporta:

27 pastores o líderes asesinados especialmente del Movimiento Misionero Mundial y de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y más de 40 templos cerrados en la zona de Arauca.

Frente a estos grupos protestantes, la guerrilla de las FARC ha presentado el argumento de que los militares y autodefensas se hacen pasar por ministros evangélicos para efectuar labores de inteligencia. Esto ha sido cierto en algunos lugares, especialmente, del Magdalena Medio. Las FARC estiman que los evangélicos viven de espaldas a la realidad pues no participan en las reuniones que hacen los guerrilleros para tratar los problemas sociales de la región (Arboleda, 2011, pp. 231-232).

Otros datos reflejan el riesgo que representa para las confesiones religiosas su incursión en escenarios de mediación y denuncia frente a la situación de conflicto en el país:

desde mediados de los 80, el clero ha llamado la atención sobre el deterioro de los derechos humanos a causa de la guerra. Han visibilizado el problema del desplazamiento forzado y han abogado por el respeto al Derecho Internacional Humanitario. De

esta forma, la Iglesia no solo ha denunciado los abusos y atropellos de las guerrillas y paramilitares, también los realizados por parte de la fuerza pública. Esta situación los ha vuelto un blanco en medio del conflicto: entre 1984 y comienzos de 2005 (...) 63 miembros del clero han sido asesinados, incluidos un arzobispo y un obispo (Otero, 2008).

La situación ha llegado a tornarse tan crítica que “el propio Vaticano consideró en 2003 a Colombia el país más peligroso para la tarea de la evangelización. En 2004 perdió ese dudoso honor superado por Burkina Faso, Uganda, Burundi y Suráfrica, pero siguió apareciendo en la fatídica lista” (Revista Semana, 2005, párr. 2).

Las cifras reportadas por la Conferencia Episcopal Colombiana no desmienten aquella trágica realidad, pues de acuerdo a sus registros

en los últimos años la Iglesia Católica ha visto asesinar a un obispo, 55 sacerdotes, cuatro religiosos, dos misioneros y dos seminaristas, sin contar con los numerosos secuestros, amenazas, desplazamientos y ataques violentos contra muchos de sus miembros. Sólo entre 1987 y 2004, 41 clérigos fueron asesinados (Revista Semana, 2005, párr. 3).

Con alarmantes dimensiones se replican los fenómenos de violencia, esta vez sobre las denominaciones cristianas protestantes. La Federación Consejo Evangélico de Colombia (Cedecol), registra que “al menos 115 pastores y líderes religiosos fueron asesinados en los últimos tres años [hasta 2005]. Decenas de templos tuvieron que ser cerrados, y muchas viudas y huérfanos de pastores tuvieron que ser protegidos” (Revista Semana, 2005, párr. 5) [corchetes fuera del original].

Entre los autores de estos ataques violentos sobre las comunidades religiosas, se ha identificado mayor responsabilidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pues contrario al grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el primero las creencias de fe han estado marginadas de su proyecto revolucionario. Por su parte, los paramilitares han atacado con mayor énfasis a las iglesias evangélicas y protestantes. Las agresiones de los actores armados ilegales incluyen homicidios, secuestros, extorsión y restricción a la libre expresión de la religiosidad (Revista Semana, 2005, párr. 7).

Las manifestaciones de intolerancia, persecución y discriminación sobre comunidades de fe no han cesado, y en la última década registran una singular intensidad en Bogotá, conforme lo revela el Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Religión, Sociedad y Política (GIERSP) de la Universidad San Buenaventura en su sede de la capital.

Su indagación y análisis, centrados en datos de tipo cuantitativo recabados entre julio y septiembre de 2008, interrogan sobre la filiación y prácticas religiosas, la permanencia y cambio en las adscripciones identitarias de carácter religioso y político de los bogotanos. La muestra considerada que corresponde a 1800 personas, abarca una representación equivalente en términos porcentuales a la distribución poblacional por estratos socio-económicos de Bogotá.

El trabajo adelantado por el GIERSP arroja elocuentes resultados que permiten una pertinente y excepcional aproximación al fenómeno de discriminación religiosa en la ciudad (Gómez, 2009, pp. 211-276). Entre estos destacan los siguientes:

- El 66.3% de las personas encuestadas considera que los practicantes de algunas religiones son particularmente peligrosos.
- El 87.2% de las personas encuestadas se ha alejado de una persona por causa de sus creencias religiosas.
- El 48.2% de las personas encuestadas reporta que en su religión o iglesia no se aborda el tema del diálogo interreligioso o ecumenismo.
- El 11.2% de las personas encuestadas se ha sentido discriminado por causa de sus creencias religiosas, aunque sea algunas veces.
- El 11.3% de las personas encuestadas está en desacuerdo con que en Colombia exista libertad de cultos.
- El 37% de las personas encuestadas está de acuerdo con que en Colombia se discrimina a las minorías religiosas.

Por su parte, el Convenio Interadministrativo No. 1346 de 2015, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C y la Universidad Nacional de Colombia con el objetivo de emitir recomendaciones para la construcción de una política pública orientada a garantizar y proteger las libertades y los derechos fundamentales de religión, culto y conciencia en el distrito capital, condensa el esfuerzo mancomunado por abordar, desde la experiencia práctica y la interacción con los actores sociales

directamente implicados, una realidad escasamente explorada en sectores académicos e institucionales, que mayoritariamente se han volcado sobre el análisis histórico-político de las religiones en el país.

Teniendo en cuenta la complejidad del tema y la deficiente producción de información sobre los procesos de pluralización religiosa en nuestro país, que dificulta una identificación integral y pormenorizada a escala nacional y territorial de los actores involucrados en esta política, el convenio suscrito con la Universidad Nacional de Colombia requirió, como producto inicial, la elaboración de una muestra representativa de las minorías religiosas de la ciudad. Lo anterior respaldado en la experiencia de más de veinte años del Observatorio de diversidad religiosa, adscrito al Centro de Estudios Sociales (CES) – Grupo de Estudios Sociales de la Religión de la Universidad Nacional de Colombia.

Como obligación se propuso entonces:

Diseñar una guía metodológica para identificar la diversidad religiosa con presencia en la ciudad, con una muestra representativa de las minorías religiosas.<sup>6</sup> La propuesta deberá incluir como metodologías de trabajo, la encuesta, grupos focales y talleres, dependiendo de la estructura y organización de las comunidades de fe. La guía metodológica tiene como propósito identificar las problemáticas que afectan al sector sujeto de estudio, ello conlleva a una delimitación temática, poblacional y espacial de las comunidades que se van a intervenir (Convenio interadministrativo No. 1346 de 2015 suscrito entre el Distrito Capital-Secretaría Distrital de Gobierno y Universidad Nacional de Colombia, pp. 5-6).

La categorización propuesta por la Universidad, que puede ser consultada en el informe cuantitativo resultado del Convenio (Beltrán, 2016, p. 200), responde a varios factores:

- i) Composición poblacional según pertenencia a determinada confesión religiosa: católicos 70.9%, diversidad protestante 16.7%, ateos y agnósticos 4.7%, creen en Dios pero no en la religión 3.5%, Testigos de Jehová y Adventistas 1.8%, y otros como Musulmanes, Budistas, Hare Krishna con el 0.2% (Beltrán, 2013, p. 100).<sup>7</sup> El país no cuenta con un censo actualizado desde el año 2005 y los censos realizados por el DANE no han incluido la variable identidad religiosa.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> El concepto minorías religiosas es entendido como todas las comunidades religiosas distintas a la religión católica, que es mayoritaria en el país.



- ii) Información sin actualizar del Ministerio del Interior sobre la realidad religiosa del país y de Bogotá a partir de la expedición de personerías jurídicas.
- iii) La inexistente distinción entre varias categorías establecidas en la Ley Estatutaria 133 de 1994, tales como confesión religiosa, iglesia, denominación, que hoy continúan sin una delimitación clara por parte del Gobierno Nacional.

El levantamiento de un mapa de la diversidad religiosa en Bogotá, permitió una delimitación más precisa frente al marco de actores sociales implicados en el ámbito temático de la política, y consecuentemente, allanó la definición de los componentes cualitativo y cuantitativo para proseguir el estudio a cargo de la Universidad Nacional.

El componente cualitativo fue desarrollado mediante la técnica de grupos focales entre junio y diciembre de 2015 con la participación de 40 comunidades religiosas, conjunto representativo de la diversidad de minorías religiosas asentadas en Bogotá.

Por su parte, el componente cuantitativo se adelantó mediante encuestas aplicadas entre febrero y junio de 2016 sobre un universo de 517 lideresas y líderes religiosos, de los cuales 447 prestan sus servicios a comunidades (congregaciones, capillas, mezquitas, sinagogas) ubicadas en Bogotá, y los restantes en municipios aledaños como Chía, Funza, Fusagasugá, Soacha y Zipaquirá (Beltrán, 2016, pp. 198-199). Entre ellos se cuentan católicos, protestantes evangélicos, pentecostales unidos, adventistas, musulmanes, vaisnavas (hare krishnas), judíos mesiánicos, mormones, budistas e hinduistas, que reflejan la composición del mapa de la diversidad religiosa construido y cuya identificación fue extraída de la base de datos del Observatorio de diversidad religiosa de la Universidad Nacional de Colombia.

La información cuantitativa se recolectó sobre una muestra segmentada con base en tres criterios de representatividad: 1) Que en la muestra estuvieran representadas las confesiones religiosas más significativas en términos demográficos del Distrito Capital; 2) inclusión de líderes residentes en viviendas de todos los estratos socioeconómicos de la ciudad; 3) Que todas las localidades del Distrito Capital estuviesen representadas en la muestra (Beltrán, 2016, pp. 199-200).

<sup>7</sup> Estudio cuantitativo aplicado en 2010 en las cuatro principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, en algunas ciudades intermedias (Maicao, Bucaramanga y Barrancabermeja) y en varios municipios de la región del Urabá. Muestra aleatoria de 3.853 hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los estratos socioeconómicos y niveles educativos.

<sup>8</sup> Durante el año 2017 y con miras a la realización del censo nacional del año 2018, el equipo de la Subdirección acompañó reuniones de trabajo en el DANE para la inclusión de esta variable.

Bajo el prisma de las organizaciones religiosas en voz de sus líderes y lideresas, los informes del Convenio identificaron las principales problemáticas que menoscaban las libertades de religión, culto y conciencia en la ciudad, recogidas como se enuncia a continuación:

- (1) Intolerancia y persecución religiosa; (2) discriminación;
- (3) conflictos de convivencia que se producen en torno a las celebraciones de culto; (4) obstáculos que enfrentan las comunidades religiosas en el desarrollo de sus labores sociales (Beltrán, 2015, p. 32).

Cada uno de estos nudos críticos agrupa una serie de fenómenos que materializan formas de amenaza o perjuicio a los derechos aludidos. Con intensidades, alcances y magnitudes variables, las problemáticas señaladas ilustran la realidad concreta y efectiva sobre la cual se ha cimentado la construcción de la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia.

Desglosados por nudo crítico, destacan los siguientes datos extraídos de los informes antedichos:

### ***Intolerancia y persecución religiosa***

Dentro de este nudo crítico se han identificado las siguientes conductas:

- a.** Extorsión, secuestro o amenaza de secuestro por causa de la actividad religiosa
  - En los últimos tres años, de 517 líderes religiosos encuestados, 20 (que equivalen al 3,9%) han enfrentado por lo menos una amenaza de secuestro por causa de sus actividades religiosas (Beltrán, 2016, p. 49).
  - En los últimos tres años, de 517 líderes religiosos encuestados, 65 (que equivalen al 12,6%) han enfrentado una amenaza contra su vida y su integridad por causa de sus creencias o de actividades religiosas (p. 51).
- b.** Agresión física
  - En los últimos tres años, de 517 líderes religiosos encuestados, 53 (que equivalen al 10,3%) han enfrentado por lo menos una agresión física por causa de sus creencias o actividades religiosas (Beltrán, 2016, p. 52).

- En los últimos tres años, de 517 líderes religiosos encuestados, 280 (que equivalen al 54,2%) han sido testigos de por lo menos un caso de extorsión, secuestro, o amenaza a la vida y a la integridad contra otro líder de su comunidad por causa de sus actividades religiosas (p. 54).

#### **c. Intolerancia religiosa en el ámbito escolar**

- De 517 líderes religiosos encuestados, 307 (que equivalen al 59,4%) están en desacuerdo con la afirmación *"los contenidos de la clase de religión promueven la tolerancia religiosa"* (Beltrán, 2016, p. 92).

#### **d. Daños a instalaciones físicas (lugares de culto, sedes administrativas, colegios, entre otros).**

- En los últimos tres años, de 517 líderes religiosos encuestados, 172 (que equivalen al 33,3%) han enfrentado por lo menos en una ocasión daños intencionales a las instalaciones físicas del lugar donde celebran las actividades religiosas (p. 56).

### **Discriminación**

#### **a. Burlas o trato discriminatorio por causa del vestuario o costumbres alimentarias que corresponden a sus tradiciones religiosas**

- En los últimos tres años, de 517 líderes religiosos encuestados, 160 (que equivalen al 30,9%) enfrentaron por lo menos en una ocasión burlas o trato discriminatorio por causa del vestuario que corresponde a sus costumbres religiosas (Beltrán, 2016, p. 58).
- En los últimos tres años, de 517 líderes religiosos encuestados, 113 (que equivalen al 21,9%) enfrentaron por lo menos en una ocasión burlas o trato discriminatorio por causa de las costumbres alimentarias que corresponden a sus tradiciones religiosas (p. 60).

#### **b. Desigualdad en el acceso a bienes y espacios públicos, como parques y coliseos**

Los líderes de varias confesiones religiosas (entre las que se encuentran la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Denominación Bautista Colombiana, la Iglesia de Dios en Colombia, la Iglesia Cristiana Filadelfia y el Movimiento Misionero Mundial) manifestaron que han enfrentado multitud de trabas burocráticas (provenientes especialmente de las Alcaldías Locales) para acceder a espacios

públicos como parques o coliseos. Esto con el fin de desarrollar actividades relacionadas con su culto, o actividades de servicio social de interés general. Consideran esta situación como discriminatoria en la medida en que tienen la percepción que el acceso a estos espacios es relativamente fácil si se trata de actividades propias de la Iglesia católica (Beltrán, 2015, p. 39).

**c.** Baja presencia de líderes religiosos en espacios locales de participación

En los últimos tres años, de 517 líderes religiosos encuestados, 119 (que equivalen al 23%) han participado en Juntas de Acción Comunal, 29 (que equivalen al 5,6%) han participado en comités locales de víctimas, 59 (que equivalen al 11,4%) han participado en comités locales de Derechos Humanos, 29 (que equivalen al 5,6%) han participado en comités locales de discapacidad, 46 (que equivalen al 8,9%) han participado en consejos locales de propiedad horizontal, 57 (que equivalen al 11%) han participado en consejos tutelares de los derechos de niños y niñas, 40 (que equivalen al 7,7%) han participado en consejos locales de política social, 39 (que equivalen al 7,5%) han participado en comités de participación comunitaria en salud, 42 (que equivalen al 8,1%) han participado en consejos locales de planeación, 78 (que equivalen al 15,1%) han participado en consejos locales de juventud, 38 (que equivalen al 7,4%) han participado en consejos locales de medios de comunicación alternativos y comunitarios (Beltrán, 2016, pp. 178-189).

**d.** Trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación

Un número importante de comunidades religiosas (como la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Iglesia Vaisnava, entre otras) manifestaron que los grandes medios de comunicación del país (en la radio, la prensa y la televisión) desconocen las implicaciones del pluralismo religioso, y siguen privilegiando a la Iglesia católica (a la que denominan “La Iglesia”, como si existiera en Colombia una Iglesia oficial) y desconocen la diversidad religiosa del país. Esto los lleva a dar un trato peyorativo y discriminatorio a las minorías religiosas. Incluso, algunos medios de comunicación se refieren a las comunidades religiosas no católicas como sectas, “iglesias de garaje”, o como un simple “negocio” (Beltrán, 2015, pp. 44-45).

**e.** Información malintencionada u ofensiva que afectó la imagen de su comunidad religiosa

- En los últimos tres años, de 517 líderes religiosos encuestados, 150 (que equivalen al 29%) dicen haber observado por lo menos un episodio en el que los medios masivos de comunicación presentaron información malintencionada u ofensiva que afectó la imagen de su comunidad religiosa.
- En los últimos tres años, de 517 líderes religiosos encuestados, 59 (que equivalen al 11,4%) dicen haber observado por lo menos un episodio en el que los medios de comunicación de su localidad presentaron información malintencionada u ofensiva que afectó la imagen de su comunidad religiosa (Beltrán, 2016, p. 64).

**f.** Desconocimiento del derecho fundamental a la Objeción de Conciencia

Los miembros de algunas minorías religiosas (menonitas, adventistas, luteranos, vaishnavas y miembros de la IPUC [Iglesia Pentecostal Unida de Colombia], entre otros) se resisten a usar armas por razones de conciencia, por ende, se resisten a prestar el servicio militar obligatorio.

Frente a esta situación, las autoridades militares encargadas del reclutamiento ignoran o hacen caso omiso de las Sentencias de la Corte [Constitucional] que favorecen los derechos de los objetores de conciencia. Incluso autoridades militares han dado un trato hostil a jóvenes objetores, intimidándolos y presionándolos para que accedan a prestar el servicio militar. En el caso de los jóvenes adventistas que han prestado el servicio militar, no se les ha permitido guardar el día sábado, como día de reposo dedicado a sus actividades de culto (Beltrán, 2015, pp. 34-35) [Corchetes fuera de original].

- Durante los últimos tres años, de los 117 líderes y representantes religiosos cuyas comunidades predicán la objeción de conciencia (22,6% del total de líderes encuestados), 59 de ellos (equivalente al 50,4% de líderes objetores) han sido testigos de presiones de las autoridades militares hacia jóvenes de su comunidad que se resisten a prestar el servicio militar por razones de conciencia (Beltrán, 2016, pp. 88-89)

- Durante los últimos tres años, de los 117 líderes y representantes religiosos cuyas comunidades predicna la objeción de conciencia (22,6% del total de líderes encuestados), 25 de ellos (equivalente al 21,4% de líderes objetores) han sido testigos cómo algún joven de su comunidad, objetor de conciencia al servicio militar, se vio obligado a emprender acciones legales para evitar ser reclutado por el ejército (pp. 88-89).
- g.** Situaciones de intolerancia o discriminación religiosa en el ámbito escolar.
- En los últimos tres años, de 517 líderes religiosos encuestados, 97 (que equivalen al 18,8%) dicen haber tenido conocimiento de por lo menos un episodio en el que los(as) niños(as) de su comunidad enfrentaron situaciones de intolerancia o discriminación religiosa en el ámbito escolar (Beltrán, 2016, p. 68).

Otra queja generalizada de miembros de minorías religiosas observa que sus hijos(as) son víctimas de discriminación al sentirse presionados u obligados a participar de rituales religiosos, o de cursos de religión que no corresponden a sus creencias. Esto ocurre incluso en colegios públicos, es decir, en los que son financiados por el Distrito Capital (Beltrán, 2015, pp. 39-40).

**h.** Discriminación tributaria

Los líderes de diversas confesiones (entre las que se cuentan la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Denominación bautista Colombiana, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y el Movimiento Misionero Mundial) indicaron que: la Secretaría de Hacienda Distrital viene haciendo cobros reiterados año tras año del impuesto predial, pese a que ya ha sido notificada de la destinación de los inmuebles referidos, lo cual rompe la igualdad en el tratamiento tributario [a las diversas iglesias, comunidades religiosas] porque en nuestra ciudad existe la normatividad emanada del Consejo Distrital (sic) para el efecto de la exención tributaria de los lugares de culto como lo constituye el Decreto 352 de 2002 y demás normas pertinentes.

El Decreto 352 de 2002, anteriormente citado, regula los tributos en el Distrito Capital, en su Artículo 19, indica que ‘no declararán ni pagarán impuesto predial unificado:

- d) Los inmuebles de propiedad de la iglesia católica, destinados al culto y vivienda de las comunidades religiosas, a las curias diocesanas y arquidiocesanas, casas episcopales y curales, y seminarios conciliares.
- e) Los inmuebles de propiedad de otras iglesias diferentes a la católica, reconocidas por el Estado Colombiano y destinadas al culto, a las casas pastorales, seminarios y sedes conciliares (Beltrán, 2015, p. 43).

#### i. Aplicación de tarifas comerciales a templos y lugares de culto

“Otra queja generalizada es ‘la aplicación de las tarifas comerciales en los servicios públicos donde funcionarán templos y lugares de culto’ ya que la actividad de culto por su naturaleza es sin ánimo de lucro” (Beltrán, 2015, p. 39).

#### j. Íconos católicos en edificios públicos

Líderes de varias comunidades religiosas (particularmente, bautistas y musulmanes) manifestaron que hasta el día de hoy en colegios, funerarias y otros edificios públicos permanecen cruces, e imágenes de vírgenes, cristos y santos católicos. Esto implica una determinación del espacio que favorece una determinada confesión religiosa, lo que implica, a su vez, una forma de discriminación para los no católicos. Por ejemplo, las funerarias están ornamentadas con este tipo de íconos y es difícil que los responsables accedan a retirarlas provisionalmente cuando los dolientes lo solicitan (Beltrán, 2015, p. 41).

Los resultados atinentes a los dos primeros nudos críticos registran que, **de los 517 líderes religiosos encuestados, 437 (equivalentes al 84,5%) manifestaron haber sufrido por lo menos una de las siguientes situaciones de intolerancia, discriminación y persecución religiosa en los últimos tres años:**

- Extorsiones por causa de actividades religiosas
- Amenazas de secuestro
- Amenazas contra la vida y la integridad
- Agresiones físicas
- Daños a las instalaciones físicas donde se celebran los cultos
- Burlas o trato discriminatorio por causa del vestuario correspondiente a las tradiciones religiosas
- Burlas o trato discriminatorio por causa de las costumbres alimentarias

- Información malintencionada u ofensiva sobre su comunidad por parte de los medios masivos de comunicación
- Información malintencionada u ofensiva sobre su comunidad por parte de los medios de la localidad
- Intervención de la policía para multar o retirar los vehículos
- Niños(as) de su comunidad afrontando situaciones de intolerancia o discriminación religiosa en el ámbito escolar
- Otras expresiones de intolerancia, discriminación y persecución religiosa
- (Beltrán, 2016, p. 70) [Negrilla fuera del original].

## **Conflictos de convivencia**

### **a. Conflictos generados por el ruido de las celebraciones cülticas**

- En el último año, de 517 líderes religiosos consultados, 140 (que equivalen al 27,1%) afrontaron por lo menos un altercado con los vecinos por causa del ruido que se origina en los cultos (Beltrán, 2016, p. 81).

### **b. Conflictos generados por el parqueo de automóviles en calles aledañas a los lugares de culto**

- En el último año, de 517 líderes religiosos consultados, 153 (que equivalen al 29,6 %) afrontaron por lo menos un altercado con los vecinos por causa de vehículos de fieles parqueados en las calles aledañas al lugar donde se celebran los cultos (Beltrán, 2016, p. 79).
- En el último año, de 517 líderes religiosos consultados, 83 (que equivalen al 16,1 %) afrontaron por lo menos un altercado con los vecinos por causa de las afectaciones a la movilidad vehicular o peatonal relacionadas con sus celebraciones religiosas (p. 83).

En conjunto, este tercer nudo crítico arroja que, **de 517 líderes religiosos consultados, 245 (equivalentes al 52,6%) manifestaron que su comunidad enfrentó en el último año por lo menos uno de los siguientes altercados relacionados con el desarrollo de sus actividades cülticas:**

- Altercados por causa de vehículos de fieles parqueados en las calles aledañas al lugar de culto
- Altercados por causa del ruido que se origina en los cultos
- Altercados por causa de las afectaciones a la movilidad vehicular o peatonal relacionadas con las celebraciones religiosas



- Otros conflictos de convivencia (entre ellos están: acoso por predicar, agresiones verbales por la celebración del culto, recolección de firmas para expulsión del barrio a la comunidad religiosa, hostilidad con las comunidades religiosas en sectores donde también hay expendio de drogas, críticas y estigmatización, disposición de desechos y basuras en la calle de la congregación). (Beltrán, 2016, pp. 86-87). [Negrita fuera del original].

### ***Obstáculos en el desarrollo de labores sociales realizadas por las comunidades religiosas***

- a. Dificultades para ingresar o desempeñar asistencia espiritual en clínicas, hospitales, centros de reclusión, guarniciones militares y centros educativos
  - De los 381 líderes religiosos que prestan asistencia espiritual en clínicas u hospitales (73,7% del total de encuestados), 173 (equivalente al 45,4% de los que desempeñan tal labor) han enfrentado dificultades para ingresar o para llevarla a cabo (Beltrán, 2016, p. 73-74).
  - De los 307 líderes religiosos que prestan asistencia espiritual en centros de reclusión (59,4% del total de encuestados), 111 (equivalente al 36,2% de los que desempeñan tal labor) han enfrentado dificultades para ingresar o para llevarla a cabo (p. 74).
  - De los 255 líderes religiosos que prestan asistencia espiritual en guarniciones militares (49,3% del total de encuestados), 85 (equivalente al 33,3% de los que desempeñan tal labor) han enfrentado dificultades para ingresar o para llevarla a cabo (p. 75).
  - De los 362 líderes religiosos que prestan asistencia espiritual en centros educativos (70% del total de encuestados), 159 (equivalente al 43,9% de los que desempeñan tal labor) han enfrentado dificultades para ingresar o para llevarla a cabo (p. 75-76).
- b. Exceso de trámites burocráticos para presentar proyectos ante el gobierno distrital o nacional, buscar ayudas financieras, legalizar la importación de donaciones con fines sociales y tramitar permisos para el desarrollo de sus actividades sociales

Los líderes religiosos se quejan de un exceso de trámites burocráticos para presentar proyectos ante el gobierno distrital o nacional, buscar ayudas financieras, legalizar la importación de donaciones con fines sociales y tramitar permisos para el desarrollo de sus actividades sociales (Beltrán, 2015, p. 50).

Fuentes complementarias amplían la mirada y la discusión sobre algunos de los aspectos abordados por el informe de la Universidad Nacional de Colombia. Tal es el caso de Alberto Echeverri Guzmán, filósofo y doctor en Teología, que destaca el papel de los imaginarios sociales históricamente sedimentados entre la población colombiana en favor del predominio católico en la educación escolar, cuya pervivencia ha contribuido a reproducir la discriminación religiosa en el campo educativo, extensible a otros ámbitos de la vida pública del país. Al respecto indica:

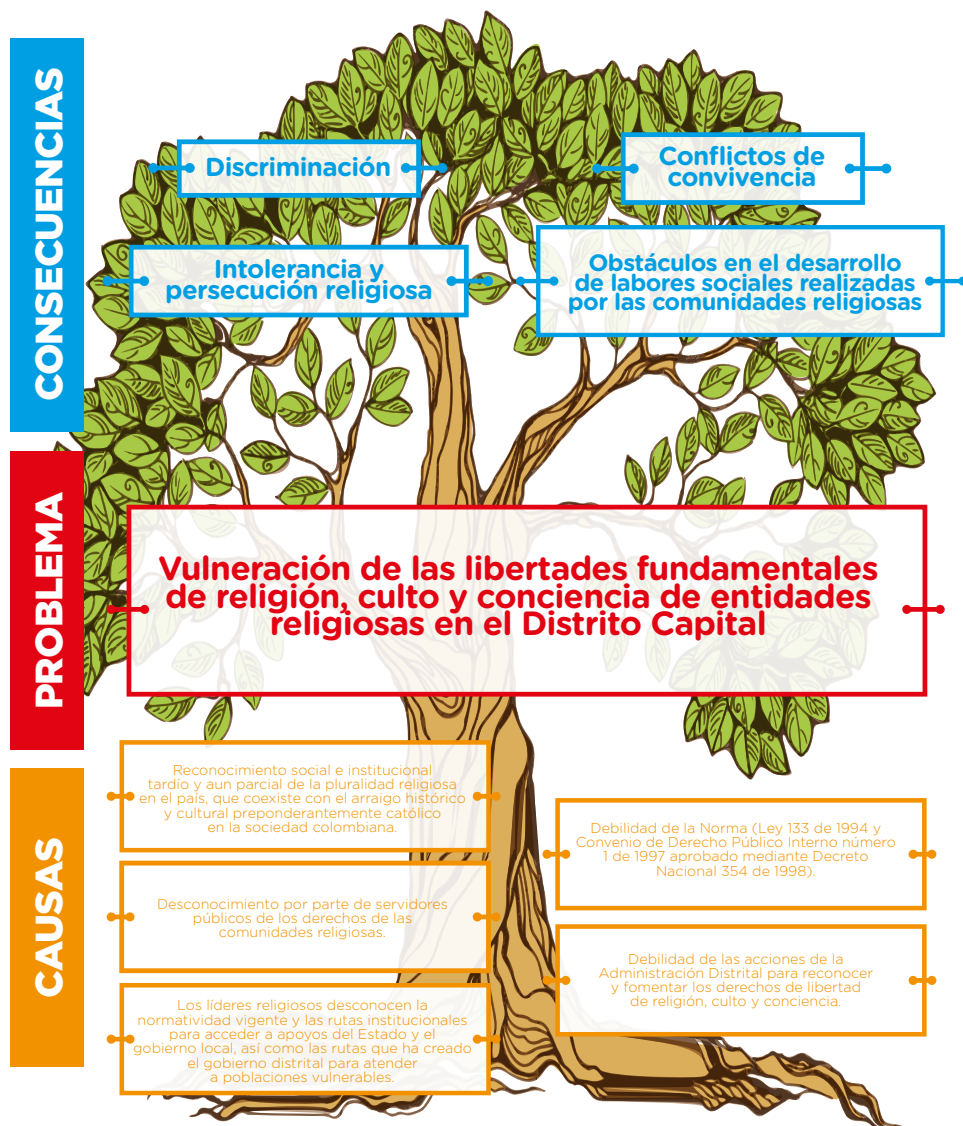
Pareciera que el colombiano medio afirmara, con pasmosa frescura, algo así como: “[...] soy católico; por tanto, la educación estatal debe responsabilizarse de la formación católica de mis hijos; además, deberán ser los valores católicos los que presidan la ética de las relaciones entre las personas, sobre todo cuando se trata de autoridades públicas, y la actividad general del Estado, cuando éste toma decisiones para la vida en sociedad de mis compatriotas”. La fría indiferencia hacia la pluralidad de los credos religiosos o arreligiosos individuales hace parte de la vida diaria de los colombianos de tiempo atrás (Echeverri, 2012, p. 126) [corchetes en el original].

Otro de los factores que agudiza la problemática señalada, se asocia a la deficiente provisión de personal adecuadamente capacitado para impartir educación religiosa genuinamente plural en Colombia, considerando que: en la situación actual de la educación en el país, resulta imposible cumplir con la obligación estatal de respetar el derecho de los padres de familia no católicos a exigir una educación religiosa para sus hijos, tanto en los niveles de preescolar como en los de la básica primaria y media. Si ni siquiera las instituciones escolares privadas de los tres niveles pueden proveer multiplicidad de pastores para las variadísimas confesiones evangélicas, rabinos para los judíos, imanes para los de fe islámica, etc..., cuánto menos podrá un exiguo presupuesto como el de las escuelas y colegios estatales costear otro tanto para quienes atiendan a la educación religiosa de los suyos (Echeverri, 2012, p. 131).

Frente a la asimetría entre mayorías y minorías religiosas manifiesta en la esfera educativa, el autor emite un interrogante que permite entrever alguna de las causas por las que el fenómeno mismo permanece:

Nos preguntamos, adicionalmente, por qué en Colombia las diversas iglesias cristianas –las así autodenominadas, al igual que la católica romana, las protestantes históricas y la ortodoxa– no exigen del Estado el cumplimiento de esta ordenación constitucional [art. 19 CPN] así como lo hacen respecto de las consecuencias de ellas sobre sus propios fieles (p. 131) [Corchetes fuera del original].

## 2.7 Árbol de problemas



Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno- Oficina Asesora de Planeación. Marzo 2017.

La estructuración de la política pública se hizo de acuerdo con las metodologías establecidas por la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de Gobierno. En este sentido, la identificación del problema se realizó a través de la metodología de Árbol de problemas, en el cual también se identificaron las causas y consecuencias del mismo.

Es importante aclarar que el árbol de problemas ya expuesto se realizó con los diferentes actores que se presentan en el numeral **2.10 Análisis de actores**, además de instituciones distritales y nacionales, en donde cada una de ellas expresó lo que pensaba respecto a las diferentes entidades y comunidades religiosas. Para ello, se realizaron diferentes encuentros con dichos actores, procesos de investigación al interior de la Subdirección de Asuntos de Libertad religiosa y de Conciencia al igual que investigaciones con entes externos como el diagnóstico realizado por la Universidad Nacional de Colombia a cargo del profesor William Mauricio Beltrán,<sup>9</sup> en donde se expresan las diferentes dificultades que han tenido las comunidades religiosas.

Las libertades de religión, culto y conciencia, consagradas constitucionalmente como derechos fundamentales con prevalencia en el ordenamiento normativo nacional, son resultado de procesos históricos y políticos que aun hoy siguen en curso. Los desarrollos legislativos y la jurisprudencia cada vez mayor en la materia, reflejan una preocupación estatal creciente respecto al ejercicio pleno y universal de los derechos referidos, en tanto los casos de amenaza y vulneración efectiva no han cesado.

Así lo corrobora el marco contextual construido para la presente política pública (numeral 2.6), el cual retrata la problemática viva de amenaza y vulneración de estas libertades fundamentales, con singulares manifestaciones en Bogotá. Antes de concebirse una única causa, con sus actores protagónicos se han identificado un conjunto de factores causales que explican la supervivencia de fenómenos y condiciones limitantes del ejercicio de la libertad e igualdad religiosa, de cultos y conciencia en la ciudad.

De un lado, se detecta que la Ley Estatutaria 133 de 1994 “por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política”, adolece de algunos vacíos u omite algunas precisiones relevantes, pues si bien delimita su alcance determinando aquello que no está circunscrito dentro de la categoría

<sup>9</sup> El profesor William Beltrán ha desarrollado diferentes investigaciones sobre las dinámicas propias del proceso de cambio religioso contemporáneo, a través del Observatorio de diversidad religiosa de la Universidad Nacional de Colombia.

religión, no preceptúa explícitamente lo que en términos legales y conceptuales debe entenderse por tal. Esta suerte de indefinición normativa tiene efectos prácticos, al dejar un margen tan discrecional de interpretación que no contribuye a superar las preconcepciones extendidas institucional y socialmente sobre una única forma de la experiencia y la creencia religiosa.

Otro tanto puede anotarse sobre el Convenio de Derecho Público Interno número 1 de 1997 suscrito entre el Estado colombiano y algunas Entidades Religiosas Cristianas no católicas, encaminado a reglamentar derechos y facultades referidas al ejercicio de la libertad religiosa y de cultos. Desde su denominación se advierte un alcance restringido, pues sigue remitido a un segmento aun limitado que no acoge la totalidad de confesiones e iglesias configuradoras de la pluralidad religiosa existente en el país.

Adicionalmente, persiste un desconocimiento que se manifiesta en una doble dimensión: de un lado, los servidores públicos no conocen los derechos de los que son portadoras las comunidades religiosas en el ejercicio libre y pleno de su fe, lo que supone un obstáculo al respeto y garantía de los mismos conforme la obligación atribuida constitucionalmente a las autoridades estatales. De otra parte, los líderes religiosos desconocen la normatividad y las rutas institucionales vigentes para acceder a apoyos estatales de escala nacional y territorial, así como los mecanismos dispuestos por la administración distrital para atender a poblaciones vulnerables, situación que interpone limitantes al propósito de extender la aplicación práctica de las creencias y principios doctrinales de las comunidades religiosas, entre las cuales la vocación de servicio y la resolución de conflictos constituyen un eje esencial compartido.

Aunado a lo anterior, las numerosas iniciativas de asistencia social agenciadas por las comunidades religiosas en tanto materialización práctica de sus creencias y principios, se adelantan hoy de modo desarticulado y atomizado, lo que restringe significativamente sus alcances e impactos espirituales, sociales y humanitarios.

Tampoco debe soslayarse la debilidad de las acciones por parte de la administración distrital para reconocer y fomentar los derechos de libertad de religión, culto y conciencia, pues si bien su consagración constitucional se remonta a 1991, solo hasta hace escasos tres años han sido incorporados a la agenda pública distrital mediante la implementación de planes de incidencia dirigidas a las comunidades religiosas de Bogotá y la formulación de la presente política pública para la ciudad.

Por último, aunque hoy asistimos a un escenario de pluralismo religioso propio de las sociedades modernas, el acentuado arraigo histórico, cultural y poblacional preponderantemente católico en Colombia ha retrasado y eclipsado el reconocimiento de otras manifestaciones, credos y comunidades de fe presentes en el territorio nacional, circunstancia que impacta y condiciona el tratamiento neutral y equilibrado que es exigible para todas las confesiones religiosas en los diferentes contextos sociales e institucionales.

Las consecuencias derivadas de este marco causal pueden advertirse entre los nudos críticos identificados en el estudio adelantado por la Universidad Nacional en Convenio suscrito con la Secretaría Distrital de Gobierno en 2015 (citado en el marco contextual que hace parte del presente documento).

En primer lugar, casos de discriminación materializados en prácticas tales como: burlas por el vestuario o costumbres alimentarias propias de una confesión religiosa; acceso desigual a bienes y espacios públicos; información malintencionada u ofensiva que afectó la imagen de las comunidades religiosas; trato discriminatorio por parte de medios de comunicación masivos y locales.

En segundo término, intolerancia y persecución religiosa que se manifiesta en ámbitos escolares, en las dificultades para el uso de vías públicas durante el desarrollo de actividades cívicas, el uso de íconos que privilegian una religión particular en edificios públicos, por mencionar algunas de sus expresiones.

Un tercer aspecto se relaciona con los conflictos de convivencia, fundamentalmente suscitados por el parqueo de automóviles en inmediaciones de los lugares de culto y el ruido producido por las celebraciones públicas.

Finalmente, se identifican obstáculos en el desarrollo de labores sociales por parte de las comunidades religiosas, manifestados en diferentes escenarios y espacios como clínicas, hospitales, centros de reclusión, guarniciones militares y centros educativos, en los que persisten dificultades para su ingreso o la práctica de la asistencia espiritual. El exceso de trámites burocráticos para presentar proyectos en instancias públicas, buscar ayudas financieras y gestionar permisos para el desarrollo de sus actividades sociales, es otra de las situaciones que acarrea la problemática identificada y sus causas.

## 2.8 Análisis de Alternativas

La problemática diagnosticada y determinada como objeto de intervención de la presente política pública, condensa cuatro nudos críticos: (1) intolerancia y persecución religiosa; (2) discriminación; (3) conflictos de convivencia que se producen en torno a las celebraciones de culto; y (4) obstáculos que enfrentan las comunidades religiosas en el desarrollo de sus labores sociales. Con base en estos, se planteó la formulación de cuatro objetivos específicos como derroteros de acción para la política:

- Disminuir factores que alimentan la intolerancia y persecución fundados en la religión,
- Garantizar el goce efectivo de los derechos de todas las confesiones religiosas en condiciones de igualdad,
- Disminuir los conflictos de convivencia generados por los impactos de la celebración de los cultos por parte de las entidades religiosas y
- Garantizar la articulación y coordinación de proyectos sociales, entre entidades religiosas, organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional, protocolos, programas y rutas institucionales del Estado.

Tras este planteamiento inicial, se identificó que el tercer objetivo descrito, por su carácter y orientación, podría considerarse incluido dentro del segundo objetivo, dado que la disminución de conflictos de convivencia suscitados por actividades cúltricas es concebida como una de las rutas que conduce a la garantía del ejercicio pleno y armónico de los derechos de libertad religiosa, culto y conciencia, evitando que situaciones de antagonismo, confrontación o discordia en los ámbitos barriales y comunitarios se traduzcan en obstáculos para su realización en un marco de corresponsabilidad, tanto individual como colectivamente considerada.

Sintetizados en tres objetivos específicos, se procedió a la definición de los componentes que permiten perfilar las líneas de implementación de la política:

1. *Línea pedagógica y de interacción con ciudadanos, funcionarios de los niveles de la Administración Distrital y Gobierno Nacional.*
2. *Línea de goce efectivo de los derechos y garantías para el ejercicio pleno de las libertades.*
3. *Línea construcción de paz y justicia social.*
4. *Línea de articulación con otras comunidades religiosas, organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y el Estado.*



Sobre este ejercicio, se determinó que la línea *construcción de paz y justicia social* no puede asumirse desligada de la articulación entre comunidades religiosas, organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y el Estado, pues estas interacciones fortalecen los proyectos sociales que coadyuvan y hacen parte esencial de las iniciativas de construcción de paz y justicia social. Por esta razón, se unificaron ambas líneas estratégicas, dando lugar a la estructuración definitiva que se describe en el apartado correspondiente (numeral 2.13).

## 2.9. Marco conceptual

Situar un punto de partida para la exploración conceptual de un ámbito con pocos desarrollos teóricos, constituye una tarea ciertamente dispendiosa. Tratándose de una materia directamente relacionada con libertades fundamentales (hoy encumbradas bajo el insigne título de Derechos Humanos), se ha privilegiado la siguiente ruta expositiva:

a) Revisión histórica del concepto de libertad hasta su pleno reconocimiento como derecho fundamental que cristaliza en la proclamación de los Derechos Humanos; b) Estructura conceptual, contenido y conexidad de los derechos a la luz de la sociología jurídica; c) Avances recientes alcanzados por la Corte Constitucional con ocasión del derecho de objeción de conciencia por motivos religiosos.

### **a) Libertad como derecho. Aspectos Históricos**

Las ideas precursoras de la Independencia norteamericana y la Revolución Francesa, fueron determinantes en las concepciones actuales sobre las libertades individuales. Su defensa y reivindicación encauzaron la superación de los regímenes absolutistas que predominaron en Europa durante más de catorce siglos, caracterizados por la unidad político - religiosa cuyo único límite estuvo sujeto no a leyes terrenales sino a leyes divinas, que configuraron el denominado absolutismo teológico. Las monarquías absolutistas pervivieron hasta las revoluciones de 1848 (España, Francia, Estados de Habsburgo, Alemania), momento histórico trascendental donde las clases medias, los profesionales liberales y principalmente los movimientos obreros, fueron decisivos en la movilización de cambios hacia el respeto por los derechos y libertades fundamentales.

El fin del absolutismo a partir de dichas revoluciones, significó una toma de conciencia por parte de movimientos sociales sobre una idea de libertad, ya no como libertad frente al Estado, sino como derecho humano con

límites al poder del Estado, cuya reivindicación surge primordialmente de la libertad de elección frente a las creencias religiosas. (Parra y Góngora, 2004, p. 12).

Por otra parte, John Locke, ideólogo de la Revolución Inglesa de 1689, cumple un papel relevante en la construcción de ideas sobre la libertad, la separación Estado- Iglesia y el derecho de rebelión; este último entendido como la posibilidad de los ciudadanos de rebelarse frente a la tiranía. Durante la época, Locke convive con el surgimiento de diversas confesiones protestantes, la ausencia de libertades por parte de los súbditos y la inestabilidad política generada por persecuciones religiosas, contexto que da origen a uno de sus escritos más estudiados, la *Carta sobre la Tolerancia*. Allí, el pensador inglés concibe la verdad política y la verdad religiosa como meras subjetividades, pues lo verdaderamente existente es la libertad individual en tanto que expresión religiosa y de pensamiento.

Distingue así entre sociedad civil y sociedad religiosa: mientras la sociedad civil subsiste para preservar los intereses de la república, la segunda lo hace para la obtención de la vida eterna. La *Carta a la Tolerancia* tuvo una finalidad política: tolerar todas las creencias religiosas para preservar los intereses de la sociedad y del Estado (Alvear, 2010).

Es importante citar en este contexto la ética kantiana emergente en el siglo XVIII y sus aportes a la libertad individual como núcleo del pensamiento moral, racional y religioso. El trabajo de Kant parte de una crítica a los regímenes monárquicos, sus predicadores religiosos y voceros públicos, por la imposición de reglas a los súbditos sobre aspectos relativos a la elección consciente de cada individuo. Kant considera que las reglas de conducta equiparan los imperativos morales tales como "matar a otro", con los imperativos que nada tienen que ver con la moral como las "normas de higiene", y esto plantea una situación problemática: primero despoja al hombre de su capacidad moral de decidir sobre aspectos trascendentes y segundo pone en plano de igualdad decisiones donde no aplica la moral. (Malishev, 2014, p. 9).

Este principio fundamental permite abrir un debate sobre la *heteronomía*, entendida como una moral guiada por los intereses personales de los gobernantes, y de otra parte la *autonomía* o capacidad del sujeto para determinar su manera de actuar frente a lo moral e inmoral, guiada por aspiraciones y deseos conscientes o ideales presentes en la conciencia de cada ser humano. Es así como Kant plantea en la "razón moral" o también denominada "razón práctica" la capacidad de los individuos para elegir las maneras de actuar frente a determinada situación.

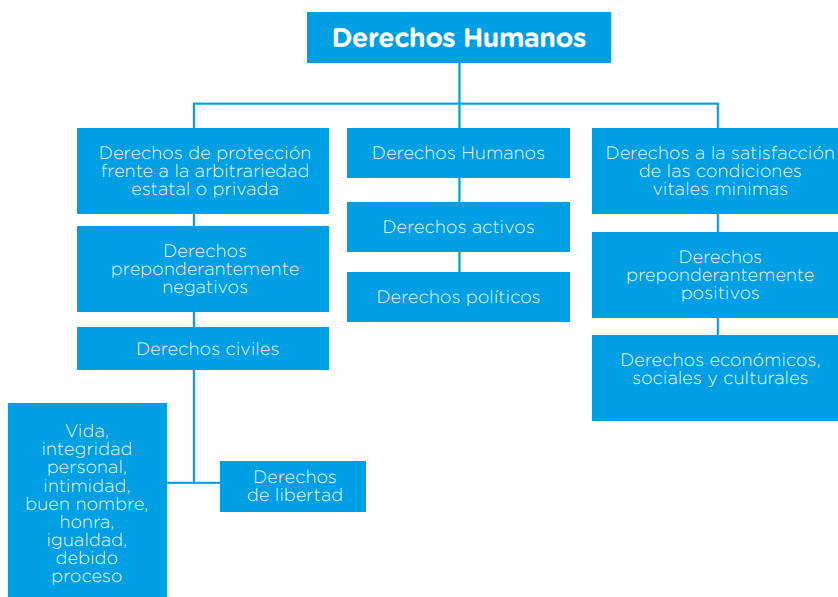
El proceso histórico de las libertades individuales permite afirmar la importancia de la religión para la construcción de la totalidad de los Derechos Humanos. Estudios sobre los orígenes de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se sitúan primordialmente en la influencia del *Bill of Rights* proclamado en Inglaterra en 1689, de las constituciones de las trece colonias americanas y la Declaración de Virginia de 1776, enfatizando en su concepción sobre la libertad religiosa como pilar para la consagración de los demás derechos fundamentales. (Jellinek, 2000, p. 14)

El marco de estas libertades humanas surge entonces en la necesidad de proteger los intereses privados de los abusos de poder por parte de Estados autoritarios. Es así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecida sobre el principio de la dignidad humana, apropia las libertades individuales, entre ellas las de religión y de conciencia como derechos fundamentales, precisamente por tratarse de un campo de la naturaleza del ser humano en el que se afirma su existencia.

El desarrollo del derecho en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana parte del concepto de Estado Social de Derecho, por tanto, involucra un significado más amplio que el surgido de las revoluciones liberales. En él se asigna a la libertad, la dignidad y la igualdad una naturaleza polivalente pues ellas son principio, valor y derecho fundamental, son por consiguiente un mandato superior con fuerza vinculante, necesario para la interpretación de la Carta Política. De ahí que su restricción debe estar plenamente justificada en el cumplimiento de fines necesarios para la protección de bienes constitucionales. Esta perspectiva resignifica la filosofía del ordenamiento jurídico en torno a la libertad y la democracia en frontal oposición al autoritarismo o el totalitarismo.

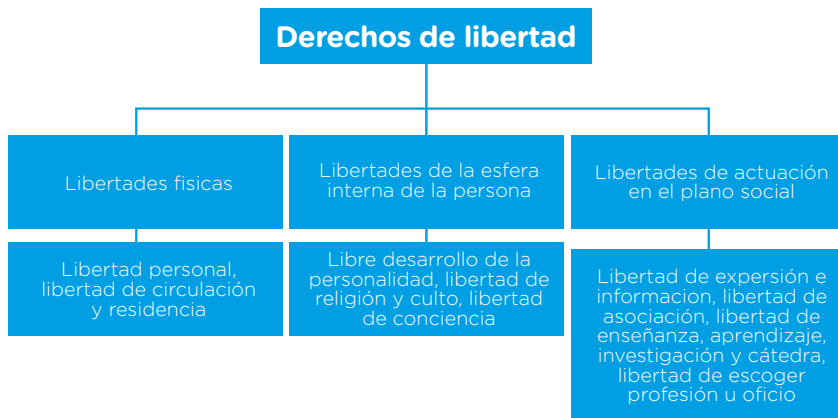
Ahora bien, dentro de la categoría de los derechos humanos y por su constructo histórico los derechos de libertad o las libertades fundamentales son considerados derechos de protección frente a la arbitrariedad del Estado, es decir, derechos de carácter negativo ya que implican unas obligaciones de no hacer o de abstención.

**Figura 1. Clasificación de los Derechos Humanos**



Fuente: Parra, O., Góngora, M. E. (2004). Derechos de Libertad. Defensoría del Pueblo, p. 13

**Figura 2. Clasificación de los Derechos de Libertad.**



Fuente: Parra, O., Góngora, M. E. (2004). Derechos de Libertad. Defensoría del Pueblo, p. 14

## **b) Estructura conceptual, contenido y conexidad de los derechos**

Una aproximación conceptual al extenso ámbito de la religión y la conciencia obliga a afrontar su abordaje desde diferentes saberes o campos de conocimiento, que permitan rastrear sus aspectos teóricos, normativos y prácticos más relevantes y disponer de un marco interpretativo inteligible, útil a su comprensión.

Explorando su raíz etimológica, **religión** proviene del latín *religio*, *religare* o *religere*. Su significado enseguida remite a una dimensión práctica, una acción concreta: *religare*, unir, fuertemente fue la acepción preconizada por los padres de la Iglesia, según los cuales la religión es una alianza vertical (con Dios) y horizontal con una fraternidad, esto es una doble alianza. Por su parte *religere*, recolectar, alude a un ejercicio de autoexamen, un retorno sobre sí mismo, una práctica individual menos cercana a religión y más próxima a espiritualidad, en el sentido actual conferido a ambos términos.

Otras vertientes mantienen su contenido personalista y trascendente agregando un factor emotivo, al asociar la religión con "Los sentimientos, actos, y experiencias de hombres particulares a solas, hasta donde se entiendan a sí mismos para mantenerse en relación con lo que consideran divinidad." (James, 1902, p. 31).

La religión es uno de los focos de atención que ha ocupado la reflexión sociológica desde sus primeros exponentes. Emile Durkheim (2008) la definió como "un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a cosas sagradas, es decir, separadas, prohibidas, creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos los que se adhieren a ellas." (pp. 92-93).

Una perspectiva sistémica permite observar la religión como un conjunto integrado de elementos múltiples que conforman una unidad dotada de sentido. Desde la antropología, Clifford Geertz (1996) identifica la religión como:

Un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones de una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y las motivaciones parezcan de un realismo único. (p. 89).

Otro tanto plantea Frédéric Rognon (1996), para quien "Religión es sistema de creencias (puntos de doctrina que clasifican y dan sentido al mundo) y de prácticas (ritos) que ligan a los hombres entre ellos y con una instancia no sensible (dioses, espíritus...)".

La religión otorga un orden de sentido vital a la experiencia humana personal y colectiva, fundado en la relación subjetiva con una esfera trascendente que desborda la vivencia netamente material para dar forma a un ámbito espiritual asumido como sagrado.

En tanto actividad humana significativa, la religión ha cobrado múltiples matices y manifestaciones diversas que abocan a hacer un uso plural del término y hablar, para mayor correspondencia empírica, de religiones. La irrupción de múltiples vertientes y corrientes a lo largo de la historia conllevan a postular la noción de **Pluralismo Religioso**, hoy amparado constitucionalmente en Colombia:

La Constitución de 1991 garantiza el pluralismo religioso, es decir, permite la coexistencia de las diversas confesiones y creencias, a la vez que garantiza a todas, por igual, la libre práctica de sus cultos y el desarrollo de las actividades que buscan extender sus convicciones entre la población, siempre que al hacerlo respeten el orden jurídico y los derechos fundamentales de las personas.

La Carta, en diversas normas, desarrolla esta garantía, con miras a una convivencia pacífica basada en el respeto de todos a las ideas y creencias de los demás y en la necesidad de propiciar que cada uno, en la órbita propia de su individualidad, adapte bajo un responsable uso de su libertad, las decisiones que mejor convengan a sus ideales y convicciones (Sentencia T – 200 de 1995 Corte Constitucional).

Bajo tales términos, la realización efectiva de la pluralidad religiosa presupone una condición previa, la **Libertad de Religión** hoy consagrada internacionalmente en el artículo 18 de la Declaración Universal de 1948 y que a juicio del Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas se extiende a las creencias teístas, no teístas y ateas, incluido el derecho a no profesar religión o creencia alguna. Este mismo organismo considera que los conceptos de "religión" y "creencias" deben entenderse en un sentido amplio, pues lo contrario significaría un reconocimiento preferencial de las religiones tradicionales y la tendencia a discriminar otras religiones y creencias minoritarias frente a una religión dominante.

Al respecto, la Corte Constitucional ha preceptuado:

El carácter más extendido de una determinada religión no implica que ésta pueda recibir un tratamiento privilegiado de parte del Estado, por cuanto la Constitución de 1991 ha conferido igual valor jurídico a todas las confesiones religiosas, independientemente de la cantidad de creyentes que éstas tengan. Se trata de una igualdad de derecho, o igualdad por nivelación o equiparación, con el fin de preservar el pluralismo y proteger a las minorías religiosas (Sentencia C-350 de 1994, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).

El mismo tribunal trazó la indisociable e intrínseca relación de la libertad de conciencia con la libertad religiosa, al establecer que:

La Constitución Política garantiza la libertad de conciencia (Artículo 18), asegurando a cada uno la inviolabilidad de sus creencias en materia religiosa, las cuales no pueden ser afectadas por la actividad del Estado o por la injerencia de los particulares. Por tanto, en la esfera de su interioridad inalienable, cada uno resuelve con autonomía aquello que habrá de configurar su fe religiosa, su concepción sobre la divinidad, los principios de su comportamiento frente a ella y su aceptación o rechazo a los símbolos que la representan.

En el campo de esta libertad hay lugar inclusive, para no creer en nada, si tal es el resultado del proceso interior mediante el cual se fija la posición de la persona frente a los temas espirituales. Como consecuencia de las propias concepciones, cada hombre asume unas conductas externas que traducen en la práctica las ideas religiosas que profesa.

En ejercicio de una libertad que el Estado garantiza, todos pueden afiliarse a la confesión religiosa de sus preferencias y, obviamente, habiéndose matriculado en una de ellas, el feligrés se compromete a acatar los deberes y obligaciones que exige la profesión de fe. La comunidad demanda normalmente signos externos que muestren el compromiso de los creyentes y su identificación con los valores que propugna. Los fieles, en desarrollo de la misma libertad, convencidos como están sobre las verdades de sus creencias, asumen la tarea de divulgarlas y de ganar nuevos adeptos.

La Constitución garantiza, entonces, la libertad de cultos (Artículo 19), en cuya virtud toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla individual o colectivamente (Sentencia T - 200 de 1995 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

Bajo la presunción de distinciones trazadas por algunos autores con relación a la libertad de pensamiento, se propone el siguiente planteamiento: la libertad religiosa posee un objeto de rasgos característicos propios, determinados por un conjunto de creencias y prácticas relativas a lo sagrado, trascendente, o divino, que escapan a toda aprehensión y tratamiento jurídico por parte del Estado, que en virtud a su aconfesionalidad, laicidad o neutralidad, es incompetente ante dichas manifestaciones.

Trascendiendo el plano individual, en su dimensión colectiva la religión remite a la noción de **Comunidad Religiosa**, que puede entenderse como un grupo de personas que comparten una misma creencia religiosa, movidas por un sistema doctrinal y un sistema moral que guía y orienta sus expectativas, ideales de existencia y planes de vida con el propósito de alcanzar bienes no terrenales. La comunidad integra a los fieles o seguidores de determinada doctrina, autoridades jerárquicas, pero también incluye los proyectos que ellas agencian en grupos poblacionales con grandes carencias materiales y espirituales, no necesariamente creyentes de la misma fe. En sentido estricto excluye a los simpatizantes, que son aquellas personas que comparten total o parcialmente estas creencias o ritos de la religión, pero sin entablar una relación permanente con la misma.

Usualmente las comunidades religiosas propenden por el bienestar tanto de fieles o seguidores como de la sociedad en general, motivan cambios para proteger intereses superiores como la familia, la niñez, la justicia y el amor. Sus intereses en común pueden ser agenciados a través de las nuevas tecnologías desde múltiples lugares alrededor del mundo.

Asociada con la anterior, la categoría de **Sector Religioso** permite ampliar la percepción sobre la unidad empírica objeto de la presente política. Con base en las directrices del Ministerio del Interior (2016), se entiende por Sector Religioso la colectividad o parte de una sociedad que se distingue de los demás por su característica o su particularidad religiosa. Es decir, un colectivo de personas que creen, confiesen o practican una religión o fe.

En su aspecto formal, las comunidades pueden devenir en **Entidades Religiosas**, esto es, organizaciones constituidas jurídicamente ante el Estado Colombiano, provistas con un establecimiento, una jerarquía, unos estatutos, un domicilio definido y un sometimiento a las normas que involucran a las organizaciones con personería jurídica. Las Entidades Religiosas detentan los siguientes derechos:



- El derecho a practicar el culto o celebrar reuniones relacionadas con la religión o las convicciones, y a fundar y mantener lugares para esos fines.
- El derecho a fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias adecuadas.
- El derecho a confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente los artículos y materiales necesarios para los ritos o costumbres de una religión o convicción.
- El derecho a escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes en esas esferas.
- El derecho a enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos para esos fines.
- El derecho a solicitar y recibir contribuciones voluntarias, financieras y de otro tipo provenientes de particulares e instituciones.
- El derecho a capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes que correspondan según las necesidades y normas de cualquier religión o convicción.
- El derecho a observar días de descanso y a celebrar festividades y ceremonias de conformidad con los preceptos de una religión o convicción.
- El derecho a establecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades acerca de cuestiones de religión o convicciones en el ámbito nacional y el internacional.

La presencia fáctica de las religiones a través de sus comunidades, sus cuerpos doctrinales, sus organizaciones y entidades formalmente constituidas, apareja una inobjetable dimensión práctica, se despliega en acciones tangibles que definen y dan contenido al ejercicio de la **Libertad de Culto**. De acuerdo a la Observación No. 22 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el Art. 18 de la Declaración Universal de 1948,<sup>10</sup> la libertad de culto es la libertad de manifestar la religión o las creencias, e implica la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza desde un sinnúmero de actividades como expresión material de la fe. Supone también la construcción de lugares de culto, el empleo de fórmulas y objetos rituales, la exhibición de símbolos, la observancia de fiestas religiosas.

Así mismo, dentro de las diversas expresiones de fe se incluyen determinadas costumbres, normas dietéticas, uso de prendas de vestir distintivas entre hombres y mujeres, la práctica de ritos asociados con las sucesivas etapas de la vida, ceremonias fúnebres, asistencia espiritual en

<sup>10</sup> Observación General No. 22, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 18 – Libertad de Pensamiento, de conciencia y de religión, 48º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 7 at 179 (1993).

cárceles y hospitales, los mecanismos de elección de sus representantes y el empleo de un lenguaje especial que identifica a la comunidad.

La enseñanza referida implica también unas manifestaciones propias de las creencias o de la religión, entre éstas la constitución de seminarios, cursos, escuelas religiosas, así como el diseño, publicación y difusión de textos. Este aspecto conlleva la importancia de impartir contenidos específicos sobre la historia de las religiones, de manera imparcial y objetiva, en las escuelas públicas. Con relación a la educación, también se protege la libertad de los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa de acuerdo a sus propias convicciones. Es importante señalar que el espíritu de este derecho fundamental no concibe la educación obligatoria que incluya el adoctrinamiento de una religión o creencia en particular.

El reseñado Comité agrega que ninguna manifestación religiosa puede constituir propaganda o incitación al odio, la violencia o discriminación de género, racial o religiosa. En cuanto a las limitaciones o restricciones a las manifestaciones religiosas, bien por motivos de seguridad, orden, salud, o moral públicos, observa además que el concepto de moral se deriva de tradiciones sociales, filosóficas y religiosas diversas, en virtud de lo cual estas restricciones no pueden basarse en la moral exclusiva de una determinada tradición.

El precitado artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prescribe la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en los siguientes términos:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Si bien el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece la protección sobre los derechos y libertades de pensamiento, conciencia y religión en la misma norma, algunos autores consienten en afirmar que ellos son derechos autónomos de carácter fundamental, que tienen en común un proceso de construcción histórico relacionado con las luchas por la tolerancia y aceptación de otras creencias, la pérdida del poder de la Iglesia a manos del Estado y de la sociedad civil, originariamente en Europa. Un sector de la doctrina española considera que la libertad religiosa es un aspecto de la libertad de pensamiento o ideológica (Souto, 1989, p. 518 y Llamazares, 1989, p. 14), mientras otras posturas afirman

que "la libertad ideológica y la religiosa no son derechos diferentes sino manifestaciones de un único derecho" (González citado por Martín, 1993, p. 65).

Sin embargo, es importante separar los conceptos de manera que en el proceso puedan encontrarse las similitudes y distancias entre uno y otro. La **libertad ideológica o libertad de pensamiento** es definida por el Tribunal Constitucional Español como:

la facultad individual de adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne, y a representar o enjuiciar la realidad según sus personales convicciones, comprende además una dimensión externa de *agere licere*, con arreglo a las propias ideas sin sufrir por ello sanción o demérito, ni padecer la compulsión o la injerencia de los poderes públicos (Sentencia 120 del 27 de junio de 1990).

La libertad ideológica en el sistema español, inspirado en la Ley Fundamental de Bonn (1949), es entendida como el derecho de la persona a tener su propio sistema o concepción explicativa del hombre, el mundo y la vida, es decir, una personal cosmovisión (Martín, s.f, p. 8) y formación de un sistema de ideas propio que representa una concepción global del mundo.

Por su parte, la **Libertad de Conciencia** hace referencia al reducto íntimo del hombre en donde se hallan sus convicciones más profundas. Ellas pueden ser religiosas, ideológicas, filosóficas o políticas y están fuera del alcance de cualquier poder público (González, 2014). En esta línea argumentativa las libertades de religión y conciencia hacen parte de la esfera íntima de los seres humanos, y aunque son distintas están estrechamente vinculadas. Mientras la libertad religiosa hace referencia a la fe y la libertad ideológica a la verdad, la libertad de conciencia remite a la actuación conforme al bien (Hervada, 1984, pp. 32-33).

Frente a este derecho fundamental, la Corte Constitucional colombiana en desarrollo jurisprudencial ha expuesto lo siguiente:

La libertad de conciencia se ha distinguido de las libertades de pensamiento y opinión y también de la libertad religiosa, considerándose que ella no tiene por objeto un sistema de ideas, ni tampoco la protección de una determinada forma de relación con Dios, sino la facultad del entendimiento de formular juicios prácticos en relación con lo que resulta ser una acción correcta frente a una situación concreta que se presenta de facto. En otras palabras,

es la facultad de discernir entre lo que resulta ser el bien o el mal moral, pero en relación con lo que concretamente, en determinada situación, debemos hacer o no hacer. Por eso se dice que es un conocimiento práctico.

A diferencia de la libertad de opinión o de la libertad religiosa, la de conciencia, se ejerce siempre de modo individual. En cuanto prerrogativa personal, la conciencia a la que se refiere la libertad constitucionalmente protegida, es la conciencia subjetiva, o mejor, la regla subjetiva de moralidad. No se trata pues de la protección abstracta de un sistema moral determinado, o de una regla objetiva de moralidad. De hecho, no hace falta estar inscrito en una religión determinada, ni en un sistema filosófico, humanístico o político, para emitir juicios prácticos en torno de lo que es correcto o incorrecto. Las personas ateas o las agnósticas, igualmente lo hacen, toda vez que la libertad de conciencia es un predicado necesario de la dimensión libre propia de la naturaleza humana, que le permite al hombre autodeterminarse conforme a sus finalidades racionales.

La doctrina y también la jurisprudencia, han entendido que las libertades de pensamiento y opinión, religiosa y de conciencia, abarcan una doble significación: de una parte, implican la autonomía jurídica del individuo en lo referente al objeto jurídico que amparan, y de otro, conllevan la inmunidad de coacción con respecto al mismo objeto. Es decir, se reconoce la facultad de autodeterminarse que compete a cada individuo en estos aspectos y también se impide el que el individuo sea forzado o presionado en torno a ellos” (Sentencia C-616 de 1997 M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

Como expresión más genuina y representativa de la libertad de conciencia, la **Objeción de Conciencia** ha sido materia de abordajes recientes por parte del mismo tribunal:

La objeción de conciencia ha sido definida como la resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito, por lo que la objeción de conciencia supone la presencia de una discrepancia entre la norma jurídica y alguna norma moral, siendo reconocido por la Corte que es posible objetar por razones de conciencia deberes laborales, educativos y profesionales, y con referentes normativos del bloque de constitucionalidad como el que se desprende de la Resolución 1989/59 adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre objeción de conciencia al servicio militar, la cual se da, entre otras,

“reconociendo el derecho de toda persona a tener objeciones de conciencia al servicio militar como ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión enunciado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (Sentencia C-728 de 2009).

Otra de las manifestaciones que gravita en torno a las libertades de religión y de conciencia es el **Ateísmo**. En un sentido genérico, el ateísmo niega la existencia de Dios, sin embargo, se identifican en su interior varias corrientes, dependiendo de las concepciones de divinidad y las religiones existentes, bien politeístas o monoteístas. Los Deístas, quienes se consideran una variante del ateísmo, conciben la existencia de un Dios creador del universo, los hombres y el mundo, pero dejando su funcionamiento al dictamen de sus propias leyes naturales; el deísmo desconoce las manifestaciones sobrenaturales y las revelaciones.

Otra de las corrientes ateístas es la encarnada por el existencialismo ateo, que tiene en Jean Paul Sartre su más eminente representante. Partiendo de la premisa “la existencia precede a la esencia”, el existencialismo de Sartre declara que la no existencia de Dios supone la existencia de un ser (el hombre) que surge en el mundo, que se define a sí mismo puesto que él se hace y concibe según su propio designio. El hombre es el principio constitutivo de este enfoque.

El Estado porta la obligación irrenunciable de respetar, promover, garantizar y defender las libertades de religión, culto y conciencia, en consecuencia, éste asume una postura independiente apartándose de lo que corresponde al fuero íntimo o proceso de construcción interno en cada ser humano, imponiéndose solamente en la búsqueda de la igualdad jurídica entre las confesiones y evitando que las manifestaciones de la fe contravengan la seguridad, salud o moral públicas. La relación entre el Estado y el derecho a la libertad religiosa debe responder a los principios de: inmunidad de coacción, no concurrencia y promoción de la libertad religiosa.

**La inmunidad de coacción** se traduce en la absoluta incompetencia del Estado para imponer, coaccionar o sustituir al ciudadano en el acto de fe y en las diferentes manifestaciones individuales o colectivas. Sin embargo, no se trata sólo de respetar el ámbito de inmunidad personal, sino de reconocer que ciertas decisiones son radicalmente individuales, y que, por tanto, el Estado se presenta como un sujeto incompetente para adoptar determinadas opciones e incluso para formular sobre ellas un juicio de valor (Saldaña, 1998, p. 473).

La **no concurrencia**, por su parte, implica que el Estado no puede coaccionar, reprimir, sustituir o coartar el ejercicio de la fe religiosa. Finalmente, la **promoción de la libertad religiosa** implica una postura del Estado más allá del carácter formal del derecho, éste debe además encontrar los mecanismos para difundir y promover los derechos y libertades.

Algunos autores afirman que, por su naturaleza orientada a lo sagrado, trascendental, a lo divino y sobrenatural, la libertad religiosa escapa a cualquier posibilidad de aprehensión y tratamiento jurídico por parte del Estado. De la misma manera un Estado neutral, aconfesional o laico, debe ser incompetente frente a cualquier tipo de intervención que pueda estar limitando dichas libertades, renunciando a cualquier adoctrinamiento, enseñanza oficial de una religión o a la imposición de restricciones para su ejercicio. Ello también significa que el Estado no puede regir lo que corresponde a la esfera íntima del ser humano, quien tiene la potestad para construir autónomamente sus convicciones personales.

Como referente imprescindible de la política pública, es necesario profundizar los aspectos que establecen una correlación entre dos libertades fundamentales como son las de religión y conciencia. Sus desarrollos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos advierten una estrecha vinculación, no exenta de dificultades en su interpretación, por los elementos antropológicos, psicológicos y sociales que implican su estudio.

La afinidad existente entre las libertades de religión y de conciencia es desarrollada primordialmente por el derecho eclesial español. Para Hervada los eclesiasticistas, tratadistas de derechos humanos y constitucionalistas han confundido las libertades de pensamiento, religión y conciencia; y afirma que la libertad de conciencia es consecuencial a las libertades de religión y de pensamiento, en medio de un paralelismo, distinción y relacionamiento entre ellas, por cuanto cada derecho es autónomo y no confundible con el otro. (Hervada, 1992, p.100)

La convergencia entre estas libertades -asegura el autor-, es la misma interacción que se presenta para todos los derechos humanos, pues centra su argumento en la defensa de la dignidad como la raíz común, cuyo fundamento parte de la naturaleza humana y de derechos inherentes a ella por el simple hecho de ser persona.

Hervada afirma la existencia de una conexidad entre las libertades fundamentales en comento, cuyos estatutos jurídicos, si bien distintos, entrañan un mismo grado de libertad. Refiere en su análisis una profusión

de conceptos utilizados en instrumentos internacionales tales como ideología, convicción, creencia, fe y religión, de los cuales hace una revisión exhaustiva. (1992, p. 103).

Así las cosas, encuentra en la libertad de pensamiento un sistema de ideas que se profesan o distintas cosmovisiones del mundo. También alude a un sistema de creencias, entendidas en un concepto más amplio, con connotaciones sociales, políticas, religiosas y morales, de donde se deriva una línea de sinonimias "creencia- convicción- ideología" y otra línea de "creencia-fe-religión". Por su parte, la libertad de religión comprende un sistema de creencias, dogmas y sentimientos de veneración acerca de una divinidad, que involucra necesariamente una relación con un ser superior, radical diferencia entre religión e ideología. Respecto a la libertad de conciencia propone como sinónimo el *discernimiento*, esto es, una acción concreta de la conducta, el deber ser, el bien o el mal moral de las acciones, lo que debo hacer o evitar, caso en el cual "*no se está ante un sistema de ideas o de creencias, sino de un conocimiento práctico*". (Hervada, 1992, p. 110).

De lo anterior -observa Hervada-, la conciencia es un juicio práctico de la moralidad que depende de los juicios, ideas, valoraciones, normas morales que propone la libertad de religión y la libertad de pensamiento o ideológica. Concluye entonces el autor que "*El pensamiento - creencia, convicción, opinión, es el sistema de ideas profesado por una persona, individual o colectivamente; la religión es la relación con Dios; y la conciencia es el juicio práctico de la moralidad*" (1992. pp.109-110).

Hervada sostiene entonces la existencia de una conexidad entre dichas libertades, primero por ser expresión de la dignidad humana, segundo porque ellas constituyen lo mas central y nuclear de la persona, es decir, ese "*santuario de su interioridad espiritual*". Sin embargo, los bienes jurídicos que protege cada derecho los hacen distinguibles: en la libertad de pensamiento es un sistema de creencias con una moral racional o amparada en la razón; en la libertad de religión lo es la relación vital del hombre con una divinidad, amparada en la fe donde se niega el conocimiento racional de Dios; mientras la libertad de conciencia se convierte en una vertiente práctica de la libertad de religión y de pensamiento, el bien y el mal moral en la práctica o la actuación en conciencia (1992, pp. 112-119).

Empero, la vertiente práctica de la libertad de conciencia no se limita exclusivamente al campo moral, sino también al campo de las convicciones políticas, filosóficas, religiosas, sociales entre otras. De allí se advierte que la libertad de conciencia solo pueda reclamarse de manera individual y no colectiva.

Para Salcedo (1997) la libertad de pensamiento *"es aquella que permite a la persona dar una respuesta autónoma a los interrogantes de su vida personal y social"* (...) *"la libertad religiosa es aquella que se manifiesta en la respuesta personal a la cuestión de la trascendencia del individuo"*; con relación a la libertad de conciencia afirma que *"la conciencia permite al individuo emitir un dictamen o juicio de la razón práctica acerca de la moralidad de una acción"*. Este último derecho -advierte-, nace al mundo jurídico en la medida en que se exterioriza o se confronta en el mundo exterior con un imperativo jurídico (pp. 96-97).

La libertad de conciencia es el juicio moral de una persona ante una situación en concreto, aplicando unas reglas de moralidad del sistema adoptado, que pueden provenir de la libertad ideológica, religiosa o de ambas. Afirma que la efectividad de las libertades de pensamiento y de religión se expresa mientras esté garantizada la libertad de conciencia (Salcedo, 1997, p. 97).

Una doctrina moderna eclesiástica relaciona íntimamente la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad religiosa por considerar que comparten una raíz común: se trata de derechos fundamentales que definen al ser humano como persona a través de facultades supremas como la inteligencia y la voluntad, *"donde el hombre ejerce los actos más específicamente personales y los proyecta con su conducta al mundo de los demás y de la sociedad"*. (Viladrich citado en Acuña, 2002, pp. 60-61)

Para otros autores la libertad de conciencia es un derecho que incluye a las demás libertades,

la libertad de conciencia es una realidad autónoma, y más amplia que las otras libertades señaladas, ya que la conciencia es el "conjunto de imperativos personales de conducta - de raíz religiosa o no - que poseen para el individuo un rango superior a cualquier otra instancia normativa. (Martínez, 1992, p. 202)

No deben desconocerse las importantes transformaciones históricas de la humanidad a partir de los conflictos de religiones del siglo XVII, cuya consecuencia es la consagración de la libertad de conciencia y de religión como una realidad íntima y personal del hombre que no admite intervención del Estado. El logro de dichas libertades es el resultado de siglos de sometimiento de la voluntad de los individuos por estados autoritarios, dominación que también se ejerció sobre la tierra, el trabajo y los tributos.



Vista desde el aspecto fáctico, la libertad de religión como derecho fundamental comporta unas expresiones materiales a partir de las ceremonias rituales, la observancia y la enseñanza acordes a las creencias religiosas, de manera que se configure el pleno ejercicio del derecho, tanto de libertad religiosa como de culto. De otra parte, las diferentes doctrinas, los textos de doctrina y el sistema moral fijado por el sujeto dan lugar a la libertad de conciencia. Sin embargo, cuando dicho sistema de valores y creencias se encuentra ante una situación particular en el ámbito educativo, social, público que está en contradicción con ese sistema de creencias, entra en aplicación la objeción de conciencia también como derecho fundamental.

La religión no se ciñe exclusivamente por un cuerpo de doctrina que señala la manera de alcanzar bienes espirituales como la salvación o la vida eterna, las religiones en su totalidad incorporan sistemas morales que orientan las decisiones individuales sobre la licitud o ilicitud de los actos. Así, por ejemplo, las religiones consideran que la vida e integridad de los niños debe ser protegida y defendida como un precepto que, más allá de estar consignado en tratados de derechos humanos, surge de las convicciones más profundas de los individuos sustentadas en convicciones religiosas y que, por tanto, se hayan indiscutiblemente vinculadas a la libertad de religión-conciencia y en su aplicación práctica mediante la objeción de conciencia.

### ***c) Desarrollos jurisprudenciales recientes sobre libertad de religión y objeción de conciencia***

Entre las sentencias de la Corte Constitucional que refieren la estrecha vinculación entre la libertad de religión y la libertad y objeción de conciencia, pueden destacarse:

<b>Sentencia</b>	T-409/1992
<b>Magistrado Ponente</b>	JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
<p><b>Derechos Conculcados</b></p> <p>LIBERTAD DE CONCIENCIA, LIBERTAD DE RELIGIÓN Y DERECHO A LA EDUCACIÓN</p> <p>Los demandantes son miembros de la IGLESIA DE “DIOS ES AMOR” DE LOS HERMANOS MENONITAS, su creencia religiosa y base teológica se fundamenta en un profundo respeto al prójimo, en el amor a los enemigos y en el cumplimiento al mandato divino de no matar.</p> <p>Por lo que expone el accionante, rechazan pertenecer a organismos creados para imponer la fuerza, monopolizar la violencia, eliminar o intimidar al enemigo, o para ejercer la “acción legal” de matar a un ser humano.</p>	
<p><b>Decisión de la Corte</b></p> <p>Plantea un conflicto entre libertad individual y un poder público. Privilegia los intereses de una colectividad sobre los intereses particulares. Resalta la obligatoriedad del servicio militar por considerarla un deber para la defensa de la soberanía.</p> <p>Si el Estado ofrece beneficios, los ciudadanos deben hacer contribuciones al interés colectivo. No hay norma que fije las instrucciones para el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia.</p> <p>No ampara el derecho.</p>	

<b>Sentencia</b>	T-421/1992
<b>Magistrado Ponente</b>	ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
<b>Derechos Conculcados</b>  LIBERTAD DE CONCIENCIA, CULTO Y DERECHO A ESCOGER EDUCACIÓN  Padres de un menor matriculado en institución educativa pública, solicitan al establecimiento educativo que no se imparta a su hijo educación religiosa, ni se le someta a los rituales propios de la religión que profesan en dicha escuela, por cuanto ellos como padres no profesan religión alguna. Petición que no fue atendida por las directivas de la escuela.	
<b>Decisión de la Corte</b>  La libertad de conciencia implica a la libertad de religión. Los docentes cumplen una función en el respeto de los derechos humanos, en la paz y en la democracia, para la mejor formación moral, intelectual de la niñez.  Ampara el derecho del menor a no recibir educación religiosa en institución pública.	

<b>Sentencia</b>	T-547/1993
<b>Magistrado Ponente</b>	ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO

### **Derechos Conculcados**

LIBERTAD DE CONCIENCIA, LIBERTAD DE RELIGIÓN Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Ciudadano presenta acción de tutela contra la Policía Judicial del Departamento de Policía de la Guajira, por considerar vulnerado su derecho a la libertad de conciencia. El accionante se acerca a las oficinas de la policía judicial para presentar denuncia penal por la desaparición de su hija, un oficial le recuerda su obligación de prestar juramento para recibirle la respectiva denuncia, éste se niega dado que su pertenencia a una iglesia cristiana, le impide prestar cualquier tipo de juramento. El agente se niega a recibir su denuncia.

### **Decisión de la Corte**

El derecho a la libertad de conciencia tiene un doble destinatario: de un lado la persona que pretende actuar conforme a su fuero interno y el deber de los demás de respetarle. No existiría una protección integral en la medida en que no se obligue a las demás personas a respetar las opiniones diferentes.

En el caso particular observa la Corte, existe una relación directa entre el derecho a la libertad de conciencia y el derecho a la libertad religiosa. Afirma la Corporación, "la ratio iuris de la libertad de conciencia es la inmunidad de toda fuerza externa que obligue a actuar contra las propias convicciones y que impida la realización de aquellas acciones que la conciencia ordena sin estorbo o impedimento". En esa fusión conciencia-religión, la Corte formula el siguiente interrogante ¿qué debe entenderse con ese obrar "contra su conciencia", en materia religiosa?

En tal sentido afirma la Corporación, "la dignidad humana, la excelencia del ser persona requiere que la persona actúe libremente según su conciencia, por ello no se le puede impedir, principalmente en materia religiosa, que obre contra su recta conciencia, porque el ejercicio de la religión consiste ante todo en actos voluntarios y libres, por medio de los cuales la persona guía todos sus actos en función de la religión que profese, y por la misma naturaleza del hombre esos actos internos deben externamente manifestarse.

Así pues, la inmunidad de coacción en materia religiosa supone admitir la libertad psicológica, el acto de elección personalísimo, acto suyo con implicaciones morales y jurídicas; pero también el carácter exteriorizable del objeto del derecho a la libertad religiosa".

Ampara los derechos del ciudadano.

<b>Sentencia</b>	C-133/1994
<b>Magistrado Ponente</b>	ANTONIO BARRERA CARBONELL

### Derechos Conculcados

#### DERECHO A LA VIDA, LIBERTAD DE CONCIENCIA

Ciudadano demanda la inconstitucionalidad de un artículo del Código penal que sanciona el aborto. Con los siguientes argumentos: Las No personas no son jurídicamente capaces de derechos ni de obligaciones ni están dotados de representación propia en el derecho, en consecuencia, el aborto o expulsión de vientre materno de las no personas, no puede ser penalizado legalmente. Al garantizar la libertad de conciencia, la Constitución establece que es un acto potestativo de la mujer determinar si se somete voluntariamente a un aborto, invocando para ello la certidumbre que se origina en las íntimas razones de su propia conciencia. Es a la mujer sin compañero o marido o a la pareja a quienes compete decidir y disponer que el producto de la concepción concluya o no el proceso de gestación hasta llegar a su término.

### Decisión de la Corte

La Corte considera que la vida es el más valioso de los bienes que se reconoce a todo individuo de la especie humana. La vida que la Constitución Política protege, comienza desde el instante de la gestación.

El ejercicio de los derechos dimanantes de estas libertades tiene como límites el derecho de los demás a disfrutar de sus libertades públicas y derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la vida del nasciturus.

Declara exequible la norma.

<b>Sentencia</b>	C-511/1994
<b>Magistrado Ponente</b>	FABIO MORON DIAZ
<p><b>Derechos Conculcados</b></p> <p>LIBERTAD Y OBJECCION DE CONCIENCIA</p> <p>Demandas de inconstitucionalidad contra artículos de la ley de servicio militar.</p> <p>La ley omitió los mandatos superiores sobre la prevalencia del interés general, la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, el principio de la igualdad, el principio de la intimidad, la libertad de conciencia, el derecho a la paz, la protección y formación integral del adolescente.</p>	
<p><b>Decisión de la Corte</b></p> <p>Las fuerzas armadas tienen como fin primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y el aseguramiento del orden colectivo, para que los colombianos vivan en paz. Afirma la impracticabilidad de la figura de objeción de conciencia por no encontrarse en norma vigente.</p> <p>Declara exequible la norma.</p>	

<b>Sentencia</b>	T-588/1998
<b>Magistrado Ponente</b>	EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
<b>Derechos Conculcados</b>	
<p>LIBERTAD RELIGIOSA, LIBERTAD Y OBJECCIÓN DE CONCIENCIA</p> <p>Padres de menores de edad pertenecientes a institución educativa pública, interponen acción de tutela contra el colegio por considerar que el profesor de la Cátedra de Educación Física Recreacional y Deportiva, impone la realización de danzas a sus hijos, desconociendo sus creencias religiosas por pertenecer a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Los estudiantes no pueden matricularse por faltar la nivelación de dicha cátedra.</p>	
<b>Decisión de la Corte</b>	
<p>La libertad religiosa, garantizada por la Constitución, no se detiene en la asunción de un determinado credo, sino que se extiende a los actos externos en los que éste se manifiesta. Particularmente, para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias de su religión, reviste una importancia capital, hasta el punto de que ella es fuente de complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de que por cualquier razón ella no se logre alcanzar. Si esto es así sería incongruente que el ordenamiento de una parte garantizase la libertad religiosa, pero, de otra parte, se negase a proteger las manifestaciones más valiosas de la experiencia religiosa, como la relativa a la aspiración de coherencia a la que apunta el creyente entre lo que profesa y lo que practica. Este elemento que pertenece al núcleo esencial de la libertad religiosa, define igualmente una facultad que es central a la libertad de conciencia, que refuerza si se quiere aún más la defensa constitucional de los modos de vida que sean la expresión cabal de las convicciones personales más arraigadas.</p> <p>Los datos que pueden inferirse del expediente, demuestran que la objeción que oponen los demandantes a la práctica escolar se origina en profundas convicciones religiosas y que ellas se esgrimen de manera seria y no acomodaticia.</p> <p>La libertad religiosa puede, en principio, amparar a los estudiantes de abstenerse de ejecutar danzas o ritmos que en su criterio resultan pecaminosas. La objeción que se formule en este sentido debe expresarse de manera seria y sincera y no como pretexto para obviar una carga social general o un mandato legítimo.</p> <p>Corte ampara la objeción de conciencia de los padres.</p>	

<b>Sentencia</b>	T-345/2002
<b>Magistrado Ponente</b>	MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
<p><b>Derechos Conculcados</b></p> <p>LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD LIBERTAD DE RELIGION Y CULTO Y LIBERTAD DE CONCIENCIA</p> <p>Estudiante que interpone acción de tutela contra una universidad por considerar que son vulnerados sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, a la libertad de cultos y religión al obligarlo a tomar un "seminario de ética", cuyo contenido es estrictamente religioso.</p>	
<p><b>Decisión de la Corte</b></p> <p>A la luz de los artículos 4 y 6 de la Ley Estatutaria 113 de 1994, es claro que las personas, en ejercicio de sus libertades, tienen entre otras garantías el derecho "rehusarse a recibir educación religiosa" así como el derecho a no ser "obligados a actuar contra su conciencia" o "ser obligado a revelar sus convicciones".</p> <p>En Colombia el derecho a no creer y a no revelar las convicciones más íntimas y profundas es tan sagrado como el derecho a creer, a profesar las creencias y a divulgar las convicciones.</p> <p>Una universidad no puede, pretender, mediante una clase de ética: (i) conducir a que una persona, contra su voluntad, cambie sus convicciones religiosas; (ii) calificar las creencias religiosas de los estudiantes; ni (iii) presionar a los estudiantes a revelar "sus convicciones o creencias"</p> <p>Para el creyente la coherencia de su vida personal con las creencias religiosas es fundamental, ella es fuente de complacencia o de inmenso sufrimiento.</p> <p>Ampara la libertad de conciencia.</p>	



<b>Sentencia</b>	T-332/2004
<b>Magistrado Ponente</b>	JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
<b>Derechos Conculcados</b>  LIBERTAD DE CONCIENCIA, LIBERTAD DE RELIGION Un servidor público del Ministerio de Defensa manifiesta que el comandante de la Novena Brigada da orden a todos los civiles de marchar, hacer formación, cantar los himnos y asistir a reuniones religiosas en el cantón, sin respetar el credo o religión a la cual pertenezcan, so pena de ser sancionados con anotación en el folio de hoja de vida.	
<b>Decisión de la Corte</b>  Es la conciencia la que da sentido y valor a los actos de la persona; la que permite al individuo distinguir racionalmente la licitud o ilicitud de sus actuaciones, de conformidad con los parámetros que guían el obrar humano. El derecho a la libertad de conciencia consagrado constitucionalmente como un derecho fundamental de aplicación inmediata, es el que tiene toda persona para actuar en consideración a sus propios parámetros de conducta, sin que pueda imponérsele actuaciones que estén en contra de su razón.  No es lícito ni admisible invocar un juicio moral de la razón, para hacer daño a otro, para ir más allá de los linderos normales del ejercicio de la libertad, la exigencia del cumplimiento de un deber hacia la patria no significa vulneración o ataque a la libertad de conciencia.  No se ampara el derecho.	

<b>Sentencia</b>	C-355/2006
<b>Magistrado Ponente</b>	JAIME ARAUJO RENTERIA Y CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
<p><b>Derechos Conculcados</b></p> <p>DERECHO A LA VIDA, DERECHOS DE LA MUJER, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, DIGNIDAD HUMANA, DERECHO A LA SALUD, OBJECCIÓN DE CONCIENCIA, LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.</p> <p>Acción pública de inconstitucionalidad contra artículos del Código penal sobre el aborto.</p>	
<p><b>Decisión de la Corte</b></p> <p>La Corte observa varios postulados, el primero de ellos y el más significativo en esta sentencia, es que la vida no tiene el carácter de un valor o de un derecho de carácter absoluto y debe ser ponderada con los otros valores, principios y derechos constitucionales.</p> <p>Considera también que si bien el ordenamiento jurídico, otorga protección al nasciturus, no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona humana. Tanto es ello así, que en la mayor parte de las legislaciones es mayor la sanción penal para el infanticidio o el homicidio que para el aborto. Es decir, el bien jurídico tutelado no es idéntico en estos casos y, por ello, la trascendencia jurídica de la ofensa social determina un grado de reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta.</p> <p>Se declarará por lo tanto ajustado a la Constitución el artículo 122 del Código Penal en el entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico;</li> <li>b) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico;</li> <li>c) Cuando el embarazo sea resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.</li> </ul>	

<b>Sentencia</b>	C-728/2009
<b>Magistrado Ponente</b>	GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELLO
<b>Derechos Conculcados</b>  OBJECCIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR  Ciudadanos presentan acción de inconstitucionalidad contra el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, por considerar que viola los derechos constitucionales a la igualdad, a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos.	
<b>Decisión de la Corte</b>  A partir de una lectura armónica de los artículos, 18 y 19 de la Constitución y del bloque de constitucionalidad, es posible concluir que de los mismos sí se desprende la garantía de la objeción de conciencia frente al servicio militar; garantía constitucional a partir de la cual es posible plantear objeciones de conciencia al cumplimiento de distintos deberes jurídicos, pero la ausencia del mismo no comporta la ineficacia del derecho.  La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró que la objeción de conciencia emana de principios y razones de conciencia (incluyendo motivos religiosos, morales, éticos, humanitarios o de índole similar), y como tal, se constituye en el ejercicio legítimo de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Las creencias o convicciones deben ser profundas, fijas y sinceras.  Exhorta al Congreso de la República a regular lo concerniente a la objeción de conciencia, pero advierte que no se puede alegar la falta de desarrollo legal de un derecho fundamental para impedir su tutela.	

<b>Sentencia</b>	T-388/2009
<b>Magistrado Ponente</b>	HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
<p><b>Derechos Conculcados</b></p> <p>OBJECCIÓN DE CONCIENCIA, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS</p> <p>Mujer embarazada cuyo bebé presenta malformación ósea en extremidades superiores e inferiores, mediante junta médica se aconseja la interrupción del embarazo, el médico tratante también recomienda la interrupción, pero solicita a la madre orden de autoridad judicial.</p>	
<p><b>Decisión de la Corte</b></p> <p>Si sólo existe una persona profesional de la medicina que pueda practicar la interrupción voluntaria del embarazo bajo las excepciones para práctica de aborto, entonces deberá practicarlo – con independencia de si se trata de un médico adscrito a una entidad hospitalaria privada o pública, confesional o laica. En esta hipótesis la restricción a la libertad de conciencia del médico es totalmente legítima –en tanto proporcional y razonable–, pues conlleva la protección [entre otros] del derecho a la vida y la salud de la mujer embarazada.</p> <p>En caso de que el personal médico que participará directamente en la intervención conducente a interrumpir el embarazo desee manifestar su objeción de conciencia respecto del procedimiento encomendado deberá hacerlo por escrito expresando: (i) Las razones por las cuales está contra sus más íntimas convicciones la realización del procedimiento tendente a interrumpir el embarazo en ese específico caso, para lo cual no servirán formatos generales de tipo colectivo, ni aquellos que realice persona distinta a quien ejerce la objeción de conciencia; ii) El profesional médico al cual remite a la paciente que necesita ser atendida.</p>	

La objeción de conciencia es un derecho que se garantiza de modo extenso en el campo privado – cuando no está de por medio el desconocimiento de derechos de terceras personas -. No obstante, queda excluido alegarla cuando se ostenta la calidad de autoridad pública. Las autoridades judiciales no pueden alegar motivos morales para abstenerse de tramitar y decidir un asunto puesto a su consideración, ello es denegación injustificada de justicia y obstáculo arbitrario en el acceso a la administración de justicia, podría dar lugar al delito de prevaricato por acción, así como a faltas de orden disciplinario.

Las entidades prestadoras del servicio de salud – sean ellas particulares o estatales, laicas o confesionales – deben abstenerse de exigir a las mujeres que optan por interrumpir su embarazo bajo los supuestos previstos en la sentencia C-355 de 2006 un previo permiso judicial.

La objeción de conciencia no es un derecho absoluto y su ejercicio tiene como límite la propia Constitución en cuanto consagra los derechos fundamentales, cuya titularidad también ostentan las mujeres, y por tanto no pueden ser desconocidos.

Ampara los derechos a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud en conexión con la vida de la ciudadana.

<b>Sentencia</b>	T- 507/2016
<b>Magistrado Ponente</b>	ALBERTO ROJAS RIOS
<p><b>Derechos Conculcados</b></p> <p>LIBERTAD DE CONCIENCIA, LIBERTAD DE RELIGIÓN Y DIGNIDAD HUMANA</p> <p>Joven perteneciente a la Iglesia Católica a quien deben amputarle la pierna izquierda, debido a un cáncer de hueso. El accionante considera por sus creencias religiosas que la parte de su cuerpo debe ser sepultada en campo santo, donde tiene la certeza que en la resurrección su cuerpo repose completo, por ello solicita el miembro amputado al hospital.</p> <p>Requiere a la institución de salud, la pierna amputada con el fin de efectuar un proceso de plastinación y garantizar la conservación de material biológico sin riesgo biológico para la comunidad.</p>	
<p><b>Decisión de la Corte</b></p> <p>La razón de ser de las normas es el cumplimiento de su finalidad, la cual debe obedecer a la dignificación del ser humano. La comprensión que tiene el accionante sobre la vida debe ser respetada por el ordenamiento legal.</p> <p>Declara la carencia de objeto por daño consumado. Advierte a EPS que usuarios pueden objetar conciencia sobre disposición final de residuos anatomopatológicos, solicita a la EPS pedir disculpas en ceremonia pública al accionante.</p>	

<b>Sentencia</b>	T-165/2013
<b>Magistrado Ponente</b>	LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
<b>Derechos Conculcados</b> <p>DERECHO A LA SALUD, LIBERTAD DE CONCIENCIA, LIBERTAD DE CULTO, PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD CON LAS MADRES DURANTE EMBARAZO, PARTO Y POST PARTO.</p> <p>Mujer de escasos recursos quien reside en el Municipio de Zulia, con embarazo gemelar y con síndrome de transfusión gemelo-gemelo, para tratamiento se solicita traslado a Bucaramanga, ciudad donde los gemelos fallecen.</p> <p>La EPS autoriza el traslado de los cadáveres a El Zulia, de manera que la accionante pueda dar sepultura a sus bebés según sus convicciones religiosas, sin embargo, no cuenta con los recursos para llevar a cabo el traslado en las condiciones sanitarias que se requieren.</p>	
<b>Decisión de la Corte</b> <p>La muerte también ocupa un lugar central en todas las religiones y cultos puesto que su cuerpo doctrinal y espiritual involucra una experiencia de trascendencia y de divinidad.</p> <p>Teniendo en cuenta que la Constitución protege el derecho de los creyentes a ejercer su culto de forma pública y sostenida y a desarrollar todos los aspectos de su vida conforme a dichas creencias, debe entenderse entonces que la Carta respeta y garantiza el derecho a que se practiquen y vivencien las formas rituales para la disposición de los cadáveres que sean inherentes a la actitud religiosa. No hacerlo, es un desconocimiento grave del derecho de las personas a obrar conforme a sus más íntimas convicciones.</p> <p>Ampara el derecho de la madre a dar cristiana sepultura a los gemelos, ordena a Alcalde de El Zulia para efectuar el traslado de los cadáveres.</p>	

<b>Sentencia</b>	SU-108/2016
<b>Magistrado Ponente</b>	ALBERTO ROJAS RÍOS
<p><b>Derechos Conculcados</b></p> <p>LIBERTAD Y OBJECCIÓN DE CONCIENCIA.</p> <p>Joven objetor de conciencia al servicio militar, perteneciente al movimiento Mira Juventudes, expone convicciones religiosas, morales, éticas, ideológicas y políticas por tanto una vocación pacifista que le impiden portar armas.</p> <p>Joven perteneciente a la Iglesia Pentecostal Unida, objetor de conciencia con ocasión de sus creencias religiosas que le impiden empuñar armas o desarrollar cualquier otro acto de violencia. Adujo que, al momento de ser reclutado, se encontraba adelantando estudios para acceder al cargo de pastor.</p>	
<p><b>Decisión de la Corte</b></p> <p>La Corte expone lo siguiente: Tres prerrogativas nacen del derecho a la libertad de conciencia son: (i) nadie podrá ser objeto ni de acoso ni de persecución en razón de sus convicciones o creencias; (ii) ninguna persona estará obligada a revelar sus convicciones y (iii) nadie será obligado a actuar contra su conciencia.</p> <p>Es un problema de calidad democrática y respeto a los derechos individuales básicos: cuando el Estado admite la objeción de conciencia de un particular. La libertad de conciencia ha sido entendida como un elemento indispensable en una sociedad democrática participativa y pluralista, que reconoce la necesidad de la autorrealización del individuo y la garantía de la dignidad humana, implica un mandato de tolerancia, es decir, las facultades de pensar y obrar según la conciencia individual.</p> <p>En la sentencia T-409 de 1992, la Corte Constitucional determinó que la libertad de conciencia consistente en “la facultad que tiene una persona para actuar en determinado sentido, o para abstenerse de hacerlo, se ve determinada en grado sumo por sus convicciones, por su propia ideología, por su manera de concebir el mundo”</p>	



C-616 de 1997, se estableció que la libertad de conciencia debía entenderse como “el propio discernimiento sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Es decir, se trataba de conciencia moral”.

T-332 de 2004, la Corte consideró que la libertad de conciencia es un derecho fundamental de aplicación inmediata, que “tiene toda persona para actuar en consideración a sus propios parámetros de conducta, sin que pueda imponérsele actuaciones que estén en contra de su razón”

T-388 de 2009 se consideró que esta fórmula pluralista se manifiesta en tres dimensiones: (i) la diversidad que se admite y promueve (art. 7º C.P.); (ii) las distintas aspiraciones y valoraciones que se aprecian de modo positivo, de manera especial, la libertad religiosa, de conciencia y pensamiento, así como la libertad de expresión y (iii) los cauces jurídicos, políticos y sociales que servirán para dirimir los posibles conflictos que se presenten en virtud de las diferentes concepciones.

La Corte se refiere a la relación existente entre el derecho fundamental a la libertad de conciencia con otros derechos como la libertad religiosa, de pensamiento y de expresión así por ejemplo en Sentencia T-026 de 2005 la Corporación explicó que “para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias de su religión, reviste una importancia medular, en tanto muchas veces ella determina los proyectos de vida personal”.

T-823 de 2002, consideró que existía una relación entre la libertad de conciencia y la libertad religiosa, afirmando que “el hombre como un ser proyectivo, estimativo y temporal ajusta su conducta a los cánones de una determinada religión en aras de obtener la satisfacción de una vida plena, trascendente y espiritual.” Agregó que es deber del Estado “asegurar que todos los creyentes tengan la libertad de actuar según sus propias convicciones y de prohibir aquellas coacciones o impedimentos que restrinjan el compromiso asumido por ellos de conducirse según lo que profesan.”.

## 2.10 Análisis de Actores

CATEGORÍA	GRUPOS O ACTORES INVOLUCRADOS	DESCRIPCIÓN. ¿Quién es?	INTERÉS	RAZONES	RECURSOS
GRUPOS NO BENEFICIARIOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA	<b>Grupos de Ateos y Agnósticos</b>	<p>El ateísmo es aquel que niega la existencia de Dios. Se evidencian varias corrientes del ateísmo, dependiendo de las concepciones de Dios y de las religiones existentes, ello consiste en afirmar que se desconoce la existencia de dioses tratándose de las religiones politeístas o de Dios para las religiones monotheístas. El agnosticismo por su parte, es considerado una postura filosófica que niega un reconocimiento de lo intangible, lo trascendente. También se plantea como un criterio de análisis de donde se advierte la imposibilidad de optar por una creencia o idea religiosa, por no existir suficientes evidencias o argumentos para decidir por alguna de las creencias existentes.</p>	<p>Bogotá cuenta con algunas organizaciones de ateos tales como: Corporación Bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo, que propone una idea de Estado laico, no imposición de ideas religiosas en el espacio público. También existe la Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá, que está en abierta oposición a la intromisión de las religiones en las libertades individuales. Por su parte el art. 2º de la Ley 133 de 1994 que desarrolla la libertad religiosa en Colombia, advierte que si bien ninguna Iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal, el Estado colombiano tampoco es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. La ley Estatutaria no reconoce como religión ni al ateísmo ni al agnosticismo, otros conceptos desarrollados los sitúan dentro del capítulo de las libertades ideológicas o de pensamiento.</p>	<p>La Ley 133 de 1994 no reconoce a estos grupos como religión, ello implica que la promoción de sus derechos debe adelantarse con otro tipo de estrategias. Consideramos que la reivindicación de sus derechos se invoca no desde la defensa de sus libertades individuales y de pensamiento, sino desde la no interferencia de las Iglesias en el ámbito público.</p>	<p>Sus recursos pueden ser tanto financieros como recurso humano, redes sociales, páginas web.</p>

CATEGORÍA	GRUPOS O ACTORES INVOLUCRADOS	DESCRIPCIÓN. ¿Quién es?	INTERÉS	RAZONES	RECURSOS
GRUPOS NO BENEFICIARIOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA	Corrientes religiosas radicales o el fundamentalismo religioso acompañado de acciones terroristas	<p>El fundamentalismo es aquella corriente religiosa que hace una interpretación intransigente y estricta de los textos sagrados o doctrinas; consideran que el texto de doctrina es la autoridad máxima aún por encima de las leyes humanas. El fundamentalismo islámico, aboga por la estricta interpretación de las leyes coránicas aplicada mediante la guerra santa o "yihad", considera a occidente fuente de corrupción moral, enfatizan en el vestuario de las mujeres musulmanas, el tratamiento de los homosexuales, las restricciones en el consumo del alcohol u otras sustancias psicoactivas, entre otros. El grupo terrorista de naturaleza fundamentalista es el Estado Islámico o Isis. Además de otras organizaciones evangélicas que tienden al fundamentalismo religioso, no necesariamente desde acciones terroristas pero que desde su doctrina impone y limita la conciencia del individuo.</p>	<p>Es importante aclarar que el islam no promueve la violencia ni el terrorismo, su intención no es eliminar, controlar o cercenar las opiniones de los pueblos. Pero en el islam surgen facciones radicales que se extienden por el mundo, en especial exacerbado por las intervenciones militares europea y norteamericana. Aunque existen versiones encontradas sobre la presencia del Estado Islámico en América Latina, algunos internacionalistas y la Subsecretaría de Antiterrorismo del Departamento de Estado de EUA, consideran que estos grupos pueden estar encontrando financiación en América latina a partir del contrabando de organizaciones delincuenciales e incluso de instituciones de caridad. (Periódico Excelsior, 2015)</p>	<p>La política está dirigida a Iglesias, Confesiones Religiosas, Asociaciones de Ministros, sus Federaciones y Confederaciones, en general las iglesias promueven el bien común, la paz, tienen valores universalmente compartidos como la familia, el amor, la solidaridad, la justicia social, aspectos que no se comparten con estos grupos terroristas.</p>	<p>Se financian de actividades ilegales (robo, secuestro, extorsión, impuesto a minorías religiosas y venta de niñas para esclavitud sexual), su financiación también proviene de donantes de países ricos como Arabia Saudita y Qatar. (BBC Mundo, 2015).</p>

CATEGORÍA	GRUPOS O ACTORES INVOLUCRADOS	DESCRIPCIÓN. ¿Quién es?	INTERÉS	RAZONES	RECURSOS
GRUPOS NO BENEFICIARIOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA	Nuevos movimientos religiosos que utilizan técnicas de manipulación y fraude.	Hace referencia a grupos religiosos peligrosos o potencialmente peligrosos para la sociedad. Estos movimientos presentan algunas características tales como: cuentan con estructuras verticales con pocos líderes que toman las decisiones, la información que reciben es revisada y controlada, se aísla a los miembros de sus propias familias, se ejerce la persuasión o coerción para la obtención de dinero, se atenta contra la integridad física y sexual de sus miembros. Enfrentarlos pone en tensión el derecho a la libertad de culto que debe ser garantizado por el Estado.	En Colombia existe una organización denominada Red de Apoyo para Víctimas de Sectas, esta organización advierte que existen sectas en el país que utilizan técnicas de persuasión de manera coercitiva y quienes ofrecen resolver problemas familiares o económicos, pero utilizando la estafa y la manipulación. Se apoyan en un aparente acompañamiento espiritual frente a la vulnerabilidad de las personas a cambio de favores sexuales. Esta organización trabaja con personas víctimas hispanoparlantes en América y Europa y advierte que la secta más peligrosa, se encuentra en Colombia (Revista Semana, 2012).	Si bien existe el riesgo de que sean reconocidas con personería jurídica por parte del Ministerio del Interior. En el país se reconocen casos como el del pastor del Ministerio Apostólico y Profético Salem, señalado por presuntamente abusar de varias de sus feligresas, o el de un pastor de la Iglesia Pentecostés, acusado de liderar una banda criminal en Ginebra (Valle).	Estas Iglesias movilizan recursos fundamentalmente de sus fieles.

CATEGORÍA	GRUPOS O ACTORES INVOLUCRADOS	DESCRIPCIÓN. ¿Quién es?	INTERÉS	RAZONES	RECURSOS
GRUPOS BENEFICIARIOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA	Líderes religiosos, fieles y organizaciones sociales de inspiración religiosa dentro del cristianismo pentecostal, cristianismo evangélico, neopentecostales, protestantismo histórico, iglesia católica y minorías religiosas.	Entidades Religiosas tales como iglesias, confesiones, denominaciones, asociaciones de ministros, federaciones y confederaciones reconocidas por el Estado Colombiano, quienes reivindican su derecho al ejercicio pleno de la libertad religiosa, la libertad y objeción de conciencia por convicciones religiosas.	Su interés con la política pública es la garantía, promoción y respeto de los derechos fundamentales. Los líderes religiosos o representantes de las iglesias, tienden hacia una coherencia estricta entre la praxis y el ethos cultural que persiguen, es decir, intentan vivir de acuerdo a los cánones que predicaban, por ello consideran imperativo el bienestar de la humanidad, mostrando una constante preocupación por el otro. Esta política debe proteger los derechos tanto de los líderes religiosos como de sus fieles.	La vida religiosa involucra la observancia y la práctica religiosa, la enseñanza y el trabajo social, ello se deriva en la importancia que dan a los procesos de construcción de paz desde las familias y que se extiende a lo social y comunitario.	Las iglesias cuentan con autonomía y recursos propios.
	Secretaría Distrital de Gobierno	El Sector Gobierno lidera en el distrito las políticas públicas en materia de Derechos Humanos, protección de los derechos humanos, promoción de deberes y convivencia pacífica.	Brindar garantías en la protección de las libertades de Religión, Culto y Conciencia.		

CATEGORÍA	GRUPOS O ACTORES INVOLUCRADOS	DESCRIPCIÓN. ¿Quién es?	INTERÉS	RAZONES	RECURSOS
GRUPOS BENEFICIARIOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA	Sector Salud, Sector Educación, Sector Integración Social, Sector Mujer, Sector Planeación, Sector Seguridad, Convivencia y Justicia, Sector Gestión Pública, IDPAC, DADEP.	Los sectores de la Administración enunciados tienen competencias en la protección de las libertades fundamentales de la presente política pública.	Se considera relevante los aportes de las iglesias en la construcción de paz y de justicia social en los territorios locales; no solo se trata de la protección de los derechos de los líderes religiosos y fieles, sino también del aporte de las iglesias a los sectores desde su trabajo social.		

Definir el lugar del ateísmo y el agnosticismo en la presente política exige como primera medida una revisión exhaustiva de diversos instrumentos internacionales -Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana de los Derechos Humanos y Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones-, de los que se puede advertir, aun no demarcan con precisión los límites y conjunciones entre las libertades de pensamiento, religión y conciencia.<sup>11</sup> Tampoco la Ley Estatutaria 133 de 1994 o los pronunciamientos de la Corte Constitucional en Colombia precisan enteramente los alcances y conexidades entre dichas libertades. Así las cosas, considerando que la fuente primordial para el desarrollo de los derechos en Colombia se deriva del Derecho Constitucional Español, son algunos de estos estudios los que aportan contenido a este debate.

En la conciencia subyacen aquellos imperativos morales cuyas raíces, religiosas o no, orientan nuestro actuar frente a lo moralmente correcto o incorrecto. En palabras de Hervada (1984):

la libertad de pensamiento se refiere al conocimiento o la relación con la «verdad», la libertad religiosa se refiere al acto de adhesión al credo religioso y la libertad de conciencia, ampara las decisiones adoptadas de acuerdo con el juicio de conciencia. (p. 13)

De allí se infiere que es en el marco de las libertades públicas de donde se desprende la libertad de profesar una religión, como la de no profesarla, caso último que evidentemente no puede entenderse a partir de la libertad de religión, puesto que ella implica, además de un cuerpo de doctrina, unos fieles o seguidores, unos lugares de culto y la creencia en un ser superior que escapa a todo conocimiento científico, elementos primordiales de distinción, cada cual y en conjunto, respecto al ateísmo y el agnosticismo.

Perspectivas como la del catedrático ibérico Isidoro Martín Sánchez aclaran que tanto la libertad ideológica como la libertad de religión ofrecen una visión de la existencia, sin embargo, su diferencia radica en que la visión de la libertad ideológica está soportada en la razón, mientras que la visión de la libertad de religión está cimentada en la fe. De esta manera, el ateísmo corresponde más a una variable de la libertad ideológica, al descartar la creencia en una divinidad, cuyo

<sup>11</sup> La Convención Americana de Derechos Humanos (1969) es el instrumento que mejor se aproxima a cada libertad en particular, estableciendo además una relación estrecha entre la libertad de religión y la libertad de conciencia, por algunas razones ya esbozadas en el marco teórico de la presente política.

carácter inherente prescinde de justificación lógica o científica alguna. Concluyentemente, Martín afirma: "Partiendo de esta base, entendemos que el ateísmo está tutelado en nuestro ordenamiento jurídico [español] por la libertad ideológica, en cuanto que supone una concepción global no religiosa de la existencia." (s.f, p. 9). [Corchetes fuera del original].

Otro tanto debe atenderse del examen de constitucionalidad que se adelantó al proyecto legislativo que da origen a la Ley 133 de 1994, del cual se puede advertir lo siguiente: primero, existe una clara presencia del fenómeno religioso en las sociedades; segundo, la protección e invocación a Dios elevada por el constituyente en la Carta de 1991, válida y legítima la idea de que el Estado Colombiano no es ateo, ni agnóstico ni indiferente a los sentimientos religiosos del pueblo colombiano, aspecto que consideramos parte de la naturaleza y esencia de la ley referida.

El mismo examen de constitucionalidad considera necesario fijar, por tanto, un concepto para la palabra religión, en los siguientes términos:

En este orden de ideas, se tiene que en su acepción más simple, el sentido general de la palabra religión, es el que comprende el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente de oración y el sacrificio para el culto; en efecto, el proyecto que se examina regula el tema de la libertad de cultos, pero en cuanto vinculada a la libertad de religión que por su parte, como se ha visto, comprende un ámbito mayor, pues, no sólo implica y se ocupa del tema del culto, y del de la celebración de los ritos o prácticas o los de la profesión de la religión, sino del reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias y confesiones, el valor especial de sus ritos relacionados con el estado civil de las personas, el alcance y límites de las decisiones de sus órganos internos, las prácticas y la enseñanza, las condiciones para acreditar la idoneidad profesional de sus autoridades y las relaciones con la autoridad civil. El culto de la fe, en sus diversas expresiones encuentra plena libertad para su existencia y desarrollo; se trata de que la libertad de religión garantice el derecho de los individuos a organizar entidades de derecho, que se proyecten en los órdenes que se han destacado (Sentencia C-088 de 1994 Corte Constitucional).

En su valoración frente a la voluntad del legislador, la Corte Constitucional se aproxima a delimitar el contenido esencial y práctico de las libertades de religión y culto, en el cual no pueden asumirse comprendidos el ateísmo y el agnosticismo, puesto que al interior de tales vertientes no se halla la relación con una divinidad o ser sobrenatural a la cual se le rinda



culto, veneración u obediencia, tampoco la instauración de entidades con personería jurídica para el ejercicio de celebraciones cúllicas, el desarrollo de rituales con plenos efectos civiles o la adopción de estructuras de autoridad y órganos internos que rijan el funcionamiento de iglesias u organizaciones basadas en la fe con fundamento en un estatuto o cuerpo doctrinal.

Bajo estos términos, en tanto enfocada a la garantía de las libertades de religión y culto, por un lado, y la libertad de conciencia por motivos religiosos, de otro, la unidad empírica objeto de la presente política pública queda circunscrita al grupo de personas residentes en Bogotá que creen, confiesen o practican una religión o fe, así como a aquellos agentes públicos institucionales responsables de velar por su respeto y protección en la ciudad.

Referencia particular cabe reseñar para las comunidades étnicas. En Colombia se reconocen cuatro grupos étnicos: la población indígena, la población romo gitana, la población raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la población negra o afrocolombiana de la que hacen parte los palenqueros de San Basilio.<sup>12</sup> El último censo de población realizado en el año 2005, arrojó para Bogotá los siguientes resultados: de los 6.778.691 habitantes censados, 96.523 (1,42%) se reconocieron como negro, mulato, afrocolombiano; 15.032 (0,22%) se declararon indígenas; 1.355 (0,02%) raizal de San Andrés y Providencia; 523 (0,01%) ROM y 7 como palanqueros. En total 113.440 (1,67%) personas censadas declararon pertenecer a alguna etnia y 214.922 personas se encuentran sin información (Censo general DANE, 2005).

El trabajo adelantado con los referentes étnicos de comunidades Indígenas, Afro, Rrom, Gitanos, Raizales y Palanqueros a través de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, permite concluir lo siguiente:

- La religión étnica es aquella que está directamente relacionada con un grupo por su identidad étnica, racial o geográfica. Es así como, el judaísmo, hinduismo, o religiones afroamericanas pueden ser consideradas religiones étnicas.
- Colombia, un país con más de ochenta comunidades étnicas, cuenta con religiones autóctonas en las regiones de Guainía, Vaupés, Vichada, Amazonas, Cauca y Putumayo.

<sup>12</sup> De acuerdo con DeObieta (citado en DANE, s.f) "Dos condiciones identifican un grupo étnico: una conciencia étnica (que han de tener los miembros de su especificidad y el deseo consciente de pertenecer a ella), de un lado; y la disposición de elementos materiales que distingan al grupo (características como la lengua, las instituciones políticas y jurídicas, las tradiciones y recuerdos históricos, las creencias religiosas, las costumbres [(folklore)] y la mentalidad o psicología colectiva) que surge como consecuencia de los rasgos compartidos, del otro lado".

- En la ciudad de Bogotá, las comunidades indígenas se hallan vinculadas fundamentalmente a religiones mayoritarias dentro de la línea del cristianismo, es decir, catolicismo y cristianismo evangélico.
- El Distrito ha formulado y adoptado políticas públicas dirigidas a comunidades étnicas.
- En Bogotá las comunidades indígenas, afrodescendientes, Rrom y gitanos realizan prácticas espirituales, no consideradas dentro de la categoría de religión en los términos de la Ley Estatutaria 133 de 1994.

Frente a este último aspecto, la legislación nacional vigente en materia de religión permite dilucidar tres grupos en que se manifiesta la religiosidad de los pueblos indígenas actuales. El primero, determinado según la distancia o cercanía transcultural respecto a la confesionalidad católica. Un segundo grupo que ha adoptado el protestantismo como religión, y el último conformado por quienes se encuentran alejados del cristianismo y siguen prácticas religiosas animistas y chamánicas. Estos últimos no siguen cuerpos doctrinales, no se organizan en una jerarquía eclesiástica ni se entienden a sí mismos como religión, si bien realizan ritos no entran en la categoría de cultos. Por lo anterior, se entienden como prácticas culturales individuales comprendidas dentro del derecho de libertad de expresión, de reunión o los derechos culturales. No así de los derechos de religión y culto, por cuanto no se establecen como una organización religiosa proselitista y redentora.

A diferencia de los pueblos indígenas, las personas que se autoreconocen como negro, mulato, afrocolombiano o palanquero, no practican una religión particular ligada a procesos de transculturación o de origen africano; el mismo fenómeno se presenta para la población gitana. En este aspecto se asimilan al resto de la población. Los raizales por su parte son mayoritariamente protestantes, dado el origen de poblamiento de las islas.

## Sección C

### 2.11 Objetivos de la Política Pública

#### General

Fomentar el respeto por la libertad e igualdad religiosa, de conciencia y culto desde la promoción y apropiación social e institucional de una cultura que reconozca plenamente estos derechos, con el fin de convertir a Bogotá en una ciudad que previene y reduce su vulneración o amenaza, y que afianza la pluralidad religiosa expresada material y simbólicamente en el territorio.

#### • Específicos

- Disminuir factores sociales, culturales e institucionales que alimentan la intolerancia, la exclusión, la persecución y la apología del odio fundados en la religión.
- Garantizar condiciones de igualdad que posibiliten el goce efectivo de los derechos de libertad religiosa, de culto y conciencia en Bogotá.
- Implementar estrategias para fortalecer y articular iniciativas de paz y proyectos sociales provenientes de las comunidades religiosas con organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional e instancias institucionales del orden distrital y nacional.

### 2.12 Principios y enfoques

#### • Principios

*Principio de pluralismo religioso.* Entendido como la coexistencia de las diversas confesiones, creencias y convicciones de fe, incluso para quienes no profesan ninguna de ellas, en un ambiente de apertura, convivencia y colaboración. El principio de pluralismo constituye el conjunto de garantías brindadas por la Administración Distrital para la práctica, el culto y la enseñanza, siempre que al hacerlo se respeten el orden jurídico y los derechos fundamentales de los individuos.

*Principio de libertad religiosa.* Este principio se desarrolla tanto en el ámbito individual como colectivo; individual porque constituye una expresión del fuero interno o conciencia de cada ser humano y colectivo porque es una dimensión comunitaria que conlleva a las libertades de expresión, de asociación y de reunión como declaración material de la fe. El ejercicio de la libertad religiosa confiere el derecho a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, el derecho a que sean respetados en su destinación religiosa y su carácter confesional, el derecho a desarrollar actividades de culto, de educación y de ayuda humanitaria que permitan poner en práctica preceptos inmutables, universales y de orden teológico, ético y moral en la construcción de bienes comunes, frente a una realidad social, económica, política, jurídica y cultural de la ciudad.

*Principio de igualdad religiosa y no discriminación.* Este principio se desarrolla a partir de la igualdad jurídica y material de todas las confesiones religiosas y se manifiesta a través del goce igualitario de la libertad religiosa, de culto y conciencia y del derecho a no ser discriminado o perseguido por motivos religiosos. Por lo tanto, ningún ciudadano o ciudadana del Distrito Capital puede ser excluido o discriminado por sus creencias sin importar la religión que profesa.

*Principio de inmunidad de coacción y autonomía.* La inmunidad de coacción se define como la restricción expresa que recae sobre toda autoridad pública para imponer, coaccionar o sustituir al individuo en la libertad de tener y profesar la religión de su elección o interferir en las decisiones de su conciencia. Se refiere específicamente al respeto frente a la inmunidad personal o fuero interno del individuo, desde donde éste adopta las decisiones que considera mejores para su ideal de existencia y de perfección humana, donde el Estado carece de potestad para inmiscuirse e incluso para formular sobre ellas un juicio de valor.

*Principio de Ciudadanía Democrática.* La ciudadanía democrática reconoce la autonomía del conjunto de los ciudadanos, quienes desde el espacio de lo público reivindican sus derechos, incidiendo y modificando la realidad jurídica y la realidad material con el propósito de mejorar sus condiciones y calidad de vida. Asumidos desde su impronta democrática, los ciudadanos no se encuentran aislados del aparato estatal, preocupados únicamente por sus intereses individuales, pues reconocen la pluralidad, la diversidad y la necesidad de trabajar en consenso y solidariamente por el logro de objetivos comunes.

## • Enfoques

*Enfoque Basado en Derechos Humanos.* Este enfoque considera que el fin último para el desarrollo y el progreso es el ejercicio pleno de los Derechos Humanos. Por lo tanto el Estado deberá tener en cuenta las siguientes premisas: Las personas deben ser consideradas y tratadas como agentes principales de su propio desarrollo; deben implementarse estrategias para el empoderamiento ciudadano y la convivencia pacífica; los programas y proyectos harán especial énfasis en poblaciones vulnerables, excluidas y marginadas; el logro en la reducción de las desigualdades, la inequidad de los ingresos y la desigualdad de capacidades y oportunidades; la identificación de las causas de los problemas sociales y la promoción en el desarrollo de alianzas estratégicas que contribuyan al goce efectivo de los Derechos Humanos.

*Enfoque Participativo de las Mujeres en la Resolución de Conflictos en la Consolidación de la Paz y la Reconciliación.* El destacado papel de las lideresas religiosas en la prevención y resolución de conflictos, la promoción y consolidación de la paz, es de inobjetable importancia y merecido reconocimiento en pie de igualdad. Son las mujeres lideresas religiosas y sus redes quienes desde su capacidad organizativa y creativa proponen escenarios para el diálogo, la concertación y la construcción de tejido social, tal como declara la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada por unanimidad el 31 de octubre del 2000 sobre la mujer, la paz y la seguridad.

*Enfoque de Interculturalidad.* La interculturalidad es el resultado de un proceso histórico que implica la coexistencia de diversas creencias y culturas en un plano de igualdad, comunicación, negociación, cooperación y especialmente convivencia en medio del pluralismo religioso. Para el caso de la política pública, implica un diálogo interreligioso respetuoso de las diferencias, que propenda por una igualdad real y material bajo la comprensión de que todos pueden aportar en la construcción de los bienes comunes para una sociedad más justa y equitativa por encima de las diferencias doctrinales y conceptuales.

*Enfoque de Familia.* Conforme al artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en armonía con el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, la familia se reconoce como el núcleo fundamental de la sociedad. Ello significa que el equilibrio de la familia está íntimamente ligado al equilibrio mismo de la sociedad, pues desde la familia se estructura la vida humana, se establecen las primeras relaciones psicoafectivas, las primeras regulaciones de la conducta, patrones éticos básicos, valores morales, la formación de la personalidad, el primer

contexto de educación y de experiencias sociales y cívicas. La familia es considerada la red social primaria que brinda apoyo espiritual, emocional y material, prioritariamente en circunstancias extremas y adversas. El factor de protección que ofrecen las familias se relaciona positivamente con aspectos espirituales, psíquicos, físicos y psicosociales. En este sentido, las iglesias son claves en la protección, prevención y en el abordaje de conflictos que surgen al interior de estas.

*Enfoque Espiritual y de Creencias Religiosas.* La dimensión espiritual engloba las necesidades, expectativas y esperanzas reales, simbólicas y de sentido de la realidad del ser humano, que lo llevan a reflexionar conscientemente sobre el significado de su vida, su origen, misión y destino. Su existencia desborda la dimensión material, lo que implica algo más que su cuerpo físico y la vida en el aquí y el ahora. La respuesta a estas preguntas incluye generalmente elementos culturales, tradicionales y experienciales que se manifiestan en estilos de vida, doctrinas y ritos.

La dimensión espiritual se despliega en prácticas comunitarias (celebraciones, ritos, cultos) que edifican y sostienen colectivamente las creencias religiosas, ejercidas en atención a una divinidad y sobre un fundamento de verdad y moral cuyo sustento no obedece al canon científico-racional o de comprobación empírica. Este enfoque plantea para el Estado un reconocimiento y respeto por las expresiones religiosas y los principios y valores que guían cada creencia.

*Enfoque Territorial.* Toda interacción humana se despliega e impacta sobre un espacio físico determinado, un entorno colectivo que abarca tanto elementos naturales como equipamientos construidos y adaptados a las demandas materiales y simbólicas subyacentes a la vida social. Correlativamente, los derechos y libertades ciudadanas encuentran en el territorio un medio para su realización, de allí que su configuración, uso y cuidado sea factor decisivo e ineludible que posibilita la consecución práctica de las garantías democráticas.

Esta perspectiva hace del ordenamiento territorial de la ciudad un ámbito que supera aspectos meramente formales o estéticos, para situarlo de manera directa en la esfera de los derechos; de modo que reconoce la importancia de la democratización del uso del espacio público, del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Maestro de Equipamientos de Culto y el Código Nacional de Policía como instrumentos rectores que armonizan el ejercicio y práctica de las libertades de religión y culto con las directrices que fundamentan el desarrollo y uso físico e infraestructural en Bogotá.

## 2.13 Líneas Estratégicas

- ***Pedagógica y de interacción con ciudadanos, funcionarios de los niveles de la Administración Distrital y Gobierno Nacional.***

Fomentar e inculcar el respeto por las ideas, creencias y opiniones individuales desde las libertades de religión, culto y conciencia constituye el primer escenario para la construcción de la paz; es a partir del respeto por las distintas maneras de concebir el mundo que debe posicionarse esta reivindicación en la agenda pública distrital. El Estado democrático, participativo y pluralista está fundado en la dignidad humana y en la coexistencia de todos los ideales políticos, sociales y creencias religiosas de los ciudadanos.

- ***Goce efectivo de los derechos y garantías para el ejercicio pleno de las libertades.***

El Estado Social de Derecho tiene como fin último hacer real y efectiva la vigencia de los Derechos Humanos, de allí la necesidad de ratificar en la persona humana el sujeto, razón y fin del ordenamiento jurídico. Este postulado confirma la relevancia que cobra el reconocimiento de los derechos de religión, culto y conciencia, y con ellos la aconfesionalidad del Estado Colombiano.

- ***Articulación y fortalecimiento de iniciativas de paz y proyectos sociales provenientes del sector religioso, organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y el Estado.***

La ciudad se ve afectada por múltiples problemáticas sociales, en las que intervienen las comunidades religiosas mediante su trabajo en promoción de paz, convivencia armónica y reconciliación. La Administración Distrital debe propiciar la creación de redes interreligiosas que integren alternativas frente a estos problemas sociales y estructurales, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y programas del gobierno nacional y distrital.

## 2.14 Orientaciones para la implementación de la política

La política pública distrital de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia ha sido concebida desde una perspectiva intersectorial, que al asumir como objeto esencial la protección y garantía de un derecho fundamental, demanda en su implementación la confluencia activa y propositiva de diferentes sectores de la Administración Distrital, tal como se detalla en el marco institucional del presente documento (numeral 2.5).

De igual forma, el contenido de las líneas estratégicas incorporadas en la política (numeral 2.13) traza un derrotero de implementación basado en la interacción con organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y entidades públicas del orden nacional, ciudadanos y funcionarios públicos. En tal dimensión, la fase de implementación es ajena a una visión unilateral o unisectorial, pues se propone interconectar una pluralidad de actores sociales e institucionales, cuyo carácter no se asimila únicamente a la condición de beneficiarios, también de corresponsables.

Por cuanto la temática que atiende la política es de inserción reciente dentro de la agenda pública distrital, requiere la concertación y definición de acciones y actividades novedosas, planteadas y enfocadas como pasos (unos sucesivos, otros simultáneos) que en conjunto configuran un proceso integrado y de largo aliento, orientado consecuentemente por los principios, enfoques y objetivos que fundamentan la política misma.

El plan de acción para su implementación deberá ser el resultado de la concertación intersectorial, en orden a determinar la ruta operativa y los elementos técnicos, presupuestales e institucionales que permitan materializar los objetivos propuestos, además de los aspectos centrales a considerar para el adecuado seguimiento y evaluación de la política pública.



## Bibliografía

Acuña S. (2002). La Libertad de Conciencia y el Derecho a Contraer Matrimonio con Eficacia Civil por las Minorías Religiosas. En: Zambrano, V. (Editor). Pluralismo Religioso y Libertad de Conciencia. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Arboleda, C. (2011). Pluralismo, tolerancia y religión en Colombia. Medellín, Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana.

Arlettaz F. (2012). Libertad Religiosa y Objeción de Conciencia en el Derecho Constitucional Argentino. Revista Estudios constitucionales. Vol.10 No.1 (p. 339-372). Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v10n1/art09.pdf>

Alvear, J. (2009). Tolerancia y Estado laico en el liberalismo de John Locke: un desposorio incómodo. Revista Actualidad Jurídica N° 20 – Tomo II (pp. 649-674). Recuperado de: <http://derecho-scl.udd.cl/centro-justicia-constitucional/files/2015/08/Locke-tolerancia-y-Estado-laico.pdf>

BBC Mundo (2015). Del petróleo a la esclavitud: las 6 principales fuentes de financiamiento de Estado Islámico. Recuperado de: [http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151118\\_estado\\_islamico\\_financiamiento\\_gch\\_ilm](http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151118_estado_islamico_financiamiento_gch_ilm).

Beltrán, W. (2008). Aproximación histórico-interpretativa al proceso de diversificación religiosa en Colombia. En: Mirada Pluridisciplinar al hecho religioso en Colombia. Avances de Investigación. Bogotá: Editorial Bonaventuriana.

Beltrán, W. (2013). Del monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización religiosa, secularización y cambio social en Colombia. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Beltrán, W. (2015). Informe final Convenio Interadministrativo N° 1346 de 2015 suscrito entre el Distrito Capital – Secretaría Distrital de Gobierno y la Universidad Nacional de Colombia. Estudio diagnóstico para establecer las principales vulneraciones a los derechos fundamentales de las minorías religiosas que hacen presencia en Bogotá y Diplomado en gestión para la convivencia y la acción social y comunitaria orientado a líderes religiosos.

Beltrán, W. (2016). Informe final de los productos acordados en el Otrosí No. 2 del Convenio Interadministrativo N° 1346 de 2015, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y la Universidad Nacional de Colombia.

Berlin, I. (1988). Cuatro Ensayos sobre la Libertad. Madrid, España: Alianza Editorial.

Bibliowicz, A. (2006). Los Judíos. Revista Semana. Recuperado de: <http://www.semana.com/especiales/articulo/los-judios/81647-3>.

Bidegaín, A. (2005). La Religión en el Conflicto. Diario El Tiempo. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1676452>.

Budismo Colombia (2017). Enseñanzas del Budismo. Recuperado de: <http://www.budismocolombia.org/enseñanzas-1/enseñanzas>.

Castellanos D. (2009). Islam en Colombia: entre la asimilación y la exclusión. Miami, Estados Unidos: Steven J Green School of International & Public Affairs.

Cifuentes M. y Figueroa H. (2004). Corrientes del catolicismo frente a la guerra y la paz en el siglo XX. En: Bidegaín, A. (dir.), Historia del Cristianismo en Colombia. Corrientes y diversidad. Bogotá, Colombia: Taurus.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (s.f). Estructura y composición demográfica de la población. Recuperado de: <https://geoportal.dane.gov.co/atlasestadistico/pages/tome01/tm01itm38.html>.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2005). Censo General. Recuperado de: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1>.

Díaz, A. (2010). Protestantismo histórico y neopentecostalismo en Bogotá: un análisis comparado entre la Iglesia Presbiteriana de Colombia y la Misión Carismática Internacional (Tesis de pregrado). Universidad del Rosario, Bogotá.

Durkheim, E. (2008). Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid, España: Alianza Editorial.

Echeverri, A. (2012). Libertad Religiosa y Educación en Colombia: Ni intocables ni míticas. Revista Científica Guillermo de Ockham. Vol. 10, No. 1 (pp. 123-134). Recuperado de: [https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?query=Dismax.DOCUMENTAL\\_TODO=libertad+religiosa+y+educacion+el+colombia](https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?query=Dismax.DOCUMENTAL_TODO=libertad+religiosa+y+educacion+el+colombia).

García, J.H. (2007). Breve Historia de los Hermanos Menonitas en Colombia. Tesis de Grado para la obtención de título de Licenciatura en Teología. Facultad de Teología Universidad Evangélica de Paraguay. Recuperado de: [http://www.anabaptistwiki.org/mediawiki/index.php?title=Breve\\_historia\\_de\\_los\\_Hermanos\\_Mennonitas\\_en\\_Colombia](http://www.anabaptistwiki.org/mediawiki/index.php?title=Breve_historia_de_los_Hermanos_Mennonitas_en_Colombia).

Geertz, C. (1996). La interpretación de las culturas. Barcelona, España: Gedisa.

Gómez, E. (2009). Encuesta de permanencia y cambios de identidad política y religiosa en Bogotá: ¿Qué nos dice la encuesta de permanencia y cambios de la identidad política y religiosa en Bogotá? Franciscanum. Revista de las Ciencias del Espíritu. Vol 51, No. 152 (pp.17-47). Recuperado de: <http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Franciscanum/article/viewFile/2304/2021>.

González, G. (2014). La libertad religiosa y la libertad de conciencia. Conferencia dictada en el marco de las Jornadas "La libertad religiosa en la sociedad pluralista". Área Ciencias de la Religión del Departamento de Formación Humanística. Universidad Católica del Uruguay. Recuperado de <http://docplayer.es/12825658-La-libertad-religiosa-y-la-libertad-de-conciencia.html>

González, R. (1997). Derecho Eclesiástico Mexicano. Ciudad de México, México: Editorial Porrúa.

Hervada, J. (1984). Libertad de Conciencia y error sobre la moralidad de una terapéutica. Persona y Derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos. No. 11 (pp. 13-54). Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=902832>.

Hervada, J. (1992). Libertad de Pensamiento, Libertad Religiosa y Libertad de Conciencia. Recuperado de <http://www.dikaion.unisabana.edu.co>.

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (2017). Resumen Histórico de la Iglesia. Recuperado de: <http://www.iglesiasjescristosud.org/historiadelaiglesia/resumen-historico-de-la-iglesia-colombia>.

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (2017). Historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Recuperado de: <https://www.ipuc.org.co/resena-historica/>.

Islam-Alfayer. Sitio de Difusión Islámica y Cultural (2014). Islam en Colombia. Recuperado de: <https://islamalfayer.com/historia-del-islam-en-colombia/>.

James, W. (1902). The Varieties of Religious Experience. Cambridge, Estados Unidos: The Riverside Press.

Jellinek, G. (2000). La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ciudad de México, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Estudios Jurídicos No. 12. Universidad nacional Autónoma de México.

Küng, H. (2008). Ética mundial en América Latina. Madrid: Trotta. Recuperado de [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0120-00622008000200009](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00622008000200009)

Llamazares, D. (1989). Derecho Eclesiástico del Estado. Madrid, España: Ariel.

Madrid -Malo, M. (1998). Constitución Política de Colombia, Comentada por la Comisión Colombiana de Juristas. Preámbulo, Título I de los Principios Fundamentales, Título XIII de la Reforma de la Constitución. Recuperado de: [http://www.coljuristas.org/documentos/libros\\_e\\_informes/cpc\\_pre\\_titulo\\_i\\_y\\_xiii.pdf](http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/cpc_pre_titulo_i_y_xiii.pdf)

Malishev, M. (2014). Kant: ética del imperativo categórico. Revista la Colmena 84 (pp. 9-21). Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5492993.pdf>.

Martín, I., (1993). El Derecho de Libertad Religiosa en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Ius Canonicum. Vol. 33 (pp. 61-96). Recuperado de: <http://dadun.unav.edu/handle/10171/16710>.

Martín, I(s.f). La Libertad Ideológica y Religiosa. Curso de verano Derecho y Conciencia. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado de: [www.studylib.es/doc/5610694/la-libertad-ideologica-y-religiosa](http://www.studylib.es/doc/5610694/la-libertad-ideologica-y-religiosa)

Martínez J. (1992). Las objeciones de conciencia y los intereses generales del ordenamiento. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Vol. 79 (pp. 199-218). Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=793059>

Ministerio de Cultura República de Colombia (2014). Los Árabes en Colombia (Documento Investigativo). Bogotá D.C.

Ministerio del Interior República de Colombia (2016). Directrices jurídicas participación ciudadana y política pública del Sector Religioso en Colombia. Bogotá D.C.

Moreno, P. (2004). Protestantismo Histórico en Colombia. En: Bidegaín, A. (dir.), Historia del Cristianismo en Colombia. Corrientes y diversidad. Bogotá, Colombia: Taurus.

Osterwald, A. (2013). Los judíos colombianos, la historia de un pueblo escondido (Tesis de pregrado). University Honors in Spanish Studies, Indiana, Estados Unidos.

Otero, S. (2008). La iglesia como actor de la gobernanza en Colombia. Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza – IRG. Recuperado de: <http://www.institut-gouvernance.org/es/document/fiche-document-148.html>.

Parra, O., Góngora, M. E. (2004). Derechos de Libertad. Defensoría del Pueblo República de Colombia.

Plata, W. (2004). Del catolicismo ilustrado al catolicismo tradicionalista. En: A. Bidegaín. (dir.), Historia del Cristianismo en Colombia. Corrientes y diversidad. Bogotá, Colombia: Taurus.

Plata, W. y Vega, J. (2015). Religión, conflicto armado colombiano y resistencia: un análisis bibliográfico. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. Vol. 20 Núm. 2. Recuperado de: <http://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/5054/6081>.

Periódico Excelsior (2015). El Estado Islámico voltea hacia América Latina. Recuperado de: <http://www.excelsior.com.mx/global/2015/02/22/1009648>.

Revista Semana (2005). Violento Martirio. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/violento-martirio/71517-3>.

Revista Semana (2012). La Secta más peligrosa está en Colombia. Recuperado de: <http://www.semana.com/enfoque/enfoque-principal/articulo/la-secta-mas-peligrosa-esta-en-colombia/261192-3>.

Rodríguez, J. (2004). Primeros intentos de establecimiento del protestantismo en Colombia. En: A. Bidegáin. (dir.), Historia del Cristianismo en Colombia. Corrientes y diversidad. Bogotá, Colombia: Taurus.

Rognon, F. (1996) La religión. Paris: Hatier Profil.

Salcedo J. (1997). Libertad de Pensamiento, Libertad Religiosa y Libertad de Conciencia. Revista Anales de Derecho. No. 15 (pp 87-104). Recuperado de: <http://www.revistas.um.es/analesderecho/article/download/81451/78601>.

Saldaña, J. (1998). Derecho y Religión. Un breve análisis retrospectivo de las relaciones Iglesia-Estado en México. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Número 92 (pp. 457-476). Recuperado de: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3547/4243>.

Saranyana, J. y Alejos C. (2002). Teología en América Latina. El siglo de las teologías latinoamericanistas (1899-2001). Vol. III. Recuperado de <https://books.google.com.co/booksid=M0xTeologenAmArica+LatinaJosIgnacio+SaranyanaIgnacio%20Saranyana&f=Teología+en+América+Latina.-+José+Ignacio+Saranyana&f=false>.

Souto J. (1989). Libertad Ideológica y Religiosa en la Jurisprudencia Constitucional, en: Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del profesor Pedro Lombardía. Madrid.

Stoll, D. (2002). América Latina se vuelve protestante: las políticas de crecimiento evangélico. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.

Vargas G. y Centeno J. (2014). Historia del Pentecostalismo en Colombia (Monografía Investigativa). Medellín, Colombia: Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, Facultad de Teología.

Vigil, J. (2015). Paradigma Pluralista: mirando al futuro. Revista Horizonte, Vol 13 No. 40 (pp. 1755-1789). Recuperado de: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/P.2175-5841.2015v13n40p1755/9065>.

Vizcaino, M. (2010). Estado laico, democracia y derechos fundamentales. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Recuperado de <https://books.google.com.co/books?isbn=05576>

## ANEXO 1.

ASÍ SE CONSOLIDÓ  
LA **POLÍTICA PÚBLICA**  
DE LIBERTADES  
FUNDAMENTALES

# DE RELIGIÓN, CULTO Y CONCIENCIA EN BOGOTÁ

Esta iniciativa busca fomentar el respeto por la libertad e igualdad religiosa, culto y conciencia. Bogotá se convertirá en una ciudad que afianza la pluralidad religiosa.

2014

1.

Empezó el 'Proceso distrital por los derechos de religión, culto y conciencia' con representantes de las entidades religiosas.

2015

2.

Primer **foro distrital** de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia.

3.

**Convenio con la Universidad Nacional de Colombia** para diseñar e impartir la elaboración del Diplomado en gestión para la convivencia y la acción social y comunitaria.

4.

**60 representantes** de iglesias toman este diplomado.

5.

Construcción del mapa de la diversidad religiosa en Bogotá: **517 lideresas y líderes** de **40 comunidades** de fe hicieron parte.

## 2016



6.

Creación de la Subdirección de **Asuntos de libertad religiosa** y de conciencia con el **Decreto Distrital 411 de 2016**.

7.

Inicio de la formulación de la Política Pública con **116 reuniones** de participación, en las que hicieron parte **240 iglesias**.

## 2017



8.

Trabajos de investigación y revisión de bibliografía sobre **libertad religiosa** y **objeción de conciencia**.

9.

**25 reuniones** de concertación con entidades de la Administración Distrital.



10.

## 2018

El Alcalde **Enrique Peñalosa** adopta la Política Pública de Libertades fundamentales de religión, culto y conciencia con el **Decreto Distrital 093 del 12 de febrero del 2018**.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO



## **ANEXO 2. - Indicadores cuantitativos sobre intolerancia, discriminación y persecución religiosa, objeción de conciencia por motivos religiosos y proyectos sociales de las comunidades religiosas en el Distrito Capital (2016).**

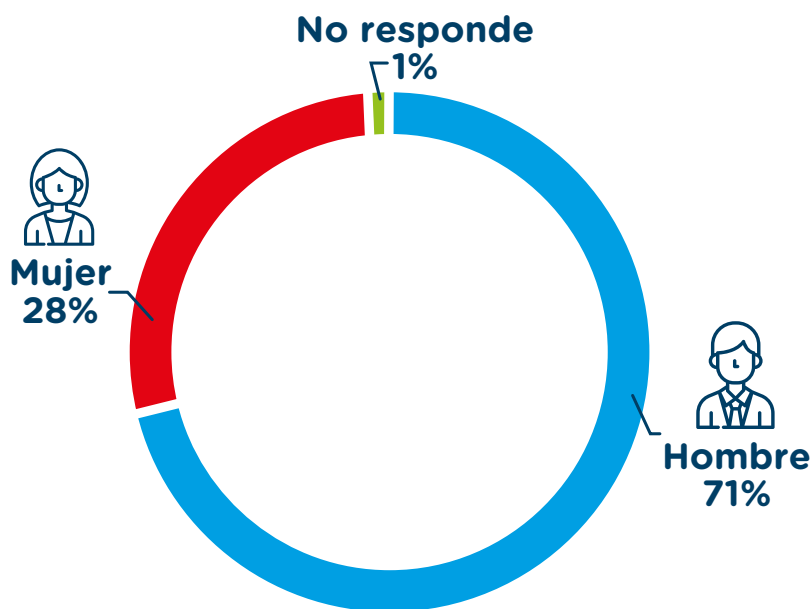
**Convenio Interadministrativo No 1346 de 2015**  
**Secretaría Distrital de Gobierno**  
**Universidad Nacional de Colombia**  
**Responsable: William Mauricio Beltrán**  
**Mardory Llanos- Secretaria Distrital de Gobierno**

La información cuantitativa que se presenta a continuación hace parte de los resultados del Convenio Interadministrativo No. 1346 de 2015, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C y la Universidad Nacional de Colombia con el objetivo de emitir recomendaciones para la construcción de una política pública orientada a garantizar y proteger las libertades y los derechos fundamentales de religión, culto y conciencia en el Distrito Capital.

Fue recabada mediante encuestas aplicadas entre febrero y junio de 2016 sobre un universo de 517 lideresas y líderes religiosos, de los cuales 447 prestan sus servicios a comunidades (congregaciones, capillas, mezquitas, sinagogas) ubicadas en Bogotá, y los restantes en municipios aledaños como Chía, Funza, Fusagasugá, Soacha y Zipaquirá.

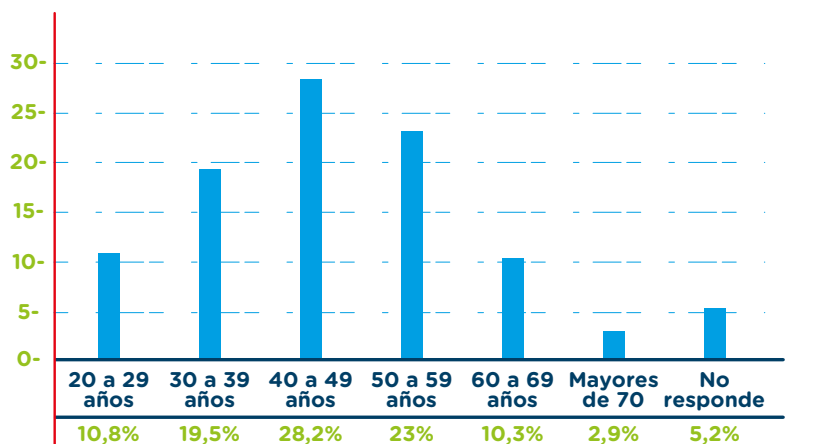
Entre ellos se cuentan católicos, protestantes evangélicos, pentecostales unidos, adventistas, musulmanes, vaishnavas (hare krishnas), judíos mesiánicos, mormones, budistas e hinduistas, que reflejan la composición del mapa de la diversidad religiosa construido y cuya identificación fue extraída de la base de datos del Observatorio de diversidad religiosa de la Universidad Nacional de Colombia.

## Sexo de los líderes religiosos encuestados



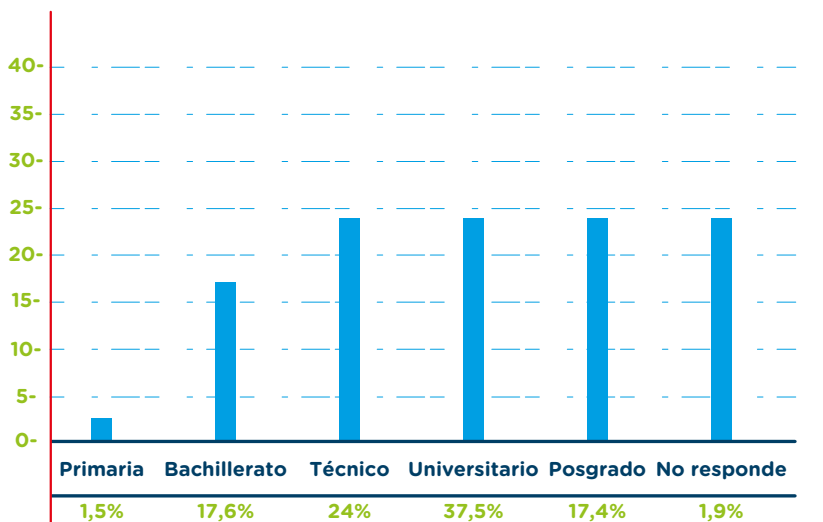
El mayor porcentaje de líderes encuestados son hombres. Esto se debe en general a la tradición de la mayoría de confesiones religiosas que otorga preferencias al liderazgo masculino.

## Edad de los líderes religiosos

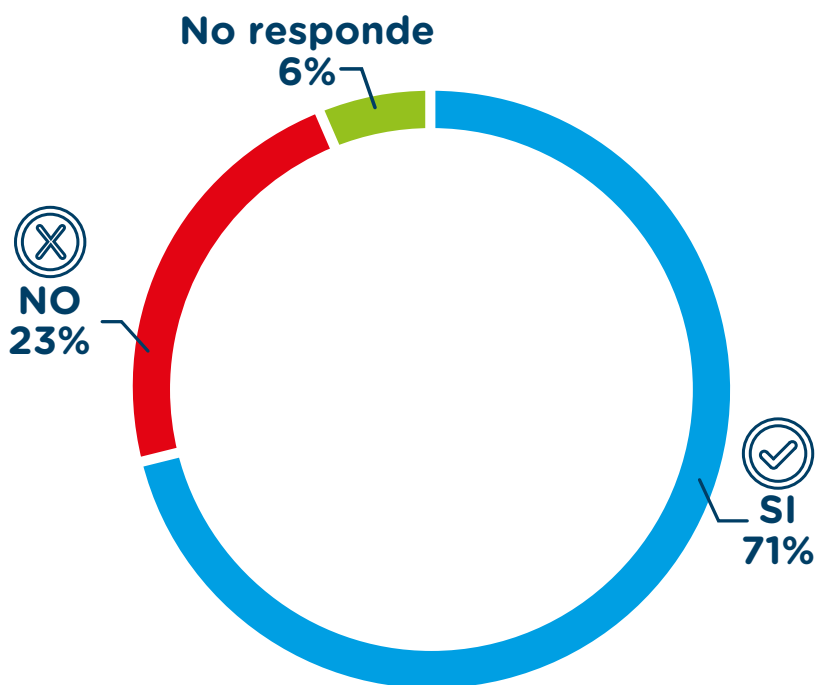


La mayoría de los líderes encuestados se encuentra en un rango de edad que se extiende entre los 30 y los 59 años.

## Máximo nivel de estudios aprobado por los líderes religiosos encuestados

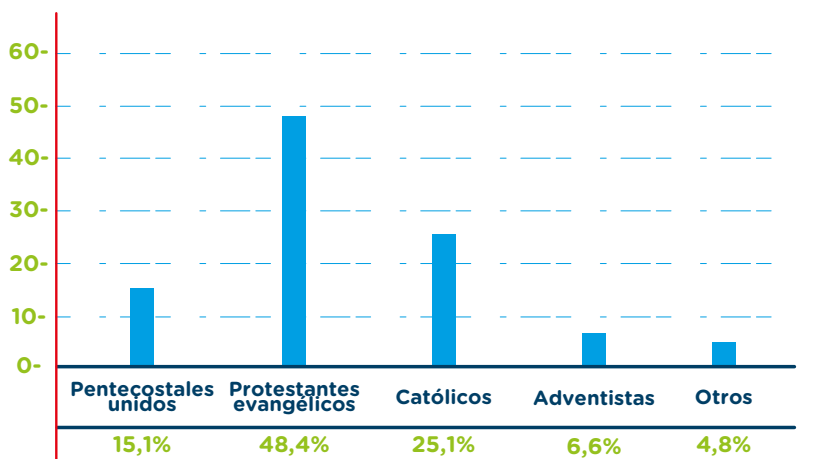


## ¿Cotiza usted a seguridad social?



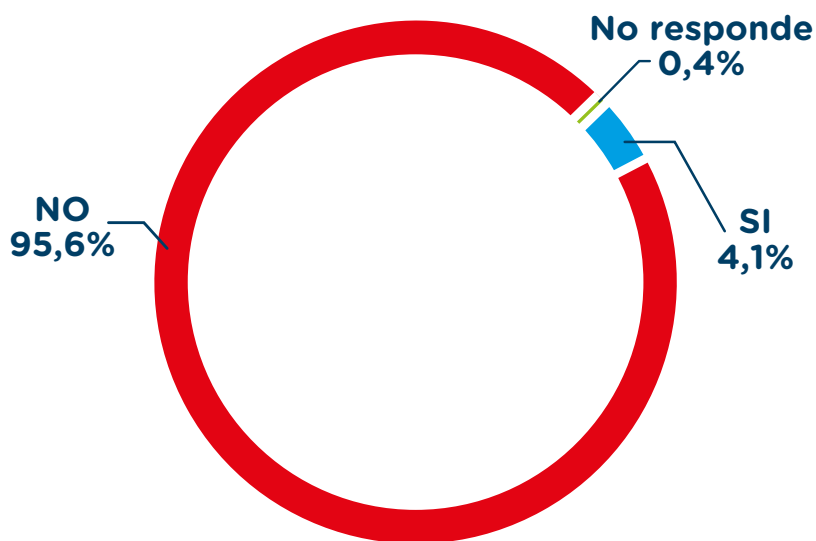
Afiliación a seguridad social de  
líderes religiosos encuestados

## Tipología de confesiones religiosas que hacen parte de la muestra



La categoría otros está integrada por líderes budistas, mormones, vaisnavas, hinduistas, musulmanes, judíos-mesianicos, yorubas y testigos de Jehová. Para ajustar la muestra al tamaño de cada uno de los segmentos se tuvieron en cuenta factores de ponderación. En este sentido es necesario señalar que si bien los católicos son mayoritarios en la ciudad de Bogotá, se tuvo presente que funcionan más congregaciones protestantes que capillas católicas en la ciudad y que, por lo tanto, el liderazgo protestante es numéricamente mayor al católico.

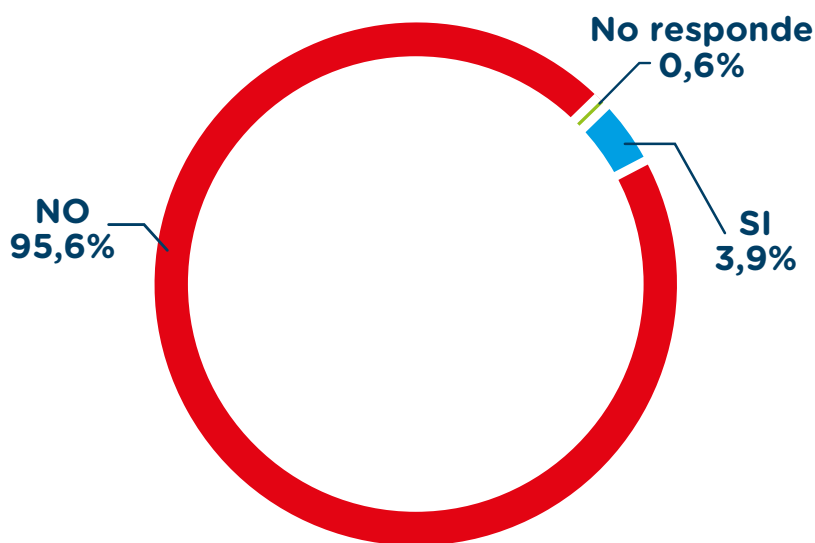
## ¿Ha enfrentado extorsiones?



En los últimos tres años, el 4,1% de los líderes religiosos encuestados ha enfrentado por lo menos una extorsión.

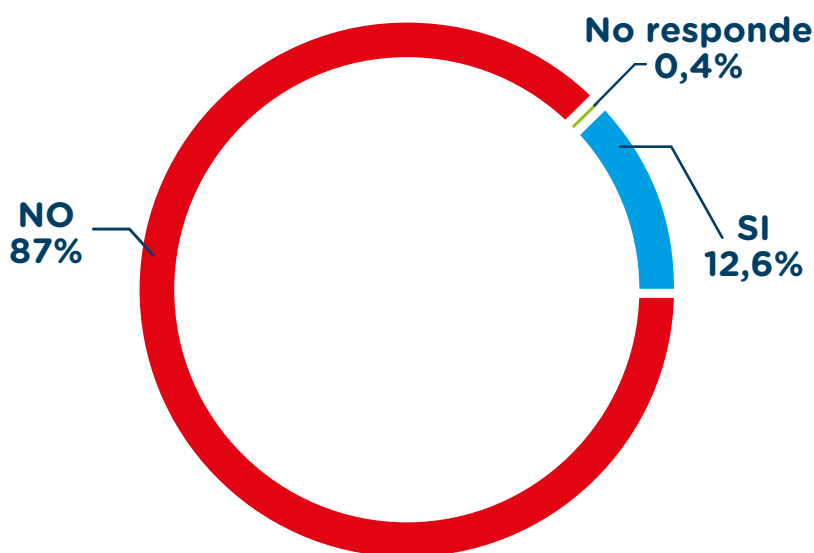


## ¿Ha enfrentado amenazas de secuestro?



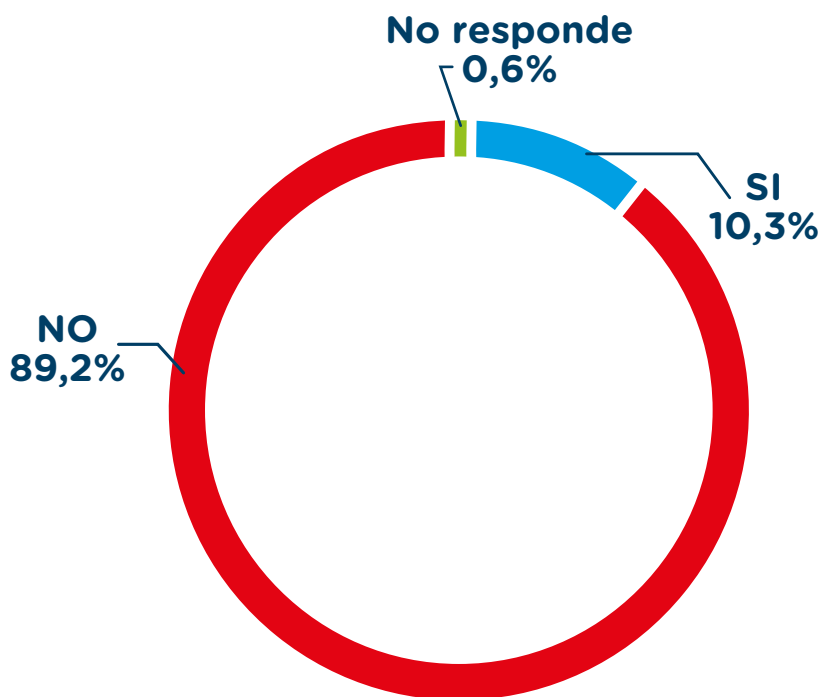
En los últimos tres años, el **3,9%** de los líderes religiosos encuestados ha enfrentado por lo menos una amenaza de secuestro por causa de sus actividades religiosas.

## ¿Ha enfrentado amenazas contra su vida y su integridad?



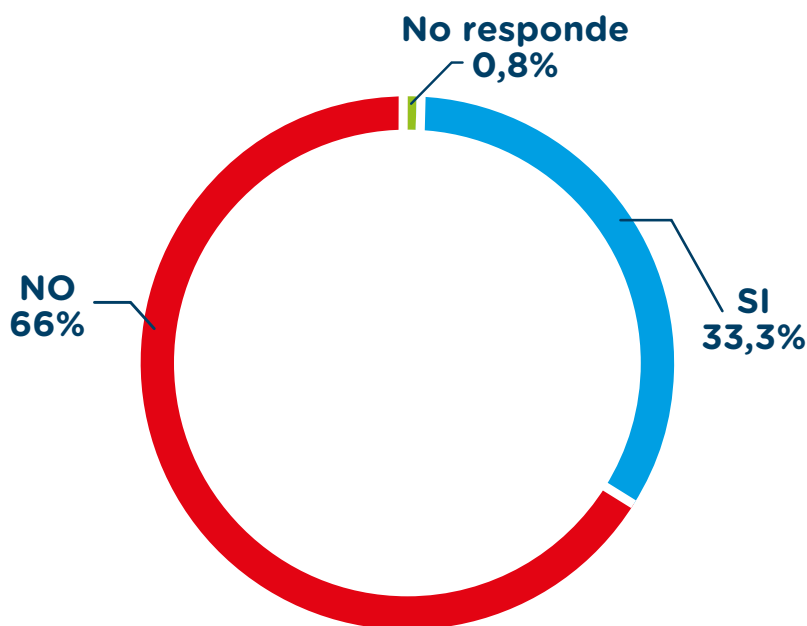
En los últimos tres años, el **12,6%** de los líderes religiosos ha enfrentado por lo menos una amenaza contra su vida y su integridad por causa de sus creencias o de sus actividades religiosas.

## ¿Ha enfrentado agresiones físicas?



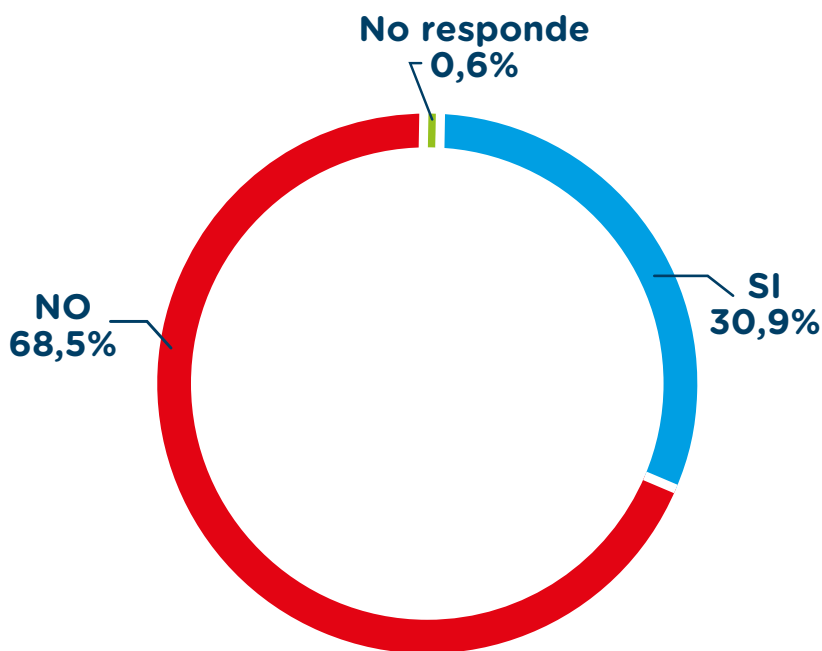
En los últimos tres años, el **10,3%** de líderes religiosos ha sufrido por lo menos una agresión física por causa de sus creencias o actividades religiosas.

## ¿Ha sufrido daños intencionales contra las instalaciones físicas?



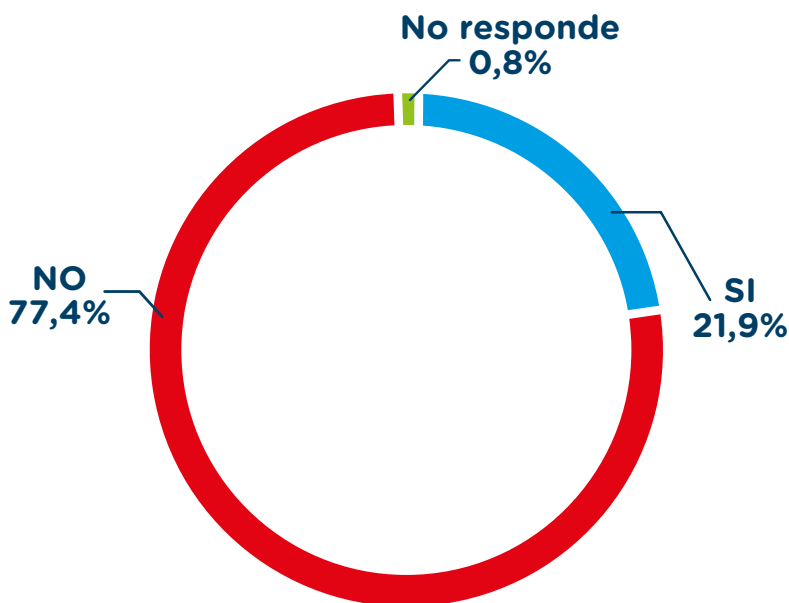
En los últimos tres años, el **33,3%** de los líderes religiosos ha enfrentado por lo menos en una ocasión daños intencionales a las instalaciones físicas del lugar donde celebran las actividades religiosas.

## ¿Ha enfrentado burlas o trato discriminatorio por causa del vestuario?



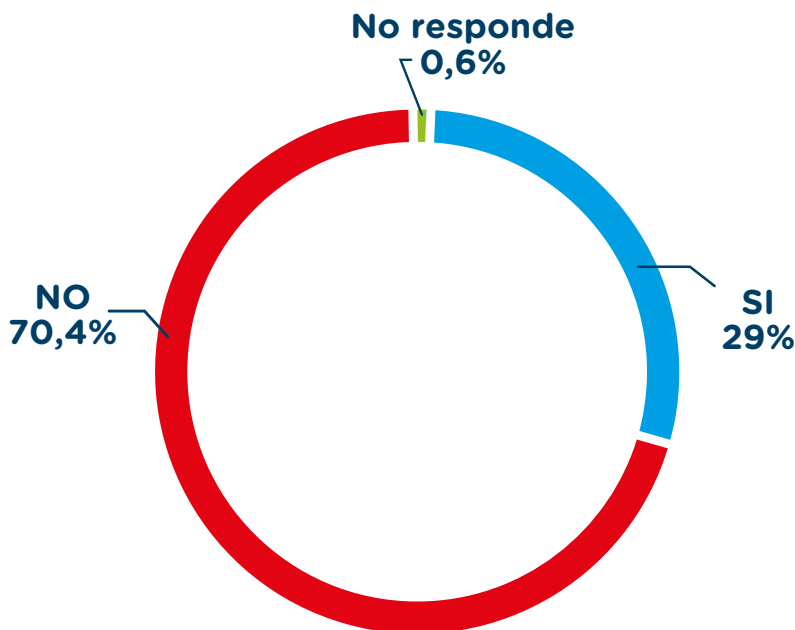
En los últimos tres años, el **30,9%** de los líderes religiosos enfrentó por lo menos en una ocasión burlas o trato discriminatorio por causa del vestuario que corresponde a sus tradiciones religiosas.

## ¿Ha enfrentado burlas o trato discriminatorio por causa de sus costumbres alimentarias?



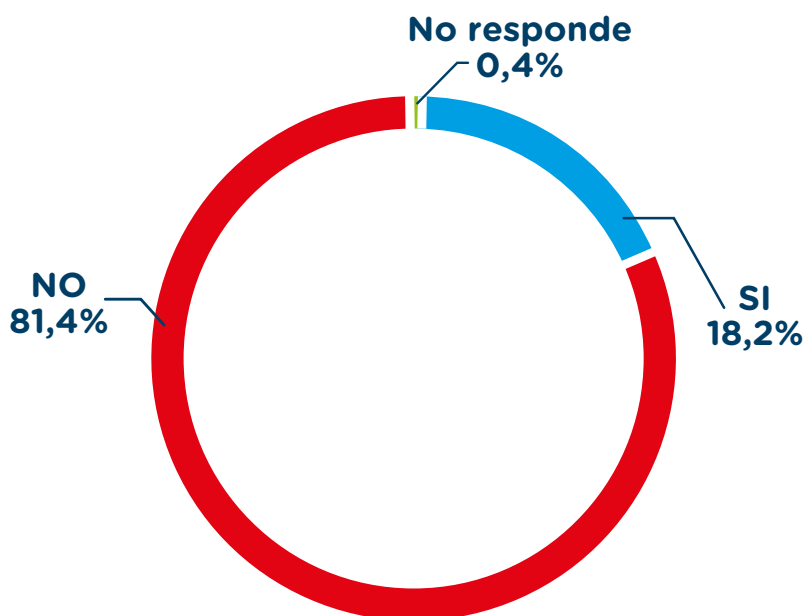
En los últimos tres años, el **21,9%** de los líderes religiosos enfrentó por lo menos en una ocasión burlas o trato discriminatorio por causa de las costumbres alimentarias que corresponden a sus tradiciones religiosas.

## ¿Los medios masivos de comunicación presentaron información malintencionada u ofensiva que afectó la imagen de su comunidad religiosa?



En los últimos tres años, el **29%** de los líderes religiosos dice haber observado por lo menos un episodio en el que los medios masivos de comunicación presentaron información malintencionada u ofensiva que afectó la imagen de su comunidad religiosa.

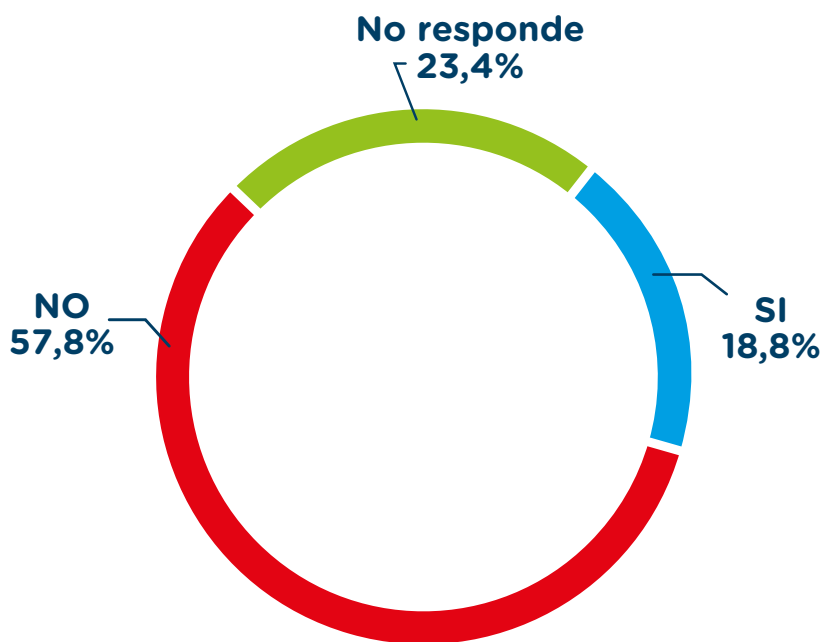
## ¿La policía intervino durante las celebraciones religiosas para multar o retirar los vehículos?



En los últimos tres años, el **18,2%** de los líderes religiosos dice haber sufrido por lo menos un episodio en el que la policía intervino durante las celebraciones religiosas, para multar o retirar los vehículos parqueados en las calles aledañas al lugar donde se realizan las reuniones.

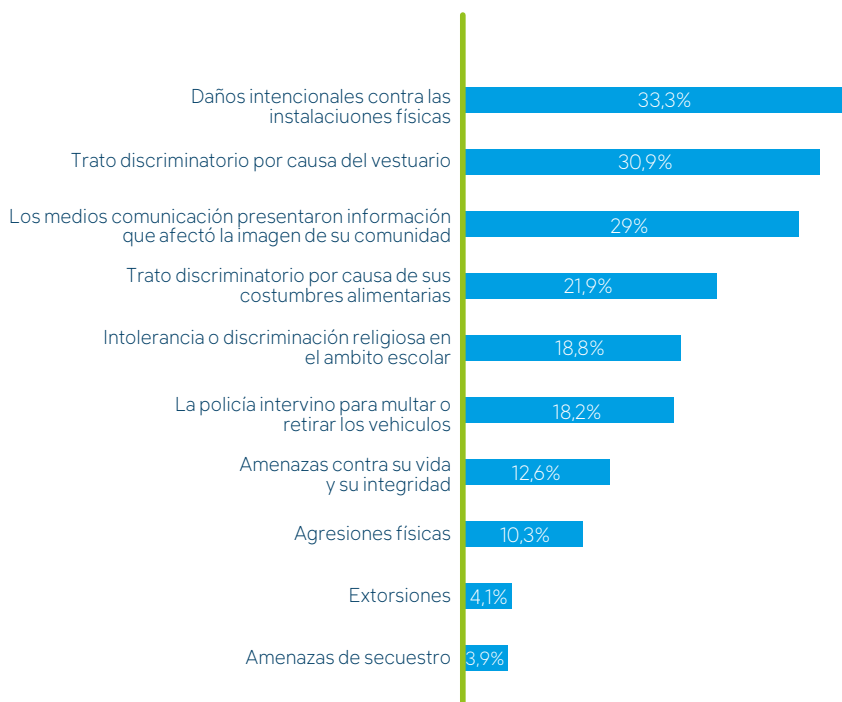


## ¿Niños(as) de su comunidad enfrentaron situaciones de intolerancia o discriminación religiosa en el ámbito escolar?



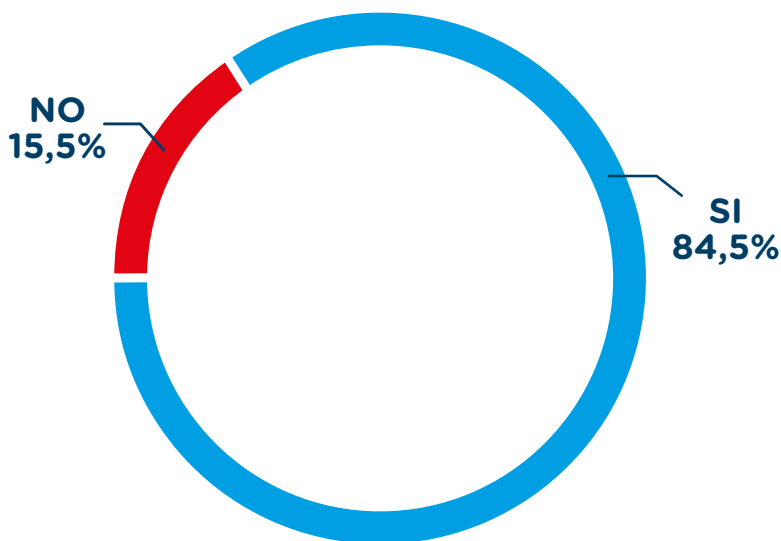
En los últimos tres años, el **18,8%** de los líderes religiosos dice haber tenido conocimiento de por lo menos un episodio en el que niños(as) de su comunidad enfrentaron situaciones de intolerancia o discriminación religiosa en el ámbito escolar.

## Porcentaje de líderes que sufrieron situaciones de intolerancia, discriminación y persecución por motivos religiosos



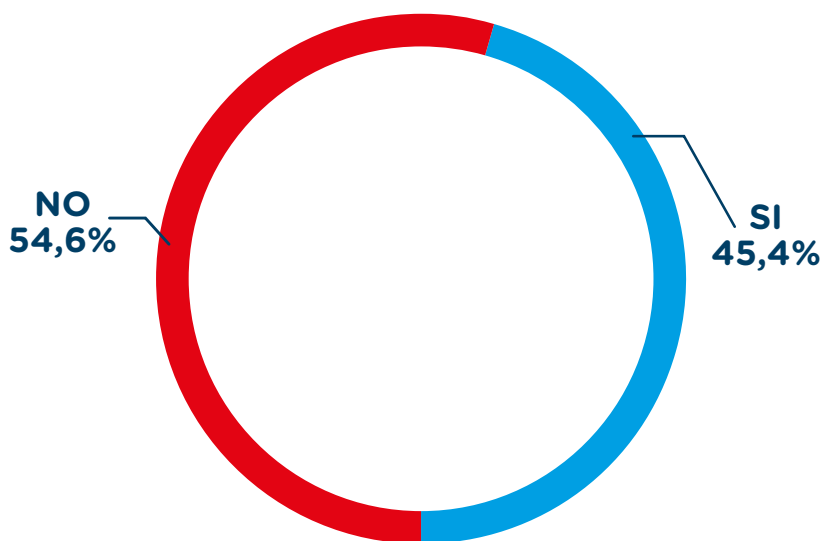
La expresión más frecuente de intolerancia religiosa se manifestó por medio de daños intencionales a las instalaciones físicas del edificio donde se celebran las actividades religiosas.

## ¿Ha enfrentado por lo menos una de estas situaciones en los últimos tres años?



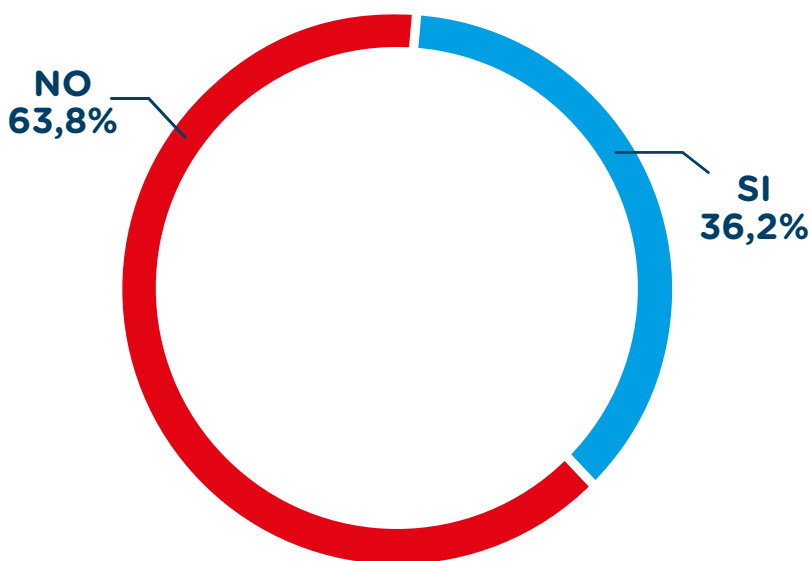
En los últimos tres años, el **84,5%** de los líderes encuestados manifestó haber sufrido por lo menos una de las situaciones de intolerancia, discriminación y persecución religiosa ya mencionadas.

## ¿Ha enfrentado dificultades para prestar sus servicios en clínicas y hospitales?



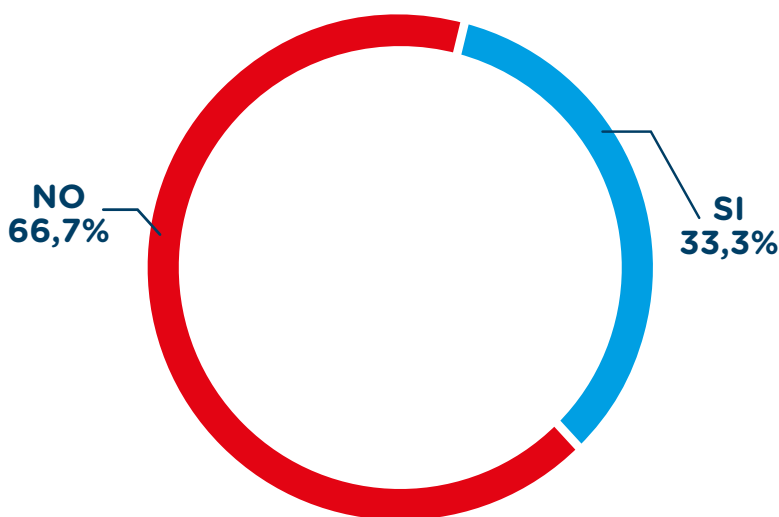
De los **381** líderes religiosos que prestan asistencia espiritual en clínicas u hospitales (**73,7%** del total de encuestados), **173** (equivalente al **45,4%** de los que desempeñan tal labor) han enfrentado dificultades para ingresar o para llevar a cabo dicha actividad.

## ¿Ha enfrentado dificultades para prestar sus servicios en centros de reclusión?



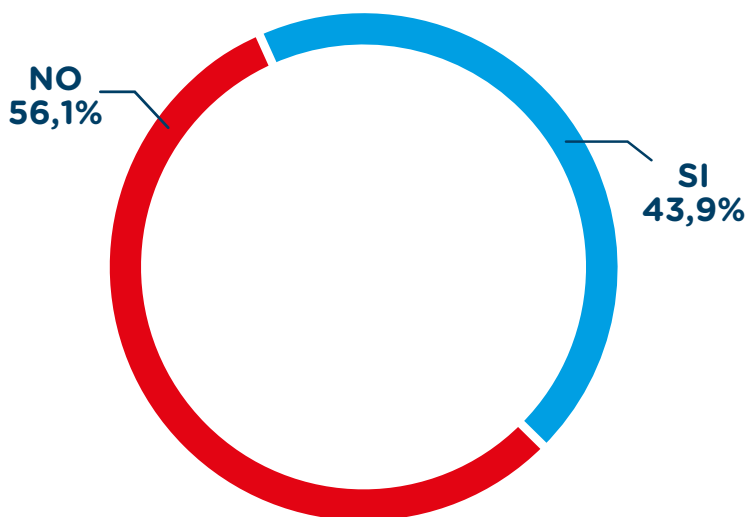
De los **307** líderes religiosos que prestan asistencia espiritual en centros de reclusión (**59,4%** del total de encuestados), **111** (equivalente al **36,2%** de los que desempeñan tal labor) han enfrentado dificultades para ingresar o para llevar a cabo dicha actividad.

## ¿Ha enfrentado dificultades para ingresar o desempeñar sus labores de asistencia espiritual en guarniciones militares?



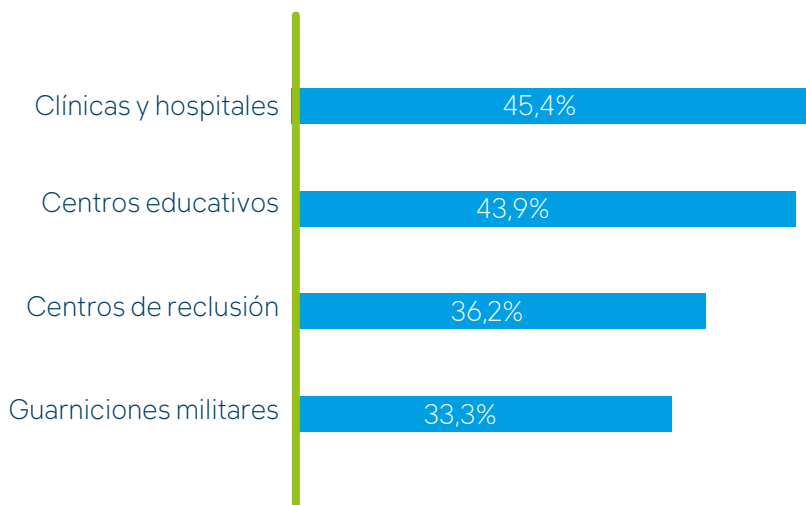
De los **255** líderes religiosos que prestan asistencia espiritual en guarniciones militares (**49,3%** del total de encuestados), **85** (equivalente al **33,3%** de los que desempeñan tal labor) han enfrentado dificultades para ingresar o para llevar a cabo dicha actividad.

## ¿Ha enfrentado dificultades para ingresar o desempeñar sus labores de asistencia espiritual en centros educativos?



De los **362** líderes religiosos que prestan asistencia espiritual en centros educativos (**70%** del total de encuestados), **159** (equivalente al **43,9%** de los que desempeñan tal labor) han enfrentado dificultades para ingresar o para llevar a cabo dicha actividad.

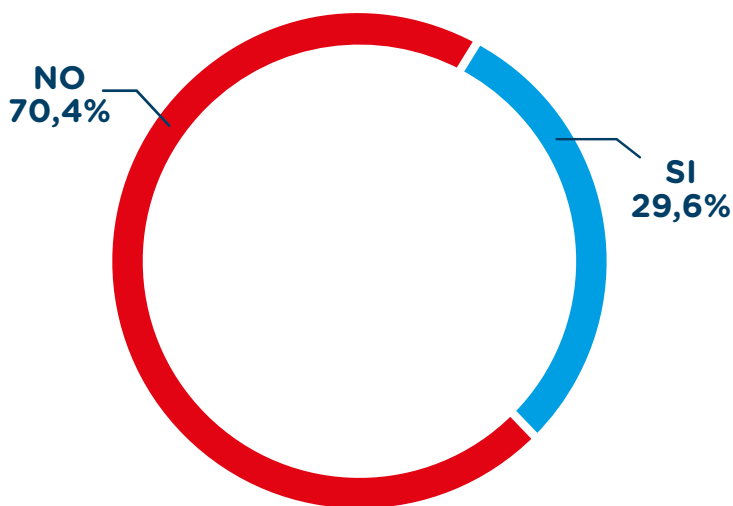
## ¿Ha enfrentado dificultades para ingresar o desempeñar sus labores de asistencia espiritual en...?



Comunidades religiosas que prestan asistencia espiritual en clínicas, centros educativos, centros de reclusión y guarniciones militares, han enfrentado dificultades para ingresar o desempeñar sus labores de asistencia espiritual en estas instituciones.

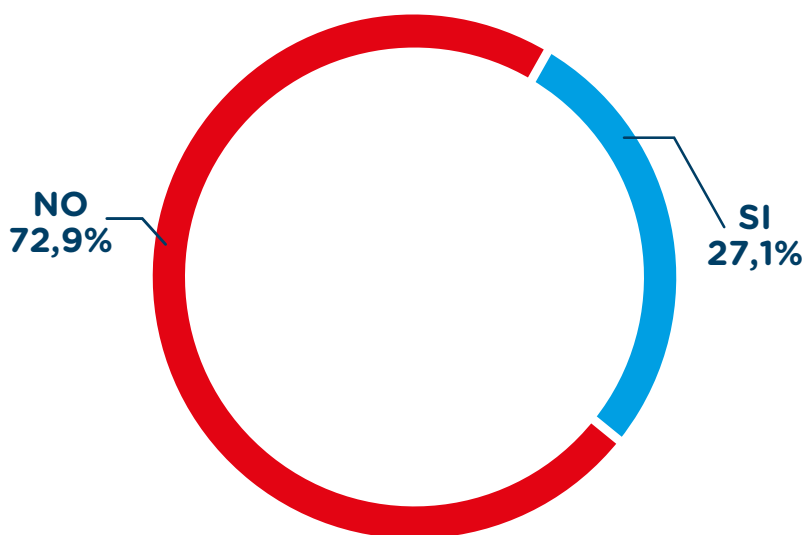


## ¿Ha tenido altercados con los vecinos por causa de vehículos de fieles parqueados en las calles aledañas al lugar de culto?



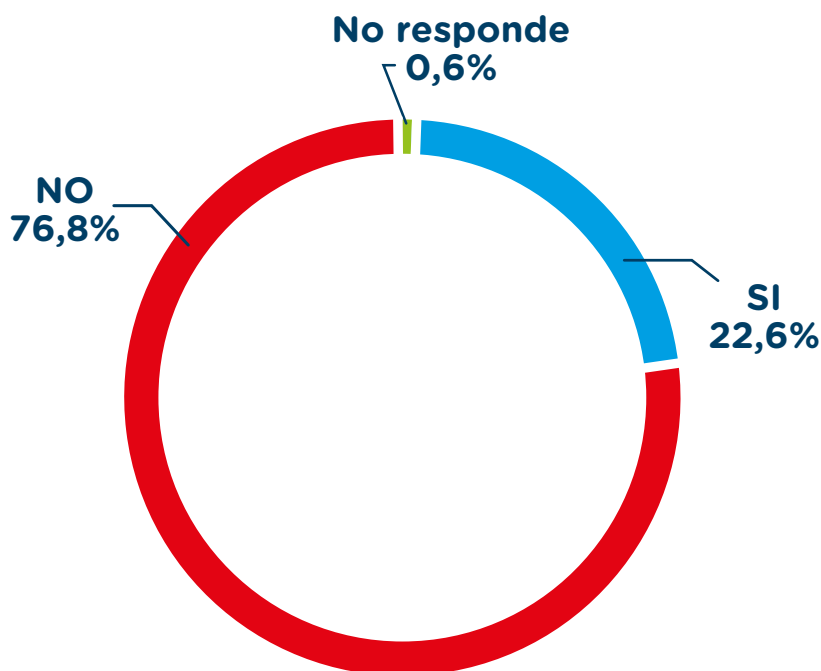
En el último año, el **29,6%** de los líderes religiosos encuestados afrontó por lo menos un altercado con los vecinos por causa de vehículos de fieles parqueados en las calles aledañas al lugar donde se celebran los cultos.

## ¿Ha tenido altercados con los vecinos por causa del ruido que se origina en los cultos?



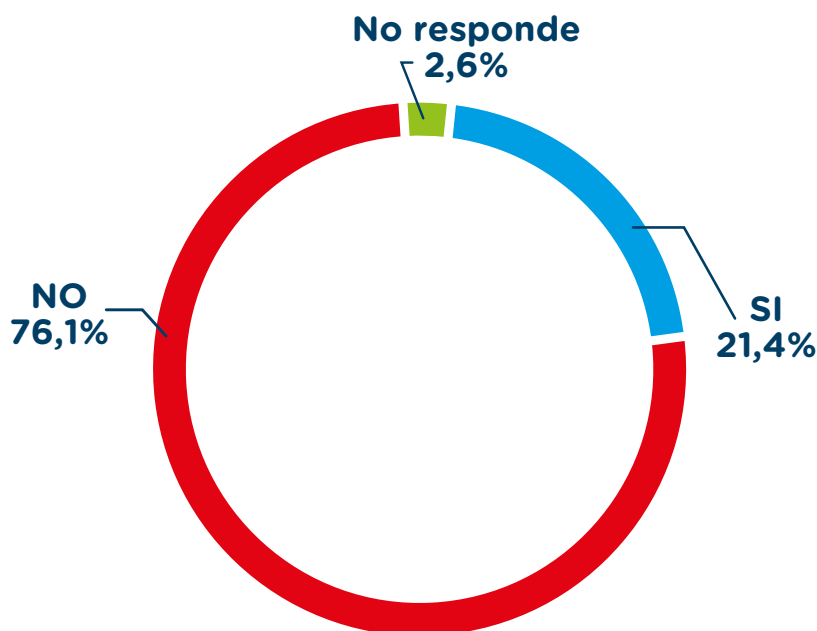
En el último año, el **27,1%** de los líderes religiosos encuestados afrontó por lo menos un altercado con los vecinos por causa del ruido que se origina en los cultos.

## ¿Predica la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio?



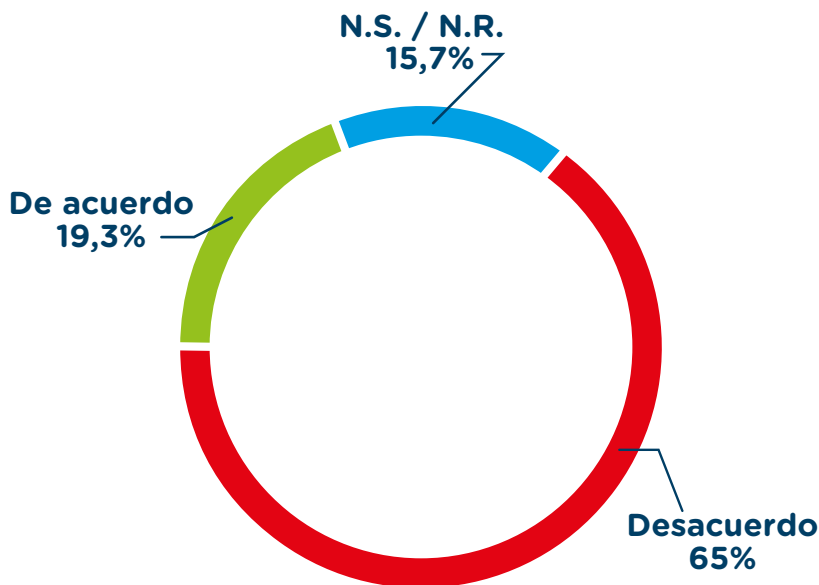
El **22,6%** de los líderes encuestados pertenece a una comunidad religiosa que predica la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

## ¿Algún joven de su comunidad emprendió acciones legales para evitar ser reclutado por el Ejército?



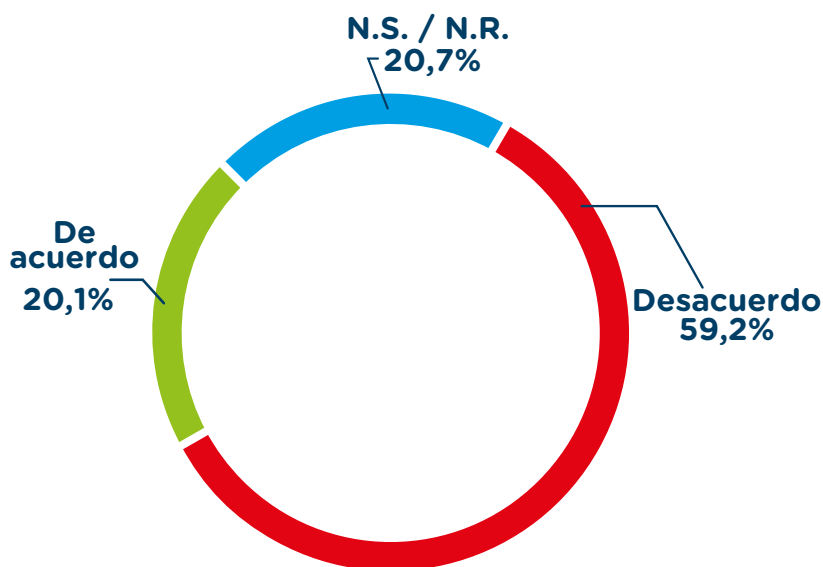
Durante los últimos tres años, de los **117** líderes y representantes religiosos cuyas comunidades predicán la objeción de conciencia (**22,6%** del total de líderes encuestados), **25** de ellos (equivalente al **21,4%** de líderes objetores) han sido testigos de cómo algún joven de su comunidad, objetor de conciencia al servicio militar, se vio obligado a emprender acciones legales para evitar ser reclutado por el Ejército.

## Los contenidos de la clase de religión son adecuados para la formación integral de los estudiantes



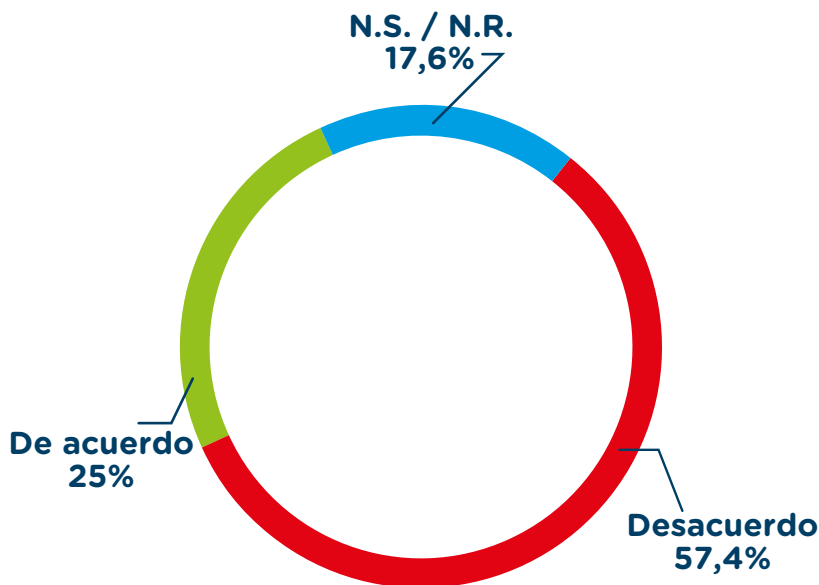
El **65%** de los líderes religiosos está en desacuerdo con la afirmación "los contenidos de la clase de religión son adecuados para la formación integral de los estudiantes".

## En la clase de religión se promueve el pluralismo



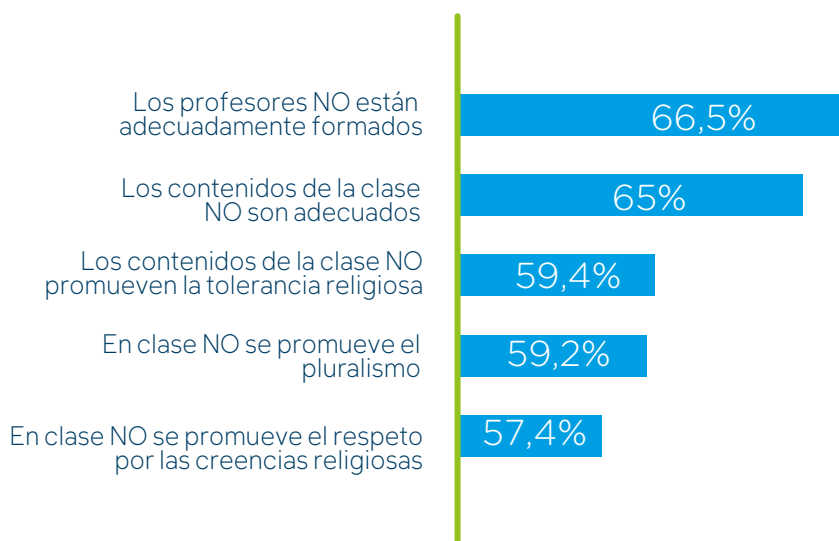
El **59,2%** de los líderes religiosos está en desacuerdo con la afirmación "en la clase de religión se promueve el pluralismo".

## En la clase de religión se promueve el respeto por las creencias religiosas de los estudiantes



El **57,4%** de los líderes religiosos está en desacuerdo con la afirmación "en la clase de religión se promueve el respeto por las creencias religiosas de los estudiantes".

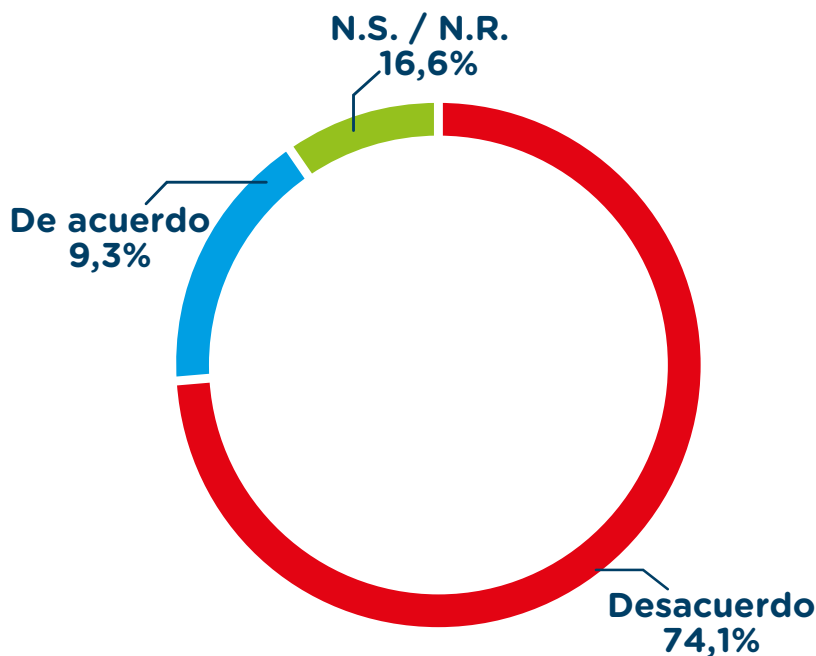
## Percepciones de la clase de religión



Las diferentes indagaciones revelan que, en promedio, el **61,5%** de los líderes encuestados tiene una percepción completamente negativa de la clase de religión que se imparte en los colegios públicos.

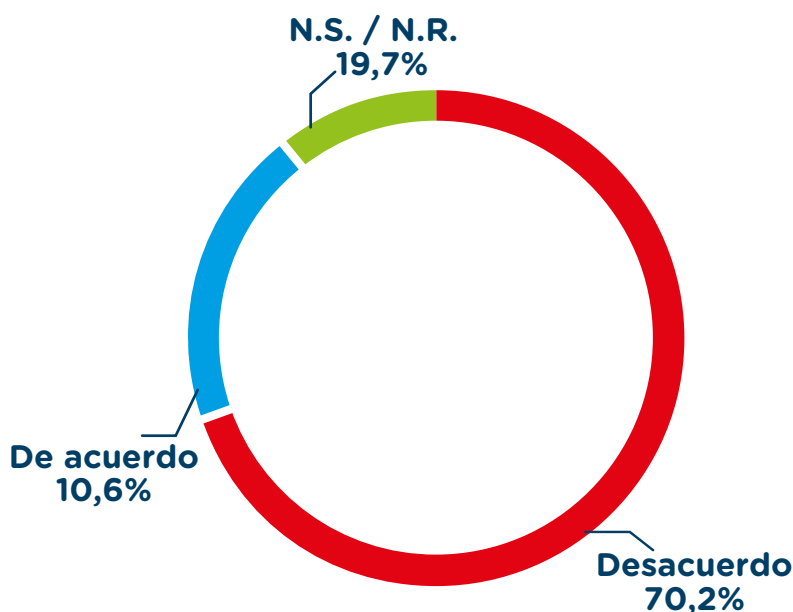


## Los contenidos de la clase de educación sexual son adecuados para la formación integral de estudiantes



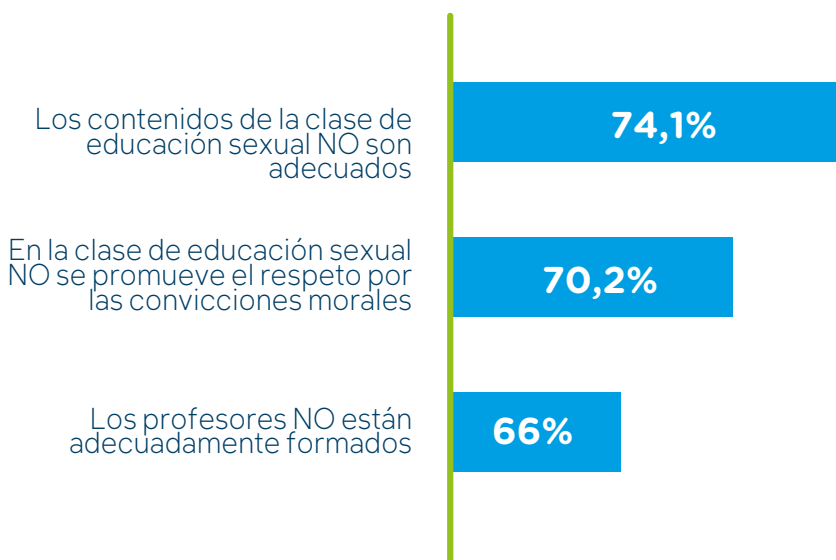
El **74,1%** de los líderes religiosos está en desacuerdo con la afirmación "los contenidos de la clase de educación sexual son adecuados para la formación integral de los estudiantes".

## En la clase de educación sexual se promueve el respeto por las convicciones morales de los estudiantes



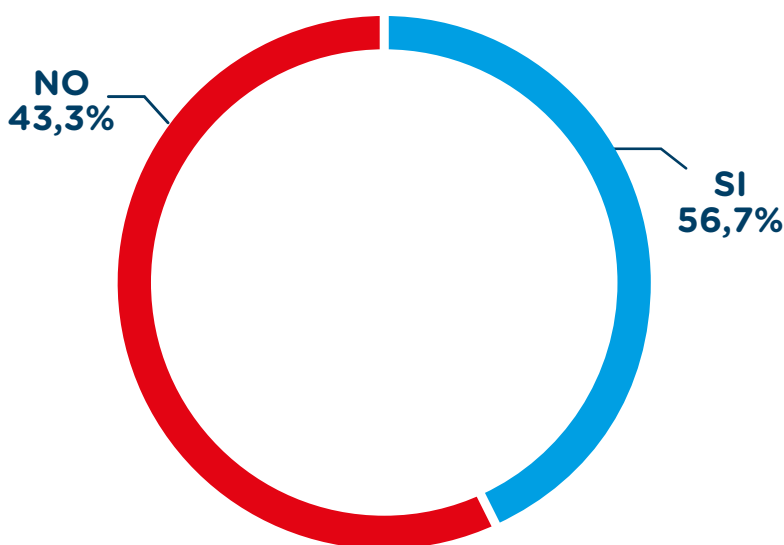
El **70,2%** de los líderes religiosos está en desacuerdo con la afirmación "en la clase de educación sexual se promueve el respeto por las convicciones morales de los estudiantes".

## Percepciones de la clase de educación sexual



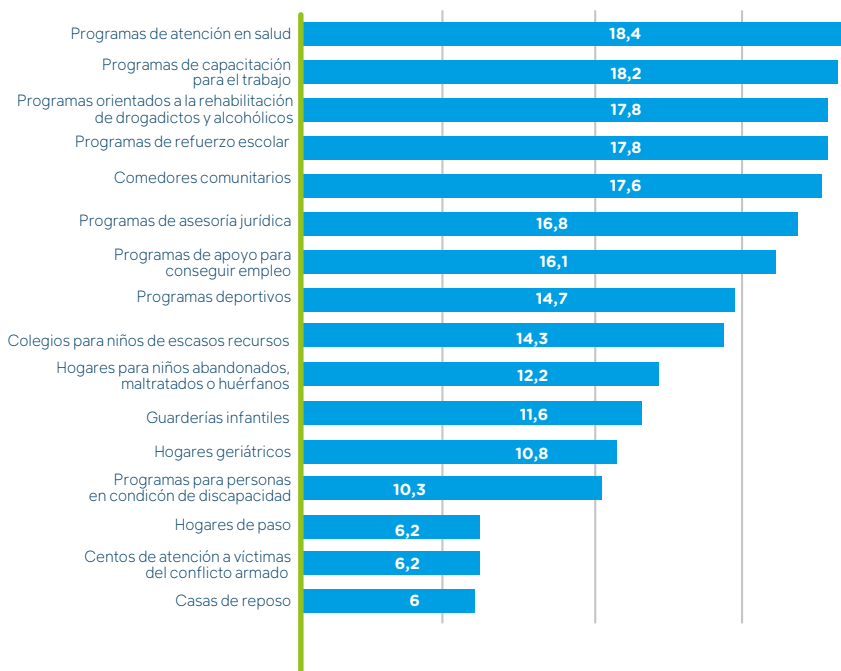
Las indagaciones en la materia revelan que, en promedio, el **70,1%** de los líderes encuestados tiene una percepción completamente negativa de la clase de educación sexual que se imparte en los colegios públicos.

## Sostienen o lideran por lo menos un programa social sin ánimo de lucro



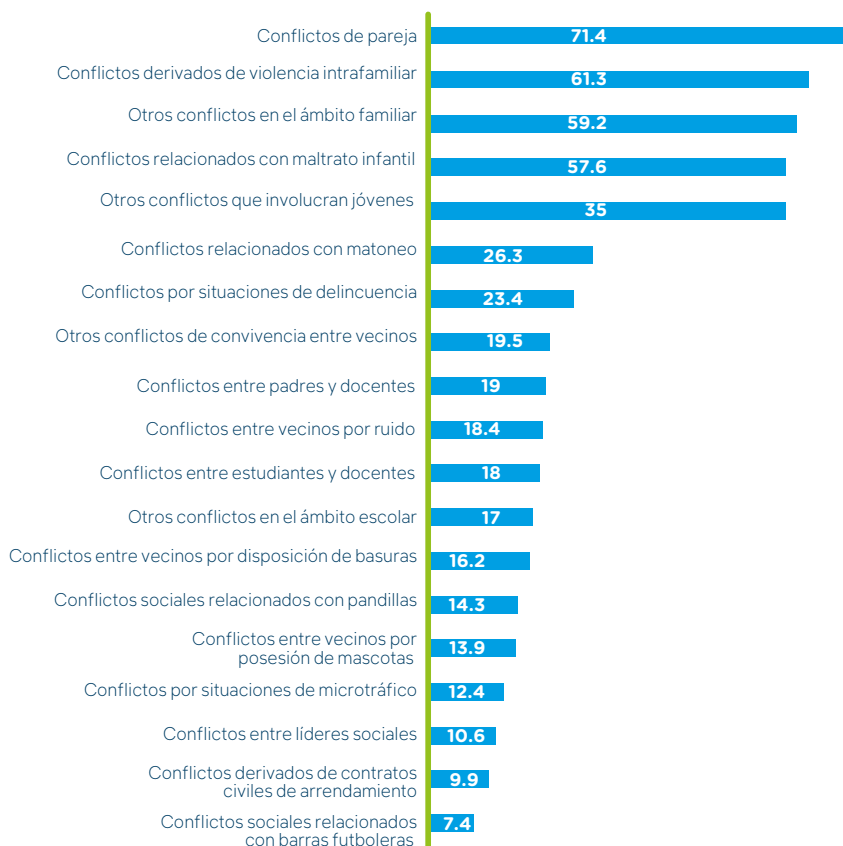
El **56,7%** de los líderes religiosos afirma que su comunidad lidera o sostiene por lo menos un programa social sin ánimo de lucro.

## Porcentaje de programas sociales liderados o sostenidos por comunidades religiosas



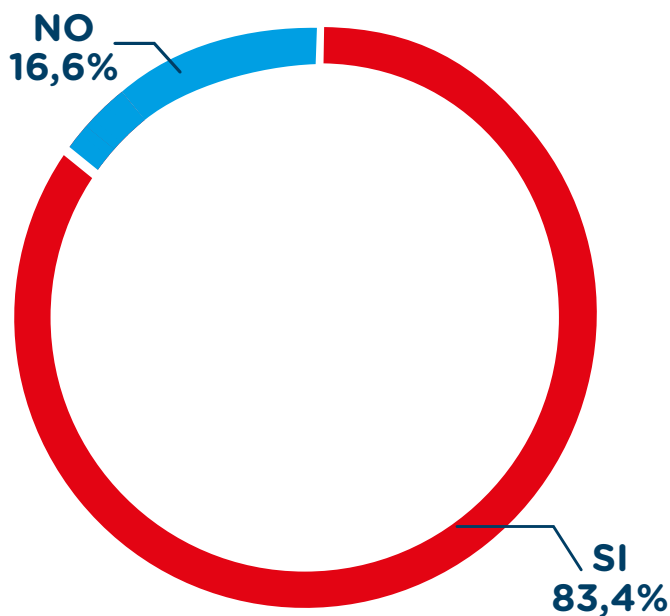
El **18,4%** de los líderes religiosos consultados lidera o sostiene programas de atención en salud.

## Porcentaje de líderes religiosos que interviene mensualmente en situaciones locales de conflicto



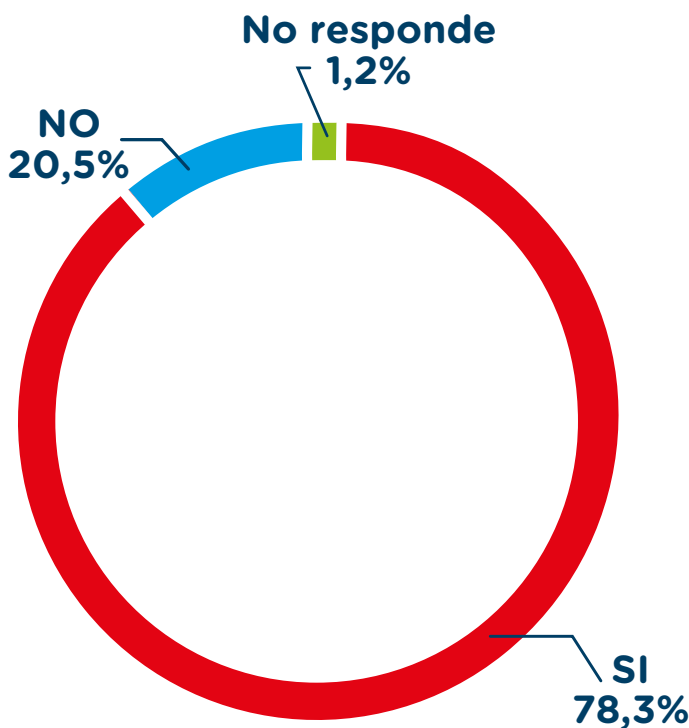
El 71,4% de los líderes religiosos interviene por lo menos una vez al mes en conflictos de pareja.

## Interviene mensualmente en por lo menos un conflicto social de carácter local



El **83,4%** de los líderes religiosos interviene por lo menos una vez al mes en alguno de los conflictos sociales mencionados.

## ¿Su comunidad religiosa estaría dispuesta a integrar una red religiosa e interdenominacional?



El **78,3%** de las comunidades religiosas estaría dispuesta a integrar una red interreligiosa e interdenominacional de organizaciones para la atención a poblaciones vulnerables.





# BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

[www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co)



GobiernoBTA